



pbí



Colombia

15 años



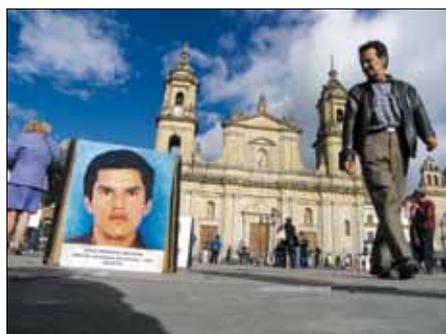
**Acompañando a defensores
y defensoras de derechos humanos**



Sumario

1994 - 1996

- Colombia: un nuevo reto
- Los primeros pasos
- Mirando hacia fuera
- Padre Giraldo: una historia para contar
- «Ceder es más terrible que la muerte»
- Desde el dolor, desde el amor



1997

- Operación Génesis: exigiendo justicia

1998

- Un duro golpe contra las organizaciones
- La masacre que marcó la historia
- Éxodo campesino a causa de la masacre

1999

- Un nuevo equipo en Medellín
- Compartiendo alegrías y tristezas
- «Iñigo y Jorge Luís son como una bandera en nuestra tierra»
- Esperanza y sangre: mi año en Urabá
- Tres años construyendo juntos

2000 - 2001

- El encuentro de los abrazos
- Nos regalamos abrazos
- El duelo del exilio
- Recuerdos de la toma paramilitar
- Navidad de «dolor y sangre» en Barrancabermeja
- Resistir por la vida
- Reconocimiento a un ideal

2001 - 2002

- Resistencia ante un proyecto de muerte

2002

- Una paz aparente
- Operativos contra la población civil

- 4 2003
- 5 Vamos a seguir luchando
- 6 Nuestra fortaleza es creer en lo que hacemos
- 7 2004
- 8 Luchar con dignidad
- 9 PBI y el riesgo continúan a mi lado
- Una misión de verificación a Arauca

2005

- Ejecuciones extrajudiciales en Antioquia
- Una llamada urgente a medianoche
- Reclamando justicia integral

2006

- En medio de la palma resiste Don Petro
- Iniciativas de auto-protección de los pueblos
- 11 Caminando en apoyo al proyecto PBI
- Un viaje al fin del mundo



- 12
- 13
- 14
- 16
- 16
- 17 2007
- 18 Casanare: una batalla contra la impunidad
- 20

2008

- Visibilizar lo oculto
- Mataron a Ualberto

2009

- Una vida robada
- «Toda la vida privada ha sido escrutada»
- Historias para aprender

TRABAJO INTERNACIONAL - GRUPOS NACIONALES

- 28 Exposiciones para sensibilizar
- Un premio a la paz
- Entre Mundos
- Dando a conocer lo innumerable
- Un grupo nacional en Latinoamérica

Financiadores de PBI Colombia

- Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo
- Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo
- Ayuntamiento de Palencia
- Ayuntamiento de Pamplona
- Ayuntamiento de Vitoria
- Broederlijk Delen
- Canton Vaud (Suiza)
- Christian Aid
- Diakonia Suecia
- Diakonisches Werk
- Donaciones individuales
- Fons Mallorquí
- Gobierno de Cantabria
- Gobierno de Navarra
- Intermón-Oxfam (UE)
- Kerk in Actie
- Mensen met een Missie
- Ministerio de Asuntos Exteriores Noruego
- Ministerio de Asuntos Exteriores Suizo
- Misereor
- Overbrook Foundation
- PBI Italia
- PBI Suiza
- Project Counselling Service (UE)
- Servicio Civil de Paz
- Sigrid Rausing Trust
- Trocaire
- Weltwärts
- Zivik



Editorial

15 años de Peace Brigades International en Colombia, 15 años al lado de comunidades y personas defensoras de derechos humanos, 15 años recibiendo agradecimientos, y a la vez agradeciendo las lecciones de valor y dignidad que nos han enseñado. 15 años...y todavía hace falta.



Hoy en día marcamos estos 15 años en Colombia, que son pocos frente a los años que llevan las organizaciones y comunidades reclamando el cumplimiento de sus derechos. Ojalá en un futuro el respeto y el entendimiento de su valiosa labor por parte tanto de las instituciones estatales como de la sociedad, haga innecesaria la presencia de internacionales para su protección.

Esta edición del boletín busca recoger estos 15 años, con sus alegrías, sus lágrimas y sus esperanzas. Damos voz a estas defensoras y estos defensores, así como a las personas que han contribuido a hacer realidad este sueño dedicando un tiempo de sus vidas a PBI.

Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan necesariamente las opiniones de Peace Brigades International, ni de sus financiadores.

Impresión: Editorial CÓDICE Ltda.
Tels.: 2177010 - 2494992
casaeditorial@etb.net.co

Cronología de los acompañamientos de PBI

1994

- Apertura de las oficinas de PBI en **Bogotá** y **Barrancabermeja**
- Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES)
- Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS)
- Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (CIJP)

1995

- Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), nivel **nacional**
- Organización Femenina Popular (OFP) en **Barrancabermeja**
- Comité Regional de Derechos Humanos **Sabana de Torres** hasta la salida forzada de Mario Calixto en 1997

1997/1998

- Apertura de la sede en Turbo para la región de **Urabá**
- CIJP, en **Urabá**
- Comunidad de Paz San José de Apartado, en **Urabá**
- Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y las Comunidades de Paz de San Francisco de Asís, en **Urabá**
- Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), en **Bogotá**
- Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA), en Bogotá y en los departamentos del **Putumayo** y el **Norte de Santander** (Catatumbo).

1999

- Apertura de la sede en **Medellín**
- Seccional ASFADDES, en **Medellín**
- Instituto Popular de Capacitación (IPC), en **Medellín**

- Seccional FCSPP **Medellín**
- Berenice Celeyta, en la ciudad de **Cali**
- Seccional ASFADDES **Barrancabermeja**, hasta la salida forzada a finales de 2000

2000

- Comunidad de Autodeterminación Vida y Dignidad (CAVIDA), **Cacarica** (departamento del **Chocó**)

2001

- Corporación Jurídica Libertad (CJL), en **Medellín**.

2003

- Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC)

2004

- Fundación Manuel Cepeda Vargas, nivel **nacional**

2006

- Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), en los departamentos de **Norte de Santander** y **Sur de Bolívar**

2007

- Asociación de Campesinos de Antioquia (ACA)¹

2009

- Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), en el **Magdalena Medio**
- Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COS-PACC), en **Casanare** y **Boyacá**
- Jorge Molano (abogado), nivel **nacional**

¹ En 2007, PBI comenzó un proceso de acercamiento con la ACA.

Colombia: un nuevo reto

En 1993 cuatro miembros de PBI viajan al país y concluyen que el acompañamiento internacional tiene un papel que jugar en Colombia.

Por: Luis Enrique Eguren (España), miembro fundador de PBI Colombia

Foto: Jorge Mata/Surimages-IPA



Desmovilización de un grupo paramilitar en 2005

Fue una llamada breve de Francesc, cargada de ilusión; algo así como «los fondos ya están, vía libre: viajamos a Colombia». Varias agencias de cooperación, vinculadas a iglesias, habían colaborado, por iniciativa de Werner y PBI Alemania, para cubrir los costos de la misión exploratoria de PBI a Colombia.

¿El objetivo? Estudiar si la experiencia reunida por PBI en Guatemala, El Salvador, Sri Lanka y otros países podría trasladarse a este escenario. Habíamos recibido varias peticiones escritas en este sentido, entre otras por parte de la entonces Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y Eduardo Umaña¹. Desde el principio vimos que la gravedad y complejidad de la situación de derechos humanos en Colombia requería por nuestra parte una aproximación cuidadosa y reflexiva, ya que no había experiencias amplias de acompañamiento internacional en el país. Se trataba de entender, en pocas palabras, si la presencia de internacionales podría ser capaz de proteger a las personas que trabajaban

en la defensa de derechos humanos de las amenazas y ataques, y en qué condiciones o con qué estrategias esto sería posible.

Pocos meses después llegamos a Bogotá a empezar lo que ya adivinábamos iban a ser dos intensos meses de entrevistas, lecturas y viajes: un profundo aprendizaje en el más amplio sentido de la palabra.

El equipo estaba compuesto por cuatro personas de distintos países, todas con experiencia en PBI: Francesc (España), Janey (Estados Unidos), Marcela (Colombia) y Quique (España). Fuimos amablemente acogidos por la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, quien nos hizo un espacio provisional en su oficina como base de operaciones, y nos ayudó con los contactos iniciales, que poco a poco, se fueron convirtiendo en una amplia y variada red. Desde Bogotá se ampliaron las visitas a Barrancabermeja, Barranquilla, Meta y Sucre.

Mirando atrás (hace 16 años de estos hechos), y a tenor de las conversaciones que teníamos como equipo de trabajo entonces, creo que para nosotros cuatro fue uno de los períodos más intensos

de nuestras vidas. Aprendimos sobre un país hermoso, complejo, inmerso en diferentes conflictos a la vez. Tuvimos la inmensa fortuna de que centenares de personas aceptaron compartir con nosotros sus análisis, opiniones y experiencias directas, desde miembros de ONG, comunidades, organizaciones sociales, hasta miembros del gobierno y fuerzas de seguridad, embajadas, etc. Puedo decir también que reímos, lloramos y crecimos como personas. Y Colombia se introdujo en nuestras cabezas y nuestros corazones.

Acabada la misión nos costó varias semanas elaborar un informe, finalmente de más de doscientas páginas, en las que concluíamos que el acompañamiento internacional jugaba un papel importante en Colombia, en determinados escenarios y bajo ciertas condiciones. Basado en este informe, PBI realizó una serie de deliberaciones que culminaron en la decisión de abrir un proyecto en Colombia, tras lo cual se iniciaron las gestiones para la búsqueda de fondos. La idea del acompañamiento ►►

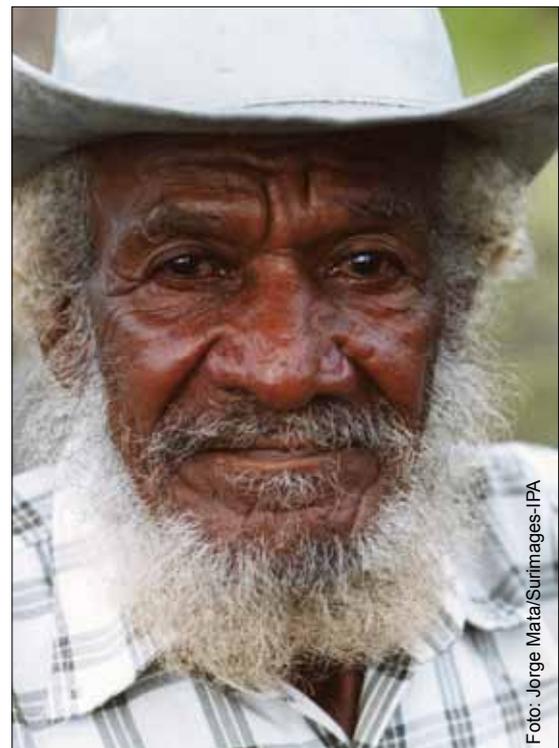


Foto: Jorge Mata/Surimages-IPA

Miembro de la Comunidad de Autodeterminación Vida y Dignidad (CAVIDA) de Cacarica, Chocó

Teníamos tres peticiones muy concretas: una del Padre Javier Giraldo para hacer presencia internacional en el albergue de personas desplazadas de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz en Barrancabermeja; otra de CREDHOS para acompañar en esa misma ciudad del departamento de Santander, y finalmente otra de ASFADDES para acompañar en Bogotá.

En el informe constatábamos que en Colombia no había ni presencia internacional, ni tradición de haberla habido en ningún otro momento. Por lo tanto, la presencia de PBI sería una novedad absoluta, y una necesidad muy sentida por parte de las ONG de derechos humanos.

La exploración fue en mayo y junio de 1993 y el primer equipo de PBI Colombia llegó al país el 3 de octubre de 1994. Tuvimos la impresión, que más tarde se confirmaría, de que sería el proyecto de PBI que iba a contar con más apoyos por parte de personas, ONG, instituciones y embajadas.

Francesc Riera, miembro fundador de PBI Colombia (España)

- fue bien recibida en las agencias de cooperación y pronto pudimos abrir una pequeña oficina de apoyo en Londres, formar a personas voluntarias, hacer otras muchas gestiones, y en noviembre abrimos el primer equipo en Bogotá, que poco después se amplió con un equipo en Barrancabermeja. Ni que decir tiene que sentíamos una enorme responsabilidad: ¿estaríamos en lo cierto al analizar que podíamos ofrecer protección a las organizaciones defensoras de derechos humanos? ¿Estaríamos poniendo en riesgo a los miembros de estas organizaciones y a las personas voluntarias? Afortunadamente el tiempo, la experiencia y todos los apoyos que recibimos desde el principio nos responderían a estas preguntas iniciales y, sobre todo, a otras muchas que han ido surgiendo después, en el desafío constante que es el acompañamiento internacional en Colombia. ●

1 Eduardo Umaña Mendoza era un abogado particularmente prestigioso, encargado de casos muy sensibles y especialmente el de los desaparecidos del Palacio de Justicia y del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Umaña Mendoza fue asesinado en Bogotá el 18 de abril de 1998.

Los primeros pasos

A principios de los 90 se intensifican las presiones de los paramilitares y muchos defensores buscan exilio en el extranjero.

Por: Xabier Zabala Bengoetxea, voluntario del País Vasco (1994-6)

En Barrancabermeja se vivía una época de relativa calma y ahora sí se puede decir con seguridad que era la calma que antecede a la tempestad. Era una ciudad con un equilibrio establecido, con una frontera bien definida entre los barrios orientales y el resto de la ciudad, que separaba mucho más que unos barrios. En este contexto fue difícil concretar el trabajo de acompañamiento ya que las personas defensoras no vivían una sensación de riesgo inminente, y se bromeaba acerca de nuestra impaciencia por concretizar el trabajo.

Con la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) acompañábamos en su oficina a Osiris Bayther (presidenta) y a sus promotores de derechos humanos en salidas a Yondó, El Centro y Cantagallo. Con la Organización Femenina Popular (OFP) se hacían algunos acompañamientos puntuales a los jóvenes de los barrios orientales y se realizaban salidas a municipios. Con el Comité de Derechos Humanos de Sabana de Torres, que pertenecía a CREDHOS, establecimos acuerdos de visitas y recorrimos veredas alejadas de ese municipio, constatando violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH). Vimos

cómo seguidamente fueron los paramilitares los que fueron ocupando el territorio, los vimos llegar en Sabana de Torres además de por Yondó, Cantagallo y cómo iban cerrando el cerco sobre Barranca.

El acompañamiento al Comité de Derechos Humanos de Sabana de Torres, con las figuras de Mario Calixto y Mireia resistiendo a la presión que ejercían los paramilitares, fue una de las más importantes acciones de PBI en aquellos años. Cuando, tristemente, ya no pudieron seguir resistiendo más, ambos abandonaron el país junto con Osiris Bayther, camino del exilio. Los paramilitares terminaron de adueñarse de Sabana de Torres, convirtiéndola en un centro clave de operaciones. El prólogo del ingreso paramilitar en Barrancabermeja estaba escrito, y las consecuencias en violaciones a los derechos humanos, establecimiento de un modelo económico basado en el acaparamiento de tierras y el cercenamiento del espacio para la defensa de los derechos humanos, fueron dramáticas. Diciembre del año 2000 marcó el punto culminante del ingreso de los paramilitares en los barrios orientales de Barrancabermeja: Tora¹ ya no volvió a ser la misma. ●

1 «Tora»: nombre que Laura Restrepo da a Barrancabermeja en su libro «La novia oscura».

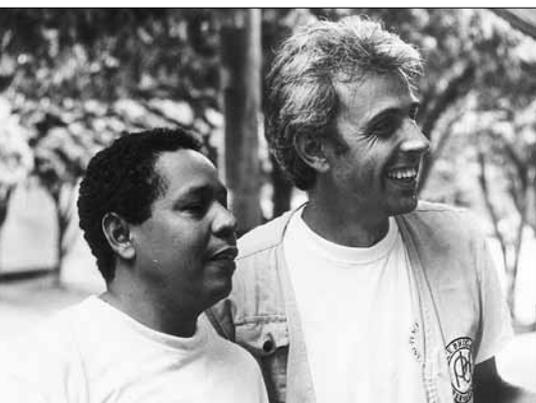


Osiris Bayther (izquierda), junto a la voluntaria británica Tessa Mackenzie

Mirando hacia fuera

En 1994, PBI abre una sede en Barrancabermeja y tres voluntarios empiezan a acompañar a la presidenta de la organización CREDHOS.

Por: Chiara Gambardella, voluntaria de Italia (2008-9)



Francisco Campo (izquierda) junto al voluntario español Ernesto Calvo

Francisco Campo es un activista político que trabajó desde 1987 hasta el 2004 en la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), y actualmente es miembro de la organización Corporación Nación en Barrancabermeja. Sufrió un atentado en su contra en 1989 y por esto tuvo que abandonar Barrancabermeja, pero regresó en 1995 para trabajar con CREDHOS como promotor rural y posteriormente como vicepresidente. PBI acompaña a CREDHOS desde 1994.

PBI: ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a CREDHOS a pedir acompañamiento a PBI?

Francisco Campo: La década de 1986 a 1996 fue un periodo muy duro en el Magdalena Medio, en particular entre 1987 y 1992, cuando se implementó la red de la Armada 007, una red de inteligencia que actuaba con sicarios civiles y en colaboración con el Batallón Nueva Granada. Se les conocía como «escuadrones de la muerte».

Esta «etapa negra» empieza con el asesinato en 1986 de Leonardo Posada Pedraza, representante a la Cámara del partido de la Unión Patriótica. En este contexto en 1987 nace CREDHOS. El deseo de la organización de desenmascarar a los implicados en esta red delictiva tiene un coste muy alto. CREDHOS pierde siete de sus integrantes entre 1991 y 1992 y la casi totalidad de su directiva se ve obligada

a dejar la ciudad e incluso el país. Es en 1993, durante una asamblea que tenía como finalidad reestructurar la dirección de CREDHOS, cuando se decide pedir el acompañamiento de PBI a sugerencia del Padre Javier Giraldo y de algunos miembros de ASFADDES.

PBI: ¿Qué recuerda de las relaciones entre CREDHOS y el primer equipo de PBI?

FC: En 1994 llegó el primer equipo de PBI a Barrancabermeja. Eran sólo tres personas: Javier, navarro (España), Nicole, francesa, y Jenny, norteamericana. A rotación, pasaban el día en la oficina de CREDHOS, en la casa de PBI o acompañando a Osiris Bayther, la presidenta de la organización en aquel entonces, quien corría un riesgo muy alto. Se creó una relación de hermandad, de plena integración con estas personas. Además, era un momento muy romántico: gente del Occidente que dejaba su casa y su proyecto de vida para irse al «tercer mundo» a acompañar a personas que, a su vez,

se estaban arriesgando al acompañar a otras. Fue un reto para ellos: intentar comprender nuestro particular modo de ver la vida les ponía en un estado de desconcierto permanente, que terminó en la creación de unos vínculos muy estrechos.

PBI: ¿Usted qué cree que significó para CREDHOS el acompañamiento de PBI?

FC: En toda esta etapa de consolidación de CREDHOS PBI tuvo un papel fundamental ante todo por el mensaje que transmitió. Estos tres brigadistas representaban el respaldo de la comunidad internacional a CREDHOS. Gracias a la disuasión que PBI tenía hacia el Estado y hacia los mismos grupos armados ilegales, CREDHOS pudo levantar más su voz en la región y ampliar su trabajo a más procesos. Además, el trabajo político que PBI desarrolló en el exterior nos permitió empezar a mirar hacia fuera. PBI fue el vínculo que hizo posible el acercamiento entre CREDHOS y otras organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Christian Aid. ●



Francisco Campo (centro), durante un evento en la ciudad de Barrancabermeja en 2001

Padre Giraldo: una historia para contar

Al conocer la experiencia de PBI en Centroamérica el Padre Javier Giraldo pide acompañamiento en Colombia.

Por: Mari Vera, voluntaria de España (2007-9)

El Padre Javier Giraldo emana serenidad¹. Lleva muchos años al frente de la lucha en la defensa de los derechos humanos y ha sido testigo de episodios de una violencia bárbara, pero aun así conserva el sosiego de quien está convencido de lo que hace y por qué lo hace.

Él es una de las personas clave de la llegada de PBI a Colombia en 1994. A finales de los 80 conoció la experiencia del acompañamiento internacional en Centroamérica y pensó que podía ser una herramienta útil en el contexto colombiano, dada la situación grave que se vivía desde hacía tiempo, con violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Él percibía como crucial el papel de esos «testigos internacionales», personas que llegaban, veían lo que pasaba y luego lo explicaban, para que los hechos no quedaran en la más absoluta impunidad y silencio.

Recuerda con una sonrisa pícaro la cara de espanto de la encargada de PBI Internacional en Londres, cuando le hizo la petición de acompañamiento. Ella solo atinaba a decir que «Colombia es diferente, Colombia es diferente», como única explicación a la negativa inicial de acompañar en el país.

Pero pocos años después, en 1993, llegó una pequeña comisión de exploración cuya misión era ver la viabilidad de un futuro acompañamiento de PBI en el país.



El Padre Javier Giraldo, Mónica de Operazione Colomba (ONG italiana) y la voluntaria italiana Chiara Gambardella

exceso de demanda para un grupo pequeño de voluntarios y voluntarias que no daba abasto. Aún así, destaca como la presencia de PBI ha ayudado a salvar muchas vidas durante todos estos años. Como esa vez en Dabeiba (departamento del Chocó) tomada por los paramilitares, en un retén en el que se rumoreaba se encontraba

Ahí también estuvo PBI, acompañando en momentos de dolor y rabia extremos.

El momento actual presenta un reto para PBI, según la visión del Padre. Las estrategias actuales de ataques a las organizaciones de derechos humanos van más encaminadas a judicializaciones, señalamientos, estigmatizaciones. Son

«LAS ESTRATEGIAS ACTUALES DE ATAQUES A LAS ONG DE DERECHOS HUMANOS VAN MÁS ENCAMINADAS A JUDICIALIZACIONES, SEÑALAMIENTOS Y ESTIGMATIZACIONES».

Después de un mes de observación escribieron un informe de dimensiones colosales. Lo que vieron durante esas pocas semanas fue una presencia cada vez mayor de paramilitares que ejercían su violencia sobre las comunidades provocando desplazamientos, muerte y destrucción. En esa época, las cifras de muertos anuales eran exorbitantes. Al año siguiente PBI volvió a Colombia, esta vez para quedarse.

El Padre recuerda como el principal problema de esos primeros tiempos era el

Carlos Castaño, les hicieron miles de preguntas a las brigadistas que se encontraban acompañando a miembros de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. Finalmente los dejaron pasar sin más implicaciones.

El Padre también destaca el apoyo moral de PBI y recuerda la dura tarea de búsqueda de los cadáveres después de la masacre de La Resbalosa en el 2005, en la que asesinaron a miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

maneras más sutiles de agresión pero los efectos son los mismos: minar el trabajo en derechos humanos, debilitar a las organizaciones, silenciar las denuncias.

La impunidad. Lo que él llama la estrategia de «la toga y el fusil».

El acompañamiento internacional sigue teniendo un papel clave en todo eso. Se cumplen 15 años de nuestra presencia en Colombia, ¿hasta cuando? ●

¹ Este texto está basado en una entrevista con el padre Javier Giraldo, agosto de 2009

«Ceder es más terrible que la muerte»

En 1995 PBI comienza a acompañar a Josué Giraldo, defensor de derechos humanos que luchó por sacar a la luz pública las violaciones de derechos humanos cometidas en Colombia. Fue asesinado un año más tarde.

Por: Soraya Gutiérrez Argüello, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Peace Brigades International comenzó a realizar acompañamiento al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en el año 1995. En este mismo año, tuvieron lugar los primeros contactos de PBI con el Comité Cívico de Meta, constituido como una confluencia de organizaciones de derechos humanos, sociales, médicos, dirigentes agrarios y sindicales y miembros de la Unión Patriótica (UP). Se reunieron a raíz de la grave situación de derechos humanos que enfrentaba el departamento, debido a los asesinatos, amenazas y hostigamientos a los que estaban siendo sometidos líderes sociales y políticos de la región.

Después de constituirse como movimiento político, la Unión Patriótica logró una importante votación en varias regiones de la geografía nacional, lo que les permitió obtener varios cargos a corporaciones públicas. En el Meta, fueron numerosos los alcaldes, concejales y diputados que alcanzaron las curules en representación del naciente partido político. Dado el impacto de la Unión Patriótica en el departamento, se emprendió una política sistemática de persecución y eliminación de sus integrantes por parte de estructuras



La Hermana Noemí del Comité Cívico de Meta, junto a dos voluntarios de PBI

contrarrestar la violencia paraestatal y realizar un fuerte trabajo de denuncia sobre la actuación de las fuerzas paramilitares, los vínculos de Víctor Carranza, importante empresario de esmeraldas, y las Fuerzas Militares, y se denunciaron los centros de entrenamiento de los paramilitares que contaron con la asesoría de mercenarios británicos e israelíes y ex militares del Magdalena Medio.

religiosa Noemí Palencia. Recuerdo a una de las primeras brigadista, era una joven alta, de pelo largo, que se llamaba Pascale, a quien cariñosamente la llamaba «Pascual», porque es un nombre comúnmente utilizado por los campesinos de la región Cundiboyacense.

A principios de 1995, el Comité se vio obligado a cerrar sus puertas, y los miembros fueron desplazados

CON LA ÚNICA ARMA QUE TENÍA, SU VOZ, LAS VOCES DE MILES DE VÍCTIMAS, DENUNCIÓ LO QUE ESTABA OCURRIENDO EN COLOMBIA.

paramilitares que actuaron con la complicidad y aquiescencia de la Séptima Brigada del Ejército nacional¹.

La muerte, la desesperanza y el miedo se fueron apoderando de los habitantes de la región, todos los días aparecían asesinados miembros de la UP. Se calcula que entre 1985 y 1995 se ejecutaron 36 masacres y fueron asesinadas más de 700 personas², incluyendo alcaldes, diputados y otros líderes de la región, todas estas acciones tenían un claro objetivo el aniquilamiento de la Unión Patriótica en Meta³.

Ante este panorama, en el año 1991 surge el Comité Cívico de derechos humanos, como un espacio para

Una vez inició sus actividades, el Comité no fue ajeno a esa campaña de persecución. Ante esta situación, Josué Giraldo Cardona, en su condición de presidente, se desplazó a Bogotá con el ánimo de buscar apoyo y solidaridad y se reunió con organizaciones como la Comisión de Justicia y Paz, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, entre otras.

En este contexto, Peace Brigades International inició un proceso de acompañamiento al Comité Cívico. Los primeros defensores a quienes se les prestó acompañamiento fueron Josué Giraldo y la

forzosamente a Bogotá. Como forma de apoyo a la labor del Comité, iniciamos la campaña *SOS Derechos Humanos por el Meta* y se obtuvo la conformación de una comisión de seguimiento mixta, que incluía a organizaciones de derechos humanos y al Estado colombiano. Contó también con el acompañamiento de la embajada alemana y PBI, quienes contribuyeron al impulso de esta comisión.

Entre los objetivos de la campaña se encontraba el apoyo a los procesos judiciales de varios crímenes cometidos en el departamento. Sin embargo, la falta de voluntad política del Estado colombiano se impuso como una muralla e impidió que este ►►

►► proceso avanzara. A pesar de ello, el trabajo de Josué no cesó, y la incidencia realizada en la campaña motivó una invitación en 1995 para que visitara el Parlamento Europeo y asistiera a las audiencias de la entonces Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Con una maleta cargada de denuncias y con la esperanza de que la solidaridad internacional presionaría para que la situación de derechos humanos mejorara, partió Josué hacia Europa, donde presentó el testimonio desde lo vivido, desde su compromiso con las víctimas, desde su lucha incansable contra la impunidad y la injusticia. Y con la única arma que tenía, su voz, las voces de miles de víctimas, denunció lo que estaba ocurriendo en Colombia. La humanidad con la que pronunció sus palabras logró despertar la sensibilidad de muchos sectores y fue así como el Parlamento Europeo emitió un pronunciamiento sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y en el departamento de Meta. Hoy todavía escuchamos sus palabras:

«La defensa de los derechos humanos surge en mí ligada al problema de la violencia, porque cuando empezamos a gestionar las demandas de justicia en las diferentes instancias judiciales y de control disciplinario, fue acompañando a viudas de asesinados, de desaparecidos. [...] Hemos querido responder con un planteamiento central que es el de la vida. La vigencia de la vida, la indoblegabilidad

de la vida y la urgencia de defenderla para que sea posible la confrontación democrática en el juego civilizado de las palabras y no en los escenarios del asesinato, la masacre o la guerra. [...] Que fuese posible colocar la vida como un valor central, implicó que reclamáramos en consecuencia el cese no solamente de las violaciones a los derechos humanos, sino a la guerra misma. Nuestro mensaje sigue siendo la urgencia de la paz»⁴.

Josué era un ser humano íntegro, un padre y esposo ejemplar, un defensor de derechos humanos dispuesto a defender la vida con dignidad. A pesar de haber sido víctima de un atentado que lo tuvo al borde de la muerte (en su pueblo natal de Pensilvania), no claudicó ante el dolor de las víctimas, no abandonó su lucha por la verdad y contra la impunidad. Esa impunidad que corroe los cimientos más profundos de un Estado, de una sociedad, esa impunidad que ha permitido la repetición de los crímenes, esa impunidad que asesinó a Josué el 13 de octubre de 1996 cuando se encontraba en Villavicencio con sus dos pequeñas hijas de cinco y siete años. Sí, porque a pesar de las amenazas que había contra su vida, quiso ser humano, quiso ser padre, quiso ser amigo. Viajó a visitar a su familia buscando compartir un fin de semana con sus niñas, pero el exterminador de sueños y esperanzas, cegó la vida de este extraordinario ser humano⁵.

Josué solía repetir que «ceder es más terrible que la muerte», y como un homenaje a su memoria publicamos en 1997 el informe con este título. Trece años después del asesinato de Josué, el Comité ha reabierto sus puertas, y con el acompañamiento de PBI continúa aportando a la organización de las víctimas, la reconstrucción del tejido social, y la defensa de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral, para que nunca más se cometan más crímenes. ●

1 «Ceder es Más Terrible que la Muerte: 1985-1996; una Década de Violencia en el Meta», Abogados Demócratas; ASCODAS; Justicia y Paz, Bogotá: 1997

2 «Cortarle las alas a la impunidad», Testimonio de vida de Josué Giraldo. Testimonio recogido por Luis Guillermo Pérez Casas, Centre National de Développement au Coopération, Bruselas, Bélgica: 1997, página 25

3 «Ceder es Más Terrible que la Muerte: 1985-1996; una Década de Violencia en el Meta», Abogados Demócratas, ASCODAS, Justicia y Paz, Bogotá: 1997

4 «Cortarle las alas a la impunidad» Testimonio de vida de Josué Giraldo. Testimonio recogido por Luis Guillermo Pérez Casas, Centre National de Développement au Coopération, Bruselas, Bélgica: 1997, página 104

5 «Durante el 53 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas se rindió un minuto de silencio en la plenaria del 11 de marzo de 1997 en homenaje a la memoria de Josué Giraldo. [...] En el mismo sentido el Relator contra las Ejecuciones Sumarias, señor Bacre Maly Ndiaye, en la plenaria del 9 de abril de 1997, manifestó que "los defensores de los derechos humanos, como en el caso de Josué Giraldo, merecen más que un homenaje póstumo. Nosotros les debemos, gobiernos y órganos de Naciones Unidas, respeto y protección". Tomado de «Cortarle las alas a la impunidad» (página 114)

Desde el dolor, desde el amor

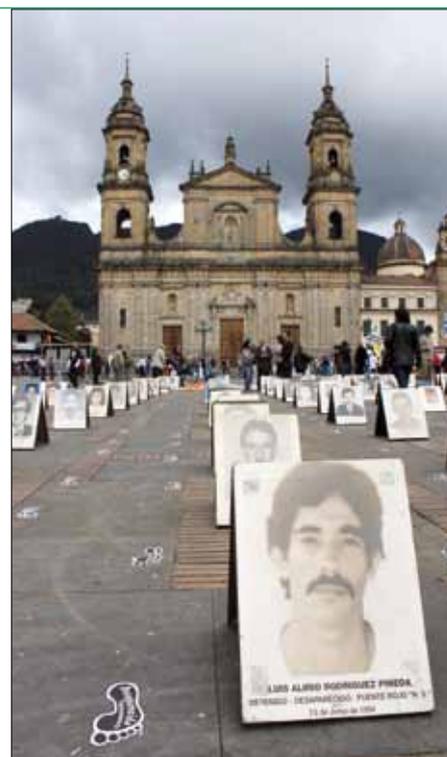
Tras años de fuertes seguimientos, en 1994 la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos pide el acompañamiento de PBI.

Por: Julia Wältring, voluntaria de Alemania (2007-9)

Gloria Luz Gómez, coordinadora nacional de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), y Esperanza Merchán, secretaria general, trabajan incansablemente, junto con muchos otros familiares, para que el Gobierno colombiano ratifique la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por Naciones Unidas en 2006. Sin embargo su trabajo diario va más allá: ASFADDES acompaña a personas en la búsqueda de sus familiares

desaparecidos, les apoya moral y físicamente, promueve mecanismos jurídicos y políticos para lograr la sanción a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, y la reparación ética, moral e integral de las familias. Además, impulsa y apoya a la organización de familiares de detenidos y desaparecidos, brindando espacios de capacitación y formación.

ASFADDES fue una de las organizaciones que pidió el acompañamiento de PBI en 1994, un período muy duro para Colombia. ►►



ASFADDES conmemora la Semana Internacional de Desaparecidos en Bogotá

► «En esta época se daban las masacres, había asesinatos todos los días. Pensábamos al otro día amanecíamos. Sentíamos los seguimientos constantes, la vigilancia de la oficina, se empezaron a realizar amenazas telefónicas más directas», recuerda Gloria.

La desaparición del abogado Alirio Pedraza en el 1990 fue uno de los detonantes que confirmó que podían ser atacadas por su rol de denuncia de la violación de derechos humanos. Finalmente, fuertes seguimientos y molestias durante una marcha en 1993 les llevó a tomar la decisión definitiva de pedir acompañamiento internacional. La presencia de PBI no pudo solucionar totalmente esta situación de hostigamientos y persecuciones, pero la relación con la comunidad internacional ayudó en esa época tan traumática.

En la década de los noventa el desprestigio, la desvaloración y los señalamientos hacia organizaciones defensoras fueron creciendo. El hecho de que se lograra que la comunidad internacional volteara los ojos hacia



Gloria Gómez, coordinadora nacional de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, junto a la voluntaria belga Catiane Vander Kelen en Popayán

«EN ESTA ÉPOCA SE DABAN LAS MASACRES, HABÍA ASESINATOS TODOS LOS DÍAS. PENSÁBAMOS EN SI AL OTRO DÍA AMANECÍAMOS».



«¿Alguien los ha visto? Es mi tío, está desaparecido desde hace 10 años».

ASFADDES conmemora la Semana Internacional de Desaparecidos en Bogotá.

Colombia y que estuviera presente de forma constante permitió el fortalecimiento de las organizaciones no gubernamentales.

A pesar de todo, ASFADDES logró sensibilizar a la sociedad colombiana: «hoy en día los medios de comunicación hablan sobre desaparición forzada, hace seis años nadie hablaba sobre esto», comenta Gloria.

El trabajo para lograr la tipificación de la desaparición forzada como delito en la Ley 589 de 2000, juntamente con los mecanismos para la búsqueda de personas desaparecidas, fue fruto del esfuerzo incansable de ASFADDES. Otro avance muy específico, según Gloria, es que «se ha generado una formación y un lenguaje propio de los familiares que es una experiencia que nace de nosotras mismas».

Esperanza Merchán concluye que «a pesar del dolor y la rabia nos mantenemos constantes. Son esos sentimientos, el dolor y el amor, los que nos mantienen aquí. En ASFADDES es el gran valor que tenemos nosotras al interior. Y el apoyo que hemos recibido de la comunidad internacional ha sido también una de las bases para que los familiares hayamos resistido y sigamos resistiendo». ●

Operación Génesis: exigiendo justicia

Como consecuencia de la Operación Génesis fueron desplazados más de 10.000 campesinos del Bajo Atrato (departamento del Chocó).

Por: Bianca Bauer, voluntaria de Alemania (2009)

PBI habló con Danilo Rueda, un miembro de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz que ha estado trabajando en la región de Urabá desde 1996, acerca de la Operación Génesis y la apertura de la oficina de PBI en Turbo.

PBI: ¿Qué recuerda de la Operación Génesis?

Danilo Rueda: La operación militar Génesis se desarrolló en el río Cacarcia y en el río Salaquí entre el 24 y el 27 de febrero del año 1997. Fue parte de una estrategia de control de la población y de control territorial a través del desarrollo de la estrategia paramilitar, dirigida por la Brigada XVII del Ejército. Se desarrolló en cuatro vías con bombardeos, ataques por aire y tierra, con el asesinato de Marino López y el desplazamiento forzoso de más de 10.000 campesinos en ese momento.

Marino López era un campesino común y corriente, no era ningún militante de partido de oposición. De acuerdo con lo que nos ha expresado su familia y personas de su entorno más cercano, era una persona tímida, un trabajador del campo, afrodescendiente,

participaba poco en la actuación y en el liderazgo comunitario. Tenía una familia bonita, con dos hijos. Lo mataron, porque querían infundir terror y él fue la persona escogida.

Murió decapitado, su cuerpo fue cortado en varias partes, tirado al río y luego de que le quitaron la cabeza, jugaron al fútbol con ella. Es un crimen que ha generado bastante conmoción en las personas que han escuchado el testimonio, se han generado poesías, cantos, música y una reflexión profunda.

PBI: ¿Hasta qué punto ha habido justicia después de la Operación Génesis?

DR: Hubo absoluta impunidad. Hoy está tras las rejas el General Rito Alejo del Río Rojas. El General está vinculado a un proceso judicial por el crimen de Marino López pero este crimen no puede investigarse desconectado del desplazamiento forzado y de la operación paramilitar que se desarrolló en el Bajo Atrato.

PBI: ¿Por qué hay este nivel de represión contra la población civil en esta región?

DR: A través de los desplazamientos buscan



Años después de su desplazamiento, las comunidades retornan a sus tierras en el Chocó.

despojar de la tierra a los habitantes de la zona y la mayoría ha decidido quedarse en silencio y aceptar el despojo. Ese despojo está asociado a negocios vinculados a la palma, al plátano, al banano, la extensión ganadera y a la deforestación. La extracción de recursos naturales se da a través de extracciones mineras como ha sucedido en el norte del Chocó, y como puede suceder en el Bajo Atrato. Por otra parte, hay unos proyectos de obras de infraestructura como la carretera panamericana. Se quiere imponer un modelo económico y de sociedad, y la población indígena, mestiza y afrocolombiana que no cabe dentro de las lógicas de ese modelo de desarrollo se tiene que ir o se muere.

PBI: ¿Por qué solicitan el acompañamiento de PBI en 1997?

DR: Nosotros conocemos PBI desde hace quince años, viajamos con miembros de PBI durante su primer ejercicio de exploración antes de decidir a quién acompañar. Inicialmente comenzó nuestro acompañamiento en Bogotá y en algunas actuaciones regionales, pero veíamos que era importante que desarrollaran su labor no sólo con organizaciones de derechos humanos sino también con comunidades víctimas del conflicto, y eso fue que se logró cristalizar en una solicitud que hicimos en 1997 en un encuentro en Alemania. En diciembre 1997 aceptaron crear un equipo de trabajo en el Urabá, que ha sido muy importante para las organizaciones de derechos humanos en la región. ●



Un duro golpe contra las organizaciones

El allanamiento de la oficina de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha sido uno de muchos golpes contra la organización, pero aun así siguen acompañando a las comunidades.

Por: Alessandra Miraglia, voluntaria de Italia (2008-9)

PBI entrevistó a Luz Alba Santoyo, vinculada a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), en dos etapas. En la primera, de 1993 a 1999, trabajó en la entonces Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz apoyando directamente el trabajo del Padre Javier Giraldo, representante legal de la organización. Regresó a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en el 2006 y actualmente es la encargada del centro de documentación.

PBI: La oficina de Justicia y Paz fue objeto de un allanamiento en 1998.

¿Nos puede describir los hechos y cómo se desarrolló el operativo?

Luz Alba Santoyo: El allanamiento a la sede se inició a la una de la tarde del 13 de mayo de 1998. Autorizada por la unidad de terrorismo de la Fiscalía Regional de Bogotá, la diligencia fue llevada a cabo irregularmente por oficiales del Ejército y por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, muchos de ellos expertos en recuperar documentos electrónicos¹. Otros militares rodearon el edificio, impidiendo el ingreso a los miembros de la CIJP que habían salido para almorzar, circunstancia que dejó en la oficina a unos pocos integrantes de la organización². La entrada fue negada también a los delegados de la Defensoría del Pueblo, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones

Unidas y de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC). No hubo presencia de miembros del Ministerio Público³.

PBI: ¿Qué motivó el allanamiento, según su opinión? ¿Cuáles fueron las razones del operativo?

LAS: El allanamiento obedecía a informes de inteligencia militar según los cuales, en dicho inmueble, se encontraban un arsenal, explosivos y propaganda del ELN. El operativo respondía al interés de la XIII Brigada, comandada por el General Rito Alejo del Río, reiteradamente denunciado por la Comisión tanto por los crímenes perpetrados en Urabá cuando ejercía la comandancia de la XVII Brigada, como por sus vínculos con el paramilitarismo⁴. Los militares se concentraron en el área donde se encontraba el proyecto Nunca Más, banco de datos que recopilaba y sistematizaba información sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia a partir del año 1966⁵. Los allanadores apuntaron sus armas contra las personas que allí se encontraban, que fueron privadas de sus documentos de identidad, sometidas a interrogatorios exhaustivos y tildadas de ser «guerrilleras»⁶. Después de impedirles que se comunicaran con el exterior, procedieron a filmarlas y a revisar y leer documentos, abriendo los computadores y grabando sus contenidos⁷.



Foto: KOI.KO

En 2009, indígenas Embera del Chocó, acompañados por CIJP, votan NO a la exploración minera en su territorio ancestral.

PBI: ¿Cuáles fueron las implicaciones del allanamiento para la Comisión de Justicia y Paz?

LAS: Por un lado el allanamiento representó un duro golpe para la CIJP ya que a raíz de ello se dio la salida de la organización del Padre Giraldo, declarado objetivo militar y obligado a esconderse⁸. Por el otro, el allanamiento le dio más fuerza a la Comisión, que siguió enfrentándose a casos de judicializaciones contra algunos de sus miembros, como el Padre Giraldo, Abilio Peña y Danilo Rueda. Ninguno de ellos ha sido condenado⁹. ●

¹ «Comunicado a la Opinión Pública de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, sobre los hechos ocurridos el 13 de mayo de 1998», CIJP, 18 de mayo de 1998

² Entrevista con Luz Alba Santoyo, Bogotá, 22 de julio de 2008

³ «Declaración del presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Alberto Giraldo Jaramillo, sobre el allanamiento a Justicia y Paz», Conferencia Episcopal de Colombia, Bogotá, 14 de mayo de 1998

⁴ «Comunicado a la Opinión Pública de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz sobre los hechos ocurridos el 13 de mayo de 1998» CIJP, 18 de mayo de 1998

⁵ «Ante el Allanamiento de la sede de Justicia y Paz en Bogotá», Comité al Hoc de Defensores de Derechos Humanos, 16 de mayo de 1998

⁶ «Comunicado a la Opinión Pública de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz sobre los hechos ocurridos el 13 de mayo de 1998», CIJP, 18 de mayo de 1998

⁷ Fr. Peter Schorr: «Carta al Fiscal general de la Nación», Oficina Internacional de Justicia, Paz y Salvaguardia de la Creación, Roma, 21 de mayo de 1998

⁸ «Continúan las amenazas contra los derechos humanos en Colombia», CIJP, 10 de julio de 1998

⁹ Entrevista con Luz Alba Santoyo, 22 de julio de 2008

«CIJP ha sido víctima de ocho procesos judiciales desde el año 1997 hasta 2009. Hemos sufrido siete amenazas de muerte, un secuestro el año pasado, dos intentos de desaparición forzada y un asesinato. Cuando la represión con las balas e intimidación no funciona, se intenta una persecución judicial.

Ha sido difícil para nuestra organización porque en vez de estar pensando en la protección de los derechos humanos de la población y en lograr mayor efectividad legal para la restitución de las tierras, tenemos que estar defendiendo falsas acusaciones.

Además, se han realizado interceptaciones ilegales sobre los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz. Ha pasado más de un mes y medio desde que se ha conocido el escándalo de estas interceptaciones ilegales y hasta el día de hoy la Fiscalía no nos ha permitido asumir la protección de nuestras garantías legales, no hemos podido acceder a esas carpetas que hablan de la labor que nosotros legítimamente desarrollamos y que hablan de las vidas familiares que tenemos. Eso es una forma de afectar psicológicamente, generar dudas sobre nosotros y por tanto generar la imposibilidad de estar acompañando de manera permanente a las comunidades».

Danilo Rueda, miembro de CIJP

La masacre que marcó la historia

Durante la incursión en la ciudad de Barrancabermeja, los paramilitares asesinan a siete personas y desaparecen a veinticinco. Las organizaciones responden con protestas y denuncias.

Por: Lars Helmersson, voluntario de Suecia (1995-2004¹)

A las ocho de la noche del sábado 16 de mayo de 1998, unos 50 hombres vestidos de civil, fuertemente armados y transportados en cuatro camiones, incursionaron en los barrios surorientales de Barrancabermeja. Empezaron a recoger personas que consideraron colaboradores de la guerrilla. A los que se resistieron, los asesinaron en el lugar.

A pesar de la fuerte militarización de la ciudad y de que la acción fue anunciada², los paramilitares pudieron continuar con la operación hasta las once de la noche y luego salir de la ciudad con los camiones cargados de detenidos³.

Después de los primeros días de confusión se supo que el saldo de la incursión paramilitar ascendió a siete personas asesinadas y 25 desaparecidas. Un nuevo grupo paramilitar autodenominado Autodefensas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC) asumió la responsabilidad de la acción, argumentando que las víctimas eran miembros del ELN, algo que fue desmentido tanto por los parientes de estas como por el mismo ELN⁴.

Las fuertes protestas, incluyendo un paro cívico de varios días,

demonstraron que Barranca está hecha de otra pasta, que los paramilitares no lograrían acabar con la sociedad civil con operaciones similares.

Las organizaciones que protagonizaron las protestas y denuncias recibieron muchas amenazas y el acompañamiento de PBI a la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y a la Organización Femenina Popular (OFP) se volvió constante. A pesar de esto, la presidenta de CREDHOS en la época, Osiris Bayther Ferias, finalmente se vio forzada a salir del país.

En noviembre, los familiares de las personas desaparecidas formaron la seccional Barrancabermeja de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES)⁵, que contó con el acompañamiento de PBI hasta su cierre como consecuencia de la toma paramilitar de Barranca en 2001.

Un año después de la masacre se celebró un controvertido Tribunal Internacional de Opinión (TIO) en Barrancabermeja, que falló en contra del Estado colombiano por su responsabilidad en la masacre⁶.



Acto de conmemoración de las víctimas de la masacre del 16 de mayo de 1998

Gracias a las informaciones extraídas en las versiones libres de paramilitares desmovilizados, que por otra parte dejan muchas preguntas y dudas, los restos mortales de algunos de los desaparecidos han sido encontrados. Hasta ahora cinco han sido identificados⁷ y enterrados.

Según las declaraciones de los paramilitares alias «Julián Bolívar» y alias «El Panadero», ellos se dieron cuenta de que los retenidos no eran realmente guerrilleros⁸. Afirman que fue el ahora extinto comandante paramilitar alias «Camilo Morantes» el que, en medio de una borrachera, dio la orden de asesinarlos⁹. Parece que los responsables de los asesinatos siempre son los ya muertos. Las organizaciones siguen buscando la verdad. ●



Comemoración de la masacre del 16 de mayo

1 Lars Helmersson estuvo en PBI durante cuatro años entre 1995-2004

2 Vanguardia Liberal, 19 de mayo de 1998

3 CREDHOS, 17 de mayo de 1998

4 Vanguardia Liberal, 5 de junio de 1998

5 «Veinte años de historia y lucha», ASFADDES, 23 de abril de 2008

6 El Espectador, 17 de mayo de 1999

7 Vanguardia Liberal, 8 de enero de 2009

8 Vanguardia Liberal, 13 de julio de 2007

9 Vanguardia Liberal, 23 de abril de 2008

Éxodo campesino a causa de la masacre



Durante cuatro meses, 14.000 personas de la región del Magdalena Medio exigen sus derechos en la ciudad de Barrancabermeja.

Por: Pascal Blum, voluntario de Suiza (2007-9)



Berenice Celeyta

En el año 1989 Berenice Celeyta fundó la Corporación Sembrar, organización de la que salió en 1992 para crear la Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA). Esta organización desarrolla sus actividades en la zona nororiental del país, en el departamento del Norte de Santander y la región del Magdalena Medio. Con MINGA, Berenice desempeña tareas de investigación criminalística, asesoría jurídica y, sobre todo, trabaja temas vinculados con el desplazamiento forzado y el retorno. En 1999 empezó un nuevo trabajo con la Asociación

«A FINALES DE 1997 Y COMIENZO DE 1998 SE PRODUCEN MUCHOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN TODA LA ZONA. EN ESTA ÉPOCA, LA ACCIÓN DEL PARAMILITARISMO EN EL MAGDALENA MEDIO FUE MUY FUERTE».

para la Investigación y Acción Social (NOMADESC), en el Valle del Cauca, entidad que pone énfasis en el tema de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

PBI: ¿Hay algún hecho de tu vida laboral que se te ha quedado grabado en la memoria?

Berenice Celeyta: Sí, en 1998 estuve trabajando con MINGA en Barrancabermeja. Ese año se produce el éxodo de campesinos y mineros del Sur de Bolívar. Huyeron de la zona alrededor

de 14.000 personas: unos venían a pie, los otros en chalupa o en bus. Llegaron a Barrancabermeja y buscaron un lugar para asentarse, comenzaron a ocupar varios sitios como las escuelas, los colegios, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Defensoría del Pueblo. El éxodo duró más de cuatro meses durante los cuales la ciudad estuvo totalmente bloqueada. Las condiciones de vida para las personas que se habían desplazado fueron terribles. Había mujeres embarazadas y menores. Creo que los primeros 15 días fueron los más fuertes porque no había espacios acondicionados donde poder quedarse ni descansar, e incluso la gente se tiraba en el piso. Además, con tanta gente concentrada en el mismo sitio, hasta 1.000 en un mismo colegio, se propagaron muchas enfermedades.

PBI: ¿Cuál fue la razón del éxodo?

BC: A finales de 1997 y comienzos de 1998 se producen muchos crímenes de lesa humanidad en toda la zona. En esta época, la acción del paramilitarismo en el Magdalena Medio fue muy fuerte. En la región se concentraban tres Bloques: las Autodefensas Campesinas del Cesar, el Bloque del Sur de Bolívar y el Bloque del Magdalena Medio. Se llevaron a cabo varias masacres, pero la causa directa del éxodo fue la masacre de Cerro de Burgos, un puerto que queda a una hora de Simití. Fue una masacre que generó mucho terror ►►



Campeños de la región del Magdalena Medio



Campesinos del Magdalena Medio

▶▶ entre la población. Los paramilitares entraron al Cerro en cuatro chalupas, llegaron a un billar, sacaron a la gente y los mataron. Recorrieron la zona y fueron a las casas llamando a la gente por listas. Las personas que vivían en la zona no tuvieron otra opción para salvar su vida que dejar sus hogares. Sin embargo, el

negociación se desarrollaron actividades como una comisión de verificación con la comunidad internacional y una mesa de negociación, que funciona hasta hoy, después de 10 años. Con MINGA estuvimos presentes en todas las etapas de las negociaciones.

«LAS CONDICIONES DE VIDA PARA LAS PERSONAS QUE SE HABÍAN DESPLAZADO FUERON TERRIBLES».

éxodo también fue una señal al gobierno para que resolviera el problema del paramilitarismo en la región.

PBI: ¿Qué pasó durante el éxodo y cuál fue el papel de MINGA?

BC: Al inicio del éxodo comenzaron las negociaciones con el Gobierno central, en las cuales tomamos parte como MINGA. En la Mesa estaban no sólo los campesinos, sino también los mineros, diversas organizaciones del Sur de Bolívar y las organizaciones sociales de Barrancabermeja. Fueron negociaciones de alto nivel que se dieron primeramente con el Presidente Samper y posteriormente con Pastrana. Como fueron tan largas y complicadas tuvimos que ir a Bogotá para hacer trabajo de incidencia. En medio de la

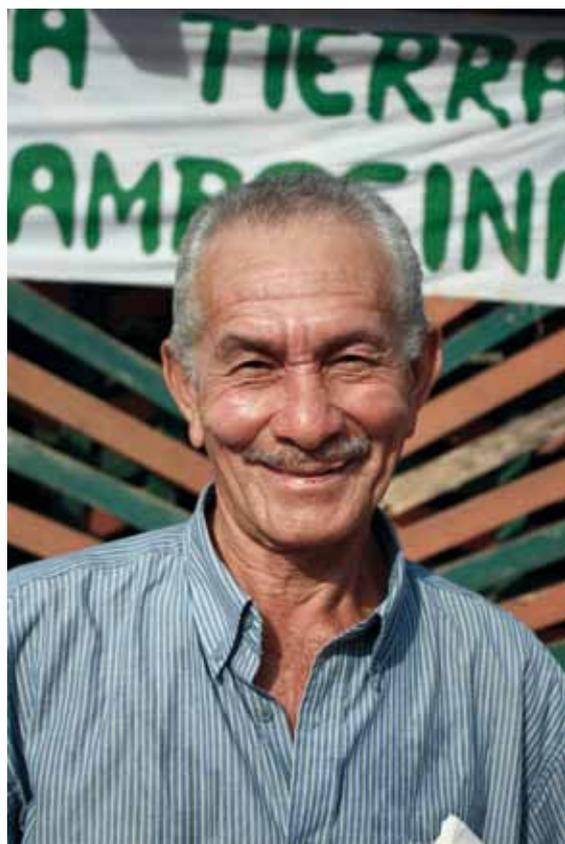
PBI: ¿Cuáles fueron las demandas de las personas que sufrieron el desplazamiento?

BC: Básicamente fueron la constitución de un bloque de búsqueda contra los grupos paramilitares y la demanda de condiciones de vida dignas. Obviamente, el bloque de búsqueda nunca se dio porque después del retorno se produjeron las masacres más fuertes. Concretamente, los mineros querían seguir explotando el oro de manera artesanal y no con técnicas modernas, sin utilizar cianuro y mercurio. Ellos no aceptaban la entrada de las multinacionales en su territorio y aún menos en las circunstancias que se estaban produciendo. Cuando fue asesinado uno de los líderes mineros

(le cortaron la cabeza y jugaron fútbol con ella), los paramilitares dijeron que estaban limpiando la zona para que entraran las multinacionales. Otro punto era la introducción del monocultivo de palma africana. Los cultivos de palma se estaban introduciendo en todo el territorio sin que los campesinos fueran beneficiados. Al contrario, se veía claramente que los actores y beneficiados eran los paramilitares. Las empresas que introducían la palma africana estaban constituidas por personas conocidas por sus vínculos con el paramilitarismo.

PBI: ¿Al final qué ganaron los campesinos y los mineros?

BC: Creo que, por un lado, no ser sacados definitivamente de sus territorios. Generaron un proceso de resistencia muy fuerte en el interior de la comunidad que les ha permitido mantenerse en la zona a pesar del conflicto. La guerra les permitió aprender de derechos humanos, conocer sus propios derechos. Sin embargo, se van a cumplir 10 años del incumplimiento de los acuerdos. En resumen, sí han ganado en algunos aspectos, pero todavía viven en condiciones infrahumanas. Su situación no ha mejorado. ●



Campesino del Magdalena Medio

Un nuevo equipo en Medellín

A finales de los 90 aumentan las agresiones contra organizaciones defensoras de derechos humanos en la capital antioqueña.

Por: Matteo Burato, voluntario de Italia (2009)

A finales de los noventa, hechos violentos contra varias personas defensoras de derechos humanos hacían sospechar un sensible aumento de su persecución. La explosión de una bomba en la entrada de la oficina de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES)¹ y de varios artefactos por toda la ciudad² el secuestro de cuatro investigadores del Instituto Popular de Capacitación (IPC) y los asesinatos de Jesús María Valle Jaramillo³ y Hernán Henao Delgado⁴, entre otros, revelaban la puesta en marcha de una estrategia paramilitar dirigida a eliminar todas las formas de resistencia en la región.

De hecho, durante esta década, Medellín experimentó una verdadera guerra urbana, una violencia que golpeó duramente el movimiento social en todas sus formas, afectando al tejido social y a toda iniciativa política que había en la ciudad.

Es justamente en este clima de violencia cuando unas ONG empezaron a sentir la necesidad de solidaridad, no solo a nivel local o regional sino también una solidaridad de tipo internacional. PBI llega a Medellín en octubre del 1999, con la intención de acompañar a ASFADDES, al IPC y a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSP). El IPC cuenta que los integrantes de PBI de ese momento

hicieron un fuerte trabajo de diplomacia ciudadana. Ese esfuerzo ayudó a preservar la integridad de las personas y de las organizaciones acompañadas.

Fuera del área metropolitana, el trabajo de PBI se enfocó sobre todo en el Oriente Antioqueño, donde la Corporación Jurídica Libertad (CJL) avanzaba un trabajo de atención y prevención a las comunidades desplazadas a causa del conflicto armado. Elkin Ramírez, abogado y co-fundador de CJL, destaca que con PBI la Corporación logró ingresar en unas zonas de difícil acceso por los continuos retenes montados que constituían un riesgo muy alto. A partir del 2001, cuando en los barrios la situación se fue agravando, se amplió también el acompañamiento en las comunas de Medellín, donde el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL)⁵ adelantaba procesos de formación con las organizaciones populares.

Las palabras de los acompañados dejan entrever que se construyó una relación muy estrecha entre los integrantes de PBI y de las ONG de aquel período. «Un acompañamiento más clave y estratégico en términos del papel de PBI de acompañar a ONG en riesgo» es como lo define el director de estrategias del IPC. ●



Un miembro de ASFADDES en una manifestación en Medellín

Foto: Jorge Mata/Surimages-IPA

1 El 24 de junio de 1997, una bomba explotó fuera de las oficinas de ASFADDES en Medellín.

2 Se hace referencia a la bomba explotada en el barrio Prado el 29 de agosto de 1999 contra el IPC y por lo menos a otros dos artefactos colocados en Medellín el mismo día con el intento de afectar a la Cooperativa de Trabajadores de las Empresas Varias (Aseo) y a la Unión Sindical Obrera de Antioquia (USO).

3 El abogado antioqueño, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en su oficina, tras unas amenazas recibidas después de denunciar los vínculos de algunos militares con las masacres ocurridas en Ituango (Antioquia) a finales del año anterior.

4 El 4 mayo de 1999 Hernán Delgado, director del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, fue asesinado por desconocidos que irrumpieron en su oficina en Medellín.

5 Plataforma de organizaciones de derechos humanos que trabajan tanto en la ciudad de Medellín como en el departamento de Antioquia.

6 Líderes de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSP)

Compartiendo alegrías y tristezas



Martha Soto y la voluntaria estadounidense Teresa Panepinto

Por: Martha Soto, ASFADDES

Hace unos diez años mirábamos con mucha expectativa las posibilidades de tener un equipo en la ciudad de Medellín. Fue un año difícil y que definitivamente nos marcó ya que cuando apenas iniciábamos labores, el asesinato de Julio Gonzáles y Chucho Puerta⁶ nos mostró el estado de indefensión en el cual nos encontrábamos.

Así comenzó el trabajo y llegaron los primeros voluntarios de PBI Pilar y Mikel; un par de españoles que pasaban su primera Navidad en la casa de PBI y que acompañaron principalmente a los familiares de la Asociación. Luego el equipo fue creciendo y llegaron Fidel, Teresa, Jacobo, Helena, Mariana, Mirjan y Roberto, un equipo que nos acompañó no solo en el trabajo, en las fiestas y en las alegrías, sino también estuvo presente en un momento muy difícil en la vida de ASFADDES y de Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL), la desaparición forzada de Ángel y Claudia. Con ellos a nuestro lado cuando trabajamos la denuncia y la búsqueda incesante, una búsqueda que aún permanece en nuestras vidas.

Después de estos difíciles meses, en los que incluso la oficina de la seccional tuvo que ser cerrada, el equipo Medellín de PBI fue el que de alguna manera mantuvo unidos a los familiares con la disculpa de la Navidad. En febrero 2001, cuando tomamos la decisión de volver al trabajo, allí estuvo PBI acompañándonos todo el tiempo por los desplazamientos, en la oficina y en todo el trabajo que emprendimos hasta que nuestra oficina estuvo consolidada nuevamente.

Con el total convencimiento de que el acompañamiento de PBI en nuestra ciudad ha sido fundamental para nuestro trabajo damos hoy los más sinceros agradecimientos a todos y cada uno de los voluntarios que han sido parte del equipo y que han ayudado a que nuestro trabajo de acompañamiento a las víctimas sea posible.

«Iñigo y Jorge Luis son como una bandera en nuestra tierra»

Durante una misión humanitaria un grupo paramilitar asesina a un cooperante español y a un clérigo del departamento del Chocó¹.

Nuria Tellería e Iñaki Markiegi (Paz y Tercer Mundo-Mundubat)

«Los hechos ocurrieron el 18 de noviembre de 1999. La comisión de acompañamiento a las comunidades en resistencia del Medio Atrato acababa de desarrollar en esa zona los programas de Paz y Tercer Mundo (PTM - hoy en día Mundubat). Salimos en bote de Murindó a las 5.30 de la mañana. Ya llegando a las Mercedes, a unos 45 minutos antes de Quibdó, empezó a llover. Durante el viaje nos sorprendió que no hubiera retenes de los paramilitares. Ya después de las Mercedes nos sentíamos muy tranquilos, porque ésa era la última referencia que teníamos de los paramilitares en el río. Llegando, yo me hice junto a Iñigo y Jorge Luis. Iñigo venía como puntero, dando las indicaciones. Me decía que era un viejo lobo de mar, le repetí: eso, de mar! Porque de río no sabía nada. Nos echamos a reír y estuvimos hablando un rato. Justo cuando estábamos llegando a Quibdó, fuimos arrollados por una lancha rápida que de manera repentina se dirigió en forma perpendicular al bote, rompiendo la parte delantera de la embarcación de madera y expulsando fuera de la misma a Iñigo Egiluz, delegado de PTM y al Padre Jorge Luis Mazo, párroco de Bellavista, Bojayá² – ambos fallecieron.

Una dimensión importante del trabajo que Paz y Tercer Mundo realiza desde su llegada a Quibdó en 1998 es la defensa de los derechos humanos, especialmente de las comunidades Afrocolombianas e indígenas, siempre en coordinación con la Diócesis de Quibdó y otras organizaciones colombianas. En el momento de los hechos, el trabajo consistía en desplazarse a las distintas comunidades y recoger los testimonios de los pobladores del Medio Atrato, quienes en estos últimos años venían siendo testigos del desplazamiento forzado, la ejecución sumaria, la desaparición forzada y la restricción a la circulación de personas y alimentos, por parte de los paramilitares.

Con estos informes se quería mostrar la realidad que los medios oficiales



Foto: Jorge Mata/Surimages-IPA

Niña frente una casa destruida en el Medio Atrato (departamento del Chocó)

ocultaban y distorsionaban, esa que los funcionarios judiciales oficiales no investigaban ni sancionaban. Con la agudización de la violación de sus derechos, surgen y se fortalecen procesos de resistencia como la única alternativa que les queda a los pueblos para seguir sobreviviendo física, territorial y culturalmente. Para eso, ha sido y sigue siendo necesaria la solidaridad internacional, como ojos de denuncia que frenaran la barbarie y el horror de la embestida paramilitar.

En esta época PTM y PBI tuvieron diferentes encuentros, siempre deseaban poder coincidir más, pues muchos aspectos comunes los unían. Sin embargo, fue paradójico que la primera vez que coinciden en una misión conjunta será en la Observación Internacional por los asesinatos de Iñigo Egiluz y Jorge Luis Mazo.

Los autores del doble asesinato habrían sido las autodefensas de Carlos Castaño³, aunque sólo un autor material haya sido condenado. En esa misma época, esos grupos paramilitares afectaron

gravemente el entorno de trabajo y de vida de las ONG y de las comunidades que se habían organizado en ‘comunidades de paz’ en la zona del Urabá; «Las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que trabajan en la región de Urabá se hallaban en máxima alerta, pues pasaron a convertirse en objetivo cierto de los paramilitares»⁴. Es en este ambiente que los mismos paramilitares perpetraron varias masacres en toda la región, especialmente en abril de 1999, en las Comunidades de Paz de San José de Apartadó⁵ y de San Francisco de Asís⁶. ●

1 Jorge Iván Castaño, obispo de Quibdó

2 Relato de un testigo presencial

3 «Son responsables de Muerte de Español», El Tiempo, 25 de noviembre de 1999

«Condena Europea por muerte de Cooperante Español», El Tiempo, 3 de diciembre 1999

4 «Alerta Roja para ONG en Urabá», El Tiempo, abril de 2000

El Colombiano, 25 y 26 de marzo de 1999

5 «Paras atacan Comunidad de Paz», El Tiempo, 6 de abril de 1999

6 «Nuevo Atentado a la Paz», El Espectador, 9 de abril de 1999

Esperanza y sangre: mi año en Urabá

En medio de masacres y amenazas contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, PBI comienza una presencia permanente en la región.

Por Andrew E. Miller, voluntario de los EEUU (1999-2000)

Mi estancia en Urabá como voluntario de PBI, desde abril de 1999 hasta finales de febrero del año 2000, se encajó entre masacres. La primera noche en Turbo, miembros de Justicia y Paz pasaron por la casa para mostrarnos un video. Era una entrevista con Catalino, ex líder comunitario chochoano, anunciando que se había «volteado» y que desde entonces sería

la Comunidad de Paz de San Francisco de Asís, en zonas cercanas a Riosucio, y asesinaron por lo menos a 12 personas². Además, secuestraron a un grupo de líderes para un diálogo forzado con el mismo Carlos Castaño acerca de las acusaciones de Catalino. Desmintieron estos falsos señalamientos y luego fueron dejados en libertad, pero seguían temiendo por sus vidas.

ocupaba el Coliseo de Turbo y varios albergues urbanos. Dado que muchos de los causantes del desplazamiento andaban por el mismo pueblo, hacíamos rondas cada día visitando los sitios donde permanecían los desplazados. De vez en cuando acompañábamos a grupos de trabajo que cultivaban unas parcelas chiquitas en las afueras del pueblo y a los líderes desplazados en sus actividades cotidianas.

«ASÍ ES LA LÓGICA DE LA GUERRA, ATEMORIZAR A LA COMUNIDAD PARA ANIQUILAR SU RESISTENCIA CONTRA LOS ACTORES ARMADOS».

integrante paramilitar bajo el mando de Carlos Castaño. Como acababa de llegar, todavía no entendí mucho de lo que decía, pero la gravedad de sus palabras fue evidente por la reacción atemorizada de mis nuevos colegas. Me contaron que había señalado hasta a las monjas de la región de supuestas colaboradoras de la guerrilla. No demoró mucho la reacción que casi inexorablemente sigue a este tipo de acusación pública en Colombia.

La noche siguiente, un domingo, incursionó un comando paramilitar en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Mataron a tres personas, incluyendo a Anibal Jiménez, uno de los fundadores de la comunidad¹. Así es la lógica de la guerra, atemorizar a la comunidad para aniquilar su resistencia contra los actores armados. PBI no tenía presencia física en el corregimiento en ese preciso momento, pero nos llamaron en la mitad del sangriento acontecimiento. Aprendí sobre la marcha como funciona una activación de PBI, empezando con una ráfaga de llamadas toda la noche y una salida hacia la comunidad a primera hora de la mañana siguiente.

Durante los días siguientes se produjo una arremetida paramilitar en el Bajo Atrato. Incursionaron en varios asentamientos pertenecientes a

Así fue la bienvenida que Urabá me regaló. Me estaba preguntando ¿Pucha, pasa esto cada fin de semana? Más tarde me di cuenta que estos acontecimientos significaron una nueva etapa en la evolución del conflicto armado en Urabá.

En aquel momento, la gente de Cacarica que había sido desplazada durante la Operación Génesis en 1997 todavía

Con el asesoramiento de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, se organizaba el retorno masivo a sus territorios en el Darién. Fijaron múltiples fechas durante 1999 para la salida, pero las condiciones no lo permitían y tuvieron que postergar su retorno varias veces. En octubre, acompañamos una exploración de varias misiones preparatorias para el ►►



El voluntario alemán Moritz Hartnagel con jóvenes de las comunidades de Dabeiba y de la cuenca de Cacarica que fueron desplazados durante la Operación Génesis.



Los voluntarios Luigi Cojazzi (Italia) y Joke Reijven (Holanda) en la Comunidad de Paz San José de Apartadó

▶▶ retorno. Personalmente, fue una de las experiencias más significativas durante mi año. Pasamos una semana con un grupo de ochenta personas desplazadas, lo cual ofrecía un espacio de acercamiento más humano. Se notaba un cambio en el ánimo de la gente que, por fin, salía de los confines del Coliseo hacia sus tierras féculas con una alegría evidente.

Mientras tanto, las amenazas contra San José de Apartadó se agudizaron. Interlocutores de la Iglesia nos contaron que Carlos Castaño había acusado personalmente a la comunidad de abastecer a la guerrilla y prestar su teléfono comunitario para que organizara secuestros y asesinatos en el Eje Bananero. A partir de este momento, PBI inició una presencia constante en la comunidad e intensificó su trabajo político de prevención para evitar una nueva incursión. Temíamos que pasara algo durante las navidades. Nos equivocamos de fecha, pero la preocupación no era infundada.

Un fin de semana de febrero fui a la Comunidad de Paz para un acompañamiento rutinario. Junto con el otro voluntario, Jorge Ruiz, subí a pie hasta La Unión, un corregimiento a una hora y media de San José. Bajamos por la tarde a cenar con los líderes de la comunidad y los acompañantes permanentes de Justicia y Paz. Terminando la cena, empezamos a mirar el noticiero de la noche. Apenas arrancó, nos asustaron unos tremendos sonidos provenientes de la plaza central, justo afuera de la Casa Misionera. BOOM, BOOM, BOOM reverberaron disparos de armas largas. Pronto vimos siluetas de múltiples hombres armados y

vestidos de camuflaje andando por la comunidad. No lo supimos hasta más tarde, pero ya habían fusilado con la ráfaga inicial a su primera víctima, Albeiro Montoya.

Durante la incursión, grupos de hombres armados buscaban sus blancos con la ayuda de dos personas encapuchadas que los iban identificando. En la sala de billar encontraron al panadero Mario Urrego, quien me había vendido pancitos dulces la semana anterior. Según un testigo, él dijo: «tranquilos, es el ejército»³.

No se tranquilizaron. Con razón, porque forzaron a Urrego a pararse en la puerta de su casa y lo ejecutaron ▶▶

NO TENEMOS UN PODER ESPECIAL PARA CONVERTIR EN FLORES LAS BALAS QUE APUNTAN A SUS VÍCTIMAS.

▶▶ con un disparo en la cabeza, frente a su familia. Así procedieron con otros dueños de dos tiendas pequeñas, Luis Ciro y Alfonso Jiménez. Finalmente, entraron en una misa evangélica, que continuó durante todo el ataque pese al sonido inconfundible de disparos. De ahí sacaron a un chico, Uvaldo Quintero, y lo asesinaron a quemarropa en la calle⁴.

Jorge y yo nos mantuvimos en la Casa Misionera con los líderes comunitarios y acompañantes de Justicia y Paz. Utilizando un teléfono satelital llamamos cada tres minutos a la casa de PBI en Turbo para informar al equipo de la situación. Éste, a su vez, se comunicó con la oficina en Bogotá para iniciar una serie de llamadas nacionales e internacionales. Mientras tanto nos posicionamos en la escalera por si acaso subían los armados. No lo hicieron.

Veinticinco minutos después de que empezó, recibimos noticias de que el grupo había salido por la carretera hacia Apartadó. Como documentó Justicia y Paz, varios testigos aportaron informaciones indicando que la incursión era un operativo conjunto entre miembros de la decimoséptima Brigada del Ejército y paramilitares. Hubo mucha presencia militar cerca de la comunidad durante todo el día y uno de los hombres encapuchados fue identificado como un ex-guerrillero que se había entregado al Ejército el mes anterior.

Mantuvimos, junto con los miembros de la comunidad, vigilancia toda la noche.

Tres años construyendo juntos

Por: Juan David Villa Gómez, Equipo CINEP Urabá (1999 - 2002)

En 1999, las comunidades de la región del Bajo Atrato en el departamento del Chocó, estaban en su proceso de retorno escalonado. Acompañamos este proceso junto con la Diócesis de Apartadó y la parroquia de los padres Claretianos de Riosucio. En ese momento, el equipo del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) trabajó con escasos recursos. Para nosotros, esto implicaba un riesgo por las mismas condiciones de la región, caracterizada por un amplio territorio, sin vías de acceso en el que nos debíamos mover en embarcaciones pequeñas y sin mayor protección que una insignia religiosa o una bandera. Ante tal situación, aún sin una amenaza explícita, pensamos que el acompañamiento de PBI en el terreno podría disuadir a los actores armados evitando ataques contra nosotros y contribuir a nuestra capacidad de movilización a nivel institucional para actuar ante instancias estatales.

Para nosotros, la presencia de PBI significaba un símbolo, un testimonio, una presencia abstracta que se llama «comunidad internacional.» Gente solidaria de tantos países, que dejaron de lado un lugar seguro y cómodo para compartir destino con quienes intentamos construir un mundo mejor en estos escenarios de conflicto, guerra y muerte. Durante esos tres años PBI fue nuestro referente de seguridad y protección basada no en la fuerza sino simplemente en la presencia, en la fe, en la confianza en otro mundo posible y en la creencia en el valor de la vida y la necesidad de hacer reales los derechos.

Casi nadie pudo dormir por miedo a otra incursión. A la mañana siguiente llegaron otros dos brigadistas para relevarnos a Jorge y a mí. Salí con una fuerte sensación de vergüenza por no haber podido evitar lo que pasó. Pensé: «tengo el privilegio de salir mientras los miembros de la comunidad tienen que seguir padeciendo estos atropellos».

Antes de estos hechos yo tenía muchas ilusiones de acompañar a la primera fase del retorno a Cacarica, que se dio por fin el

1 de marzo del año 2000. Sin embargo me perdí la ocasión por un día, ya que regresé a Bogotá el 28 de febrero, rumbo a mi país. Dentro del Proyecto decidimos que lo más estratégico sería impulsar el caso de la Comunidad de Paz en Washington DC. Con el respaldo de aliados allí, llevé una campaña de incidencia dentro del Congreso y con el gobierno estadounidense. Tres meses después del día de la masacre, salió una carta del Congreso, firmada por 49 miembros de la cámara baja, expresando una grave preocupación sobre lo que pasó en San José de Apartadó.

Así terminé mi año con PBI, aprendiendo en carne propia que la presencia internacional no es suficiente para frenar el conflicto en toda su brutalidad. No tenemos un poder especial para convertir en flores las balas que apuntan a sus víctimas. Sin embargo, las comunidades y las valientes personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos siguen pidiendo nuestra presencia. Siguen diciendo: «Por favor, no nos abandonen». Aun con dificultades, quince años después, las comunidades de resistencia en Urabá persisten. Y PBI no las ha abandonado. ●

1 Informe: «COLOMBIA: Retorno a la esperanza – Las comunidades desplazadas de Urabá y del Medio Atrato», Amnistía Internacional, Junio de 2000 (Páginas 13 – 14)

2 *Ibid.*, página 38

3 Carta de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz al Presidente Andrés Pastrana Arango, 20 de febrero de 2000

4 Acción Urgente, Amnistía Internacional, 21 de febrero de 2000



Monumento Conmemorativo del Desplazamiento de Cacarica (departamento del Chocó)

Foto: Jorge Mata/Surimages-IPA

El encuentro de los abrazos

Desde Turbo, pueblo que acogió a miles de desplazados expulsados de sus tierras por los actores armados, se organiza el retorno a la cuenca del río Cacarica, en el departamento del Chocó.

Por: Roberto Rodríguez, Beatriz García, Pedro Lázaro y Beatriz Muñoz, voluntarios de España (1999-2006)

Foto: Julien Menghini



Retorno feliz para algunos miembros de la comunidad desplazada de Cacarica

Desde el amanecer las personas van llegando al puerto de Turbo con sus bultos y enseres. Allí están los líderes, los acompañantes de Justicia y Paz y PBI. Con las primeras horas del día todo es trajín, movimiento, niños y niñas, alegría, incertidumbre. Las chalupas se van cargando, la panga de PBI está preparada. Los brigadistas van y vienen de los albergues, trayendo gente en el carro. Otros permanecen en el puerto, pasean, observan, hablan con la gente de la Comunidad de Autodeterminación Vida y Dignidad (CAVIDA), hay mucha gente mirando, hay inquietud.

La gente sube a las chalupas, arrancan los motores, la gente llora y canta «Óyeme Chocó». Mucha gente saluda desde la orilla. Estamos en el retorno.

Así recordamos las diferentes fases del retorno al Cacarica. Durante el año 2000 hubo tres retornos. Como miembros de PBI acompañamos, a veces hasta los asentamientos, y otras veces despedimos desde el puerto. Fue el año de los reencuentros, de volver a la tierra, de la organización, de la alegría, del miedo, de la solidaridad. Y allí estábamos colaborando a que todo esto fuera posible.

Los albergues en los que dormíamos, tomábamos tinto, jugábamos con los niños, escuchábamos relatos, se iban quedando vacíos. Los viajes por el río Atrato se intensificaban.

En Turbo y en otras comunidades acompañadas por PBI los paramilitares seguían matando. Se entremezclaban sentimientos de todo tipo y mucho trabajo. Los brigadistas éramos una pequeña parte de esta historia visible de solidaridades que fueron tejiendo la posibilidad del retorno al Cacarica.

A rededor de 200 personas desplazadas atravesaron la serranía del Darién y se refugiaron en Panamá. Desde allí fueron repatriados a un lugar del Pacífico llamado Cupica, lejos de sus tierras y sus familiares. En 2000 salen de este pueblo para reencontrarse en Turbo con sus familiares y retornar juntos a Cacarica:

Los preparativos avanzaban, los bultos se amontonaban al lado de las casas, los niños corrían de un lado para otro, había rostros alegres, otros inquietos. La gente se despedía de las amistades de estos largos tres años de desplazamiento. A los vecinos les regalaban enseres, cuadraban quién se podía quedar con la madera y con las casas. Las avionetas fueron llegando. Primero subieron las mujeres embarazadas y los bebés y más tarde los anciano y las familias. Risas, abrazos, entusiasmo. Y las avionetas partían con la gente, los perros de caza, las pocas pertenencias. Y al final los acompañantes subimos en la última avioneta con algunos símbolos, con todos

En Nueva Vida, uno de los lugares de retorno en Cacarica, organizada en zona humanitaria como medida de autoprotección, las mujeres prepararon la olla comunitaria y también la acogida, el lugar de encuentro en torno al plato de arroz. Todos dormíamos en la escuela y la capilla, los brigadistas aprendimos a colocar bien el mosquitero, a convivir con los zancudos y a las madrugadas de pesca. Fuimos testigos de la construcción de las primeras casas, de los campeonatos de fútbol, de las largas reuniones al atardecer y de las conversas compartidas con los acompañantes de Justicia y Paz. Vivíamos momentos de mucha ambivalencia, la «normalidad» de la vida cotidiana, de los baños en el río con las noticias de masacres en otras comunidades y los señalamientos y amenazas a CAVIDA.

Y así pasó el año 2000 y la gente siguió retornando «en medio de la guerra» como siempre decían ellos, pero con criterio, convocando la responsabilidad del Estado, el acompañamiento internacional y las ganas de «vivir y trabajar en paz como comunidades dignas, que podemos reclamar derechos a ver si de pronto algún día se hace justicia»¹. Y PBI estuvo ahí. ●

¹ «Regreso a Cacarica», El País (España), 16 de marzo de 2000



Foto: Sebastian Rötters

los sueños y con un nudo en el estómago por lo que estábamos viviendo. Y después de 10 días volvimos a la casa del equipo de PBI. Nos esperaban con cena, unas cervezas y hablamos de todo lo vivido. Al irnos a dormir imágenes en la cabeza y emociones en la piel. Muchos meses de trabajo, de alegrías y tristezas, adquirirían sentido y valor.

Roberto Rodríguez, voluntario de España (2000-2005)

Nos regalamos abrazos

En el año 2000 son desaparecidos Claudia Monsalve y Ángel Quintero, dos miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) de Medellín.

Por: Roberto Montoya, voluntario de España (2000-2009)

Eran las 10 de la noche del 6 de octubre del 2000. Claudia Monsalve dijo que se iba para su casa. Ángel Quintero se puso de pie para acompañarla a tomar el bus. Estaban compartiendo un momento de encuentro con otras personas de ASFADDES de la que hacían parte. Los dos buscaban a sus desaparecidos y terminaron siendo desaparecidos. Nunca más supimos de ellos.

Era sábado ya. Y poco a poco, con el transcurrir de las horas, lo que no queríamos aceptar se hacía realidad. Eran momentos de confusión, de carreras, de llamadas, de ir a lugares, de mirar en sitios, de preguntar a gente, de buscar. Nada. No aparecían.

El miedo, el horror, la desesperanza, los lloros, los quiebres de voz, el hablar bajito, el no hablar, el qué hacer, el cómo continuar, de dónde sacar fuerzas para organizarse en la tragedia. Estábamos en nuestra casa, la de PBI, familiares de ASFADDES, las familias de Ángel y Claudia y nosotros. Estábamos apoyándonos. Acompañándonos.

«¿Dónde está mi papá?, ¿por qué no está en PBI?» nos preguntaba el hijo pequeño de Ángel. ¿Qué responderle? Alzarle en alto y darle un fuerte abrazo es lo único que se nos ocurrió en ese momento. No queríamos que viera nuestros ojos



Foto: Manon Schick

Ángel Quintero antes de su desaparición en 2000

«De nuevo huir, escondernos. ¿Cuántas veces más?», nos preguntaba la hija mayor de Ángel, la mañana del 8 de octubre. Tampoco sabíamos qué responderle. Y, de nuevo, un abrazo nos salvó de tener que explicar lo inexplicable o de dar esperanza a la desesperanza. Días más tarde, otra vez hacer maletas, otro destino, otro lugar, otro escondite. Bogotá.

vez que alguien pronunciaba el nombre de su mamá.

Su hermano mayor tenía 11 años y no soportaba la idea de la ausencia de la mamá. Por eso, la información en los medios de comunicación que relacionaban las más de 2.500 interceptaciones telefónicas con la desaparición de su mamá y de Ángel lo estaban derrumbando¹. «Para el niño fue como romper la ilusión diaria que conserva de verla entrar por esa puerta. Por eso llora todo el tiempo, no quiere comer, no quiere salir. Fue una noticia de desesperanza para él, pero tal vez una primera aproximación a la verdad. Y es que si alguien ha tenido que soportar el rigor de la desaparición forzada, esos han sido los hijos de Claudia. Es como si la hubieran perdido dos veces. La perdieron cuando se enteró de la desaparición de Édgar, nuestro hermano menor. Y la perdieron ahora, quizás definitivamente», comentaba otro hermano de Claudia.

Hoy, nueve años más tarde, seguimos pensando en Ángel y Claudia. Me sigue entristeciendo su desaparición. Me sigue doliendo. Sigo sintiendo esos abrazos.

¿Dónde están Ángel y Claudia? ●

¹ «Hallan 2020 "chuzadas" que fueron ilegales», El Espectador, 15 de abril de 2001

«LA VIDA CONTINUABA. PERO HAY HERIDAS QUE NO SE CURAN».

empañados de lágrimas ni que escuchara lo que no podíamos decirle. Así estábamos todos, familiares y brigadistas.

Salimos de la casa. Íbamos a un lugar seguro. Algunas familiares de ASFADDES, la mujer de Ángel, sus cuatro hijas y el pequeño que no me soltaba de la mano. En silencio. Llegamos, repartimos colchones por los suelos e intentamos dormir. Los más pequeños se durmieron enseguida. Para el resto cualquier ruido era suficiente para desvelarnos, para no dormir. Teníamos miedo.

Despedida en el aeropuerto. Familiares de ASFADDES, el pequeño de nuestra mano, la mujer de Ángel silenciada. Y las hijas, ahí. Lloramos. Nos regalamos abrazos. Los necesitábamos. No fueron las últimas maletas que hicieron. Años después salieron del país.

Seis meses después: la vida continuaba. Pero hay heridas que no se curan. «No oigo, no oigo, soy sordita», y se ponía las manos en sus oídos para no escuchar. A sus seis años de edad, la hija de Claudia, hacia lo mismo cada

El duelo del exilio

A consecuencia de los continuas amenazas, los fundadores de la Fundación Manuel Cepeda Vargas buscan exilio en Francia. La psicóloga Claudia Girón recuerda los cuatro años de destierro.

Por: Francesca Nugnes, voluntaria de Italia (2008-9)

Claudia Girón, junto con Iván Cepeda, es fundadora de la Fundación Manuel Cepeda Vargas. PBI les acompaña desde 1998. Desde su nacimiento en 1994, la Fundación se ha dedicado a una incansable labor por la justicia. Su trabajo se basa en la convicción de que los avances en la lucha contra la impunidad en Colombia dependen esencialmente de la acción de

país. Tocaba salir para bajar la tensión, y a través de Amnistía Internacional y la Universidad Católica de Lyon logramos obtener dos becas para un programa de posgrado de dos años. El exilio siempre es duro pero en nuestro caso los primeros dos años fueron bien invertidos. La idea siempre fue volver. Sin embargo, cuando íbamos a regresar en el 2002, nos dijeron

que no había garantías para nuestro regreso porque Carlos Castaño había hecho unas amenazas públicas y nos había señalado como parte del Frente Manuel Cepeda de las FARC en Bogotá. Nos dijeron que era mejor quedarnos. Fue la etapa más dura porque ya no estábamos como estudiantes y tuvimos que hacer muchos esfuerzos.

PBI: ¿Cómo fue el regreso a Colombia después de cuatro años de exilio?

CG: Regresamos en abril del 2004. El regreso fue muy liberador porque nosotros queríamos volver. El exilio no tiene sólo que ver con la supervivencia y con el hecho de estar fuera de manera forzada, sino también con la condición en la cual están los compatriotas. Eso duele mucho. La red se rompe, las familias se rompen. El miedo da motivo a la gente para no volver. La gente vive en un paréntesis de nostalgia y tristeza y en muchos casos la gente nunca se adapta a las sociedades donde están y no se sienten parte de un nuevo mundo, sino aislados. El exilio es una condición muy complicada existencialmente. Yo, como ►►

«EL EXILIO NO TIENE SÓLO QUE VER CON LA SUPERVIVENCIA Y CON EL HECHO DE ESTAR AFUERA DE MANERA FORZADA, SINO TAMBIÉN CON LA CONDICIÓN EN LA CUAL ESTÁN LOS COMPATRIOTAS. ESO DUELE MUCHO. LA RED SE ROMPE, LAS FAMILIAS SE ROMPEN».

las víctimas. Entre los diversos frutos resultado de su actividad destaca el hecho de haber promovido diversos procesos de memoria y de verdad histórica sobre crímenes de lesa humanidad, una fuerte aportación a la organización y visibilidad pública de las víctimas, la contribución al reconocimiento de la responsabilidad estatal en el genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica y el desarrollo de una amplia labor de difusión de los derechos humanos en los medios masivos de comunicación. Claudia, además de desempeñarse en la Fundación, es profesora de psicología en la Universidad Javeriana.

PBI: ¿Por qué Iván Cepeda y tú decidisteis salir exiliados y cómo valoras este período?

Claudia Girón: En 1998 empezaron fuertemente las amenazas debido a que habíamos logrado que la justicia sancionara a los militares implicados en el asesinato de Manuel Cepeda, el papá de Iván. En abril del 2000 salimos del



Claudia Girón

►► psicóloga veo mucho el problema de la afectación, de la cultura, de los lazos familiares, de lo duro que es el haber sido alguien en tu país y llegar a un país donde uno se vuelve un ser monotemático, porque sólo habla de lo poco que conoce. Son sólo algunos los casos de personas que han logrado meterse en la sociedad y aportar sin olvidarse de lo que son, sin olvidar sus historias. Eso tiene mucho que ver con la actitud que tiene la gente y con el desafío que implica no dejar de ser lo que uno es pero aprender a ser distinto.

PBI: ¿Cómo empezó el acompañamiento de PBI y cómo lo valoras?

CG: PBI empezó a acompañarnos puntualmente en 1998-1999. Cuando regresamos en 2004 el acompañamiento fue más permanente. Empezamos a trabajar con otras organizaciones el posicionamiento del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en la coyuntura de la Ley de Justicia y Paz, que para nosotros es una ley excluyente de las víctimas. Desde 2004 hasta ahora hemos tenido el acompañamiento de PBI, sobre todo cuando vamos a regiones, y en algunos casos también en Bogotá. Para nosotros el trabajo de PBI es fundamental para sentirnos tranquilos y seguros. Sobre todo ir a regiones con PBI nos da mucha más seguridad.

PBI: ¿Hoy en día cuál es el reto más fuerte que tienen que enfrentar las organizaciones nacionales e internacionales?

CG: El reto más fuerte en este momento es confrontar las tácticas de estigmatización que está generando este Estado para deslegitimar nuestro trabajo, el de ustedes y el nuestro. El reto es generar mucha más legitimidad. En el caso de ustedes creo que es importante hacer más costosa la actitud del Estado de estar descalificando a personas que están haciendo un trabajo serio, que no tiene nada que ver con ninguna acción ilegal ni armada. Nosotros, las ONG colombianas, no hemos sido suficientemente contundentes con el tema de las chuzadas¹. Esto es un escándalo. El Estado está endilgándonos la legitimidad a través de acciones ilegítimas que son punibles con los códigos nacionales e internacionales como la difamación, la calumnia y las interceptaciones ilegales. ●

¹ Claudia Girón se refiere al seguimiento ilegal realizado por el DAS durante los últimos años. «El espionaje era peor», Semana, 25 de abril 2009



Lars Helmersson (centro) frente a la «Casa de la Mujer» de la OFP

Recuerdos de la toma paramilitar

Barrancabermeja: En el Barrio Prado Campestre en el suroriente de Barrancabermeja la Organización Femenina Popular (OFP) tiene una de sus Casas de la Mujer. A las 11 de la mañana, el 27 de enero de 2001, los paramilitares intentan tomar la casa pero la OFP, acompañada por PBI, se niega a entregar las llaves. Por la tarde, familias huyendo de sus casas se refugian allí e iniciamos una presencia de 24 horas al día, que va durar casi un mes, hasta que los desplazados han sido reubicados en otros sitios.

Las familias en su mayoría vienen de Pablo Acuña, un barrio vecino fundado hace 12 años por gente desplazada, ubicado como una isla al margen de la ciudad. Ahora casi todos se desplazan de nuevo. La OFP con nuestro acompañamiento los ayuda a salir. Muchos lloran cuando dejan sus hogares construidos con solidaridad y mucho esfuerzo. En las calles de Pablo Acuña patrulla el Ejército y afirma que todo está tranquilo.

Unos días más tarde hay 22 familias en la casa, con niños, perros, gallinas y todo lo que han podido traer. Hay dos mujeres en avanzado estado de embarazo, una de ellas de solo 14 años, que van a dar a luz durante el mes. Es apretado, caluroso, polvoriento y revuelto. Por las noches hacemos turnos de vigilancia y de vez en cuando suenan tiros.

Faltan unos minutos para las ocho de la mañana, el 8 de febrero en la Casa de la Mujer. Estoy allí desde la noche anterior. Van a realizar una reunión de solidaridad a las nueve, están haciendo el aseo y la puerta del patio está abierta. Estoy parado en el patio a pocos metros de la puerta cuando dos jóvenes de unos 18 años, con pantalón jean y camiseta entran con pasos decididos. Entiendo inmediatamente que son paramilitares. Uno de ellos va hacia mí y dice en tono mandón y agresivo «papeles». Con una mezcla de rabia y temor respondo desafiante «¿Por qué?» «Los papeles y el celular», repite más agresivo. «Presento mis documentos a las autoridades pero no a ustedes», respondo. Los dos mueven sus manos hacia la pretila de sus pantalones donde bajo sus camisetas veo los bultos de sus pistolas. Por una fracción de segundo el impulso de decir un «no» rotundo cruza mi mente pero no puedo medir las consecuencias y le alcanzo mis cosas. Me arrebatan mi pasaporte y el otro mi celular y antes de salir rápido por la puerta me apunta diciendo «A partir de ahora usted es objetivo militar de las Autodefensas». A Jackeline Rojas, coordinadora de la OFP, que estaba a unos metros de mí le ha pasado lo mismo.

Todo pasó en 20 segundos y siento un leve temblor en las manos cuando tomo un celular que alguien me alcanza. Intento llamar al equipo de PBI pero los teléfonos están ocupados y con ninguno de los tres números de celular de la base militar del barrio logro comunicarme. Mientras tanto la OFP llama para informar de lo sucedido y pronto el lugar es inundado por organizaciones, prensa, Policía y DAS. Después de responder a preguntas regreso a nuestra casa. El proyecto toma la decisión de que salga de Barranca con el próximo vuelo que será mañana.

La reacción, nacional e internacional fue rápida y contundente. En este momento, Suecia tenía la presidencia de la Unión Europea. El día siguiente un vocero de las AUC, en el periódico local Vanguardia Liberal, dice: «nuestra organización no adelantó ninguna acción en contra de la OFP, o de las Brigadas Internacionales de Paz. Ayer ningún mando nuestro ordenó acciones de ese tipo».

El mismo día mi pasaporte y mi celular son devueltos por un profesor que dice que fueron encontrados en una escuela en el barrio. Por la tarde el muchacho que me amenazó viene a la Casa de la Mujer junto con otro hombre y pregunta amablemente por «el viejo con las gafas», para decir que «fue un error» y prometer devolver lo robado. Pero no estoy allí.

Camino al aeropuerto, me despido de las organizaciones y noto que algo ha cambiado. Sin embargo, el 20 de febrero estuve de regreso para la alegría de nuestros acompañados. «El regreso de Lars es una victoria para nosotros» decía Francisco Campo de CREDHOS.

Por: Lars Helmersson, voluntario de Suecia (1995 – 2004)

Navidad de «dolor y sangre» en Barrancabermeja

Los paramilitares toman esta ciudad del Magdalena Medio e imponen a fuego el dominio político, económico y social. Esta incursión provoca varios muertos y desaparecidos.

Por: Paco Simon Conejos, voluntario de España (2000-2002)

Barrancabermeja tuvo el triste privilegio de convertirse, en el año 2000, en una de las ciudades más violentas del mundo, con 567 asesinatos y una tasa de criminalidad de 227 muertes por cada 100.000 habitantes¹. Esta población, surgida a principios del siglo XX paralelamente a la explotación de los yacimientos petrolíferos y sede de la principal refinera del país, fue desde sus orígenes epicentro del movimiento social colombiano pero en sus barrios había una fuerte presencia de las guerrillas de las FARC y el ELN. Estas características la convirtieron en objetivo de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes ese año se lanzaron a su conquista. Pese a las reiteradas denuncias de las organizaciones de derechos humanos de que a los vecinos les estaban amenazando con una Navidad «de dolor y sangre», y pese a la fuerte presencia de la Fuerza Pública, que con más de 2.000 efectivos la convertían en una de las ciudades más militarizadas de Colombia, un centenar de hombres de las AUC iniciaron el 22 de diciembre la fase final de la toma de Barranca. Inexorablemente impusieron, a fuego, el dominio político, económico y social que todavía ejercen aunque de manera menos visible. Yo llevaba dos meses en el equipo y el resto de mi tiempo en PBI se puede resumir perfectamente con una frase de Saramago: «Nosotros, los humanos, somos así, lo sentimos todo al mismo tiempo». Dolor por los muertos y desaparecidos y alegría por la resistencia de los vivos, miedo por el alto riesgo de nuestros acompañados y deseos de estar a su lado permanentemente, cansancio por el exceso de trabajo y satisfacción por la actitud de mi equipo.

En los primeros 45 días de 2001 fueron asesinadas 145 personas, la mayoría acusadas de colaborar con la guerrilla². Cayeron hombres y mujeres que habían liderado las reivindicaciones para mejorar las deplorables condiciones de vida de la población de una de las zonas del país más ricas en recursos naturales. Los defensores



Ana Teresa Rueda de la OFP y Paco Simón

de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), la Organización Femenina Popular (OFP) y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) a quienes acompañábamos comenzaron a sufrir todo tipo de presiones y amenazas para

«CUANDO VARIOS DEFENSORES NO PUDIERON RESISTIR MÁS Y TUVIERON QUE MARCHARSE DE BARRANCA SENTÍ UNA ENORME IMPOTENCIA».

de dejaran de denunciar y abandonaran la ciudad. En cualquier momento saltaban las alarmas y teníamos que salir a cualquier hora del día o de la noche para realizar un acompañamiento o hacer las llamadas pertinentes para tratar de garantizar su seguridad. Además, algunos de los defensores más amenazados y varias casas de la OFP tenían acompañamiento las 24

horas. Experimenté un estrés distinto al que había sufrido en mis anteriores trabajos. Ahora ya no se trataba de presión laboral sino que tenía la sensación de que de cada decisión nuestra dependía la vida de los acompañados.

Cuando varios defensores no pudieron resistir más y tuvieron que marcharse de Barranca sentí una enorme impotencia. En esos momentos tuve ganas de huir, pero, poco a poco, comprendí que aceptar nuestras limitaciones formaba parte de la propia efectividad del trabajo de PBI.

También fue el año en que las AUC declararon objetivo militar a PBI. El 8 de febrero de 2001, dos paramilitares le quitaron el pasaporte y el celular a nuestro compañero Lars mientras estaba en una casa de la OFP, y al marcharse le dijeron: «A partir de ahora usted es objetivo militar de las Autodefensas». Pasamos de disuadir frente a las amenazas a ser amenazados y hubo una gran preocupación entre las ONG sobre la actitud que íbamos a adoptar.

Lars salió un tiempo a Bogotá para denunciar lo ocurrido y PBI no sólo no redujo su trabajo en Barranca sino que duplicó la cantidad de miembros del equipo. Fue una decisión tan valiente como consecuente. Sólo me resta reiterar lo que ya dije en un anterior aniversario: desde que estuve en PBI

no soy el mismo. PBI me abrió los ojos. Me puso en medio de un conflicto al lado de las víctimas para ayudarlas y éstas me ayudaron a mí a ver la realidad sin tapujos. ●

¹ «Magdalena Medio, un espejismo de paz», informe presentado por la Corporación Reiniciar en 2003 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

² Resolución número 007 de la Defensoría del Pueblo, 6 de marzo de 2001

Resistir por la vida

Durante su larga trayectoria de defensor de derechos humanos, Pablo Arenales ha sido víctima de amenazas y ataques contra su vida.

Por: Vicente Vallies, voluntario de Francia (2001-2009)

Foto: Sebastian Rötters



Pablo Arenales

El día que conocí a Pablo fue a su regreso de una gira por España. Era a finales de 2001. Había salido de la región pocos meses antes, después de haber sufrido un atentado en 1999 y tras la toma paramilitar de Barrancabermeja, ciudad en la cual trabajaba en el seno de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), organización acompañada por PBI desde su llegada a Colombia en el 1994. Me reuní con él con el difícil papel de comentarle que estábamos todavía debatiendo en PBI sobre nuestra capacidad de brindarle protección.

Hoy, ocho años después, nos sentamos de nuevo para hablar de esta época. Pablo Arenales se vinculó a CREDHOS en 1991. Fueron años de muchos hostigamientos y amenazas, que en la mayoría de los casos se cumplían. Así lo demuestran los asesinatos de Blanca Cecilia Valero, secretaria de Jahel Quiroga, entonces Presidenta de CREDHOS; de Julio Cesar Berrio, miembro de CREDHOS; el fallido atentado contra Jorge Gómez Lizarazo, presidente de CREDHOS. Todos estos actos fueron organizados por lo que más tarde se conoció como la Red 07 de inteligencia de la Armada Nacional¹ y, como consecuencia de ellos, varios de los miembros de CREDHOS tuvieron que salir desplazados y otros al exilio, durante los años 1991 y 1992.

FUERON AÑOS DE MUCHOS HOSTIGAMIENTOS Y AMENAZAS, QUE EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS SE CUMPLÍAN.

Él mismo fue herido en 1992 cuando participaba en una Comisión de Verificación de la masacre ocurrida en el barrio de Versalles, sector nororiental de Barrancabermeja. «La masacre se dio el día 10 de junio del 1992 en un billar, donde llegó un grupo de sicarios al servicio de la Red 07 de la Armada Nacional que se movilizaban en una microbuseta de servicio público. Cuando llegaron al sitio procedieron a disparar asesinando a varias personas. Al día siguiente, 11 de junio, se conformó la Comisión de Verificación, compuesta por miembros de la Coordinadora Popular y de CREDHOS. Nos dirigimos al lugar donde se efectuó la masacre y después fuimos a los sitios donde estaban velando a los muertos para obtener información de los hechos

y también para solidarizarnos con los familiares de las víctimas. Cuando la comisión se disponía salir del sector, varios hombres armados que estaban ubicados a los lados de la carretera nos dispararon». Afortunadamente salieron ilesos, gracias al chófer, porque no dejó apagar el carro, «el tipo le dio así con las llantas pinchadas. (...) A mí me pegó una bala por acá (indica el hombro derecho). Ese día después del susto, nos dirigimos a la oficina de CREDHOS, donde celebramos que estábamos vivos».

Frente a esta situación, CREDHOS decide pedir el acompañamiento internacional de PBI y el primer equipo llega en octubre del 1994 a pesar del escepticismo inicial de compañeras y compañeros que decían: «¿Qué van ►►



La ciudad petrolera Barrancabermeja (Magdalena Medio)

Foto: Sebastian Rötters



La organización CREDHOS promueve los derechos humanos en la región del Magdalena Medio.

► a proteger si no andan armados?». PBI ganó el reconocimiento de la gente. Como lo dice Pablo «porque si bien no pararon las amenazas, estigmatizaciones y señalamientos, sí bajaron y la disuasión se materializó». En 1999, Pablo sufrió un intento directo de asesinato mientras esperaba en un restaurante. «Nosotros con todas las experiencias de las amenazas, estábamos siempre vigilantes y pendientes. Ese día ante el freno en seco de una moto,

roca hasta que la parte». Ante este contexto, varias organizaciones amigas recomiendan a Pablo su salida del país y frente a su resistencia decide realizar una gira en Europa durante tres meses para visibilizar la situación de derechos humanos y crisis humanitaria de la región y de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

A su regreso, PBI decidió seguir acompañándole hasta el año 2005 cuando sale nuevamente del país por nuevas situaciones de amenazas. Hoy Pablo sigue su camino de defensor de derechos humanos desde Bogotá con otra organización, Reiniciar, que lucha para reivindicar la memoria de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica, exigir verdad, justicia y reparación y para que estos crímenes nunca más se vuelvan a cometer.

Terminando la entrevista Pablo resalta que «estos quince años deben constituirse en un homenaje para todos los voluntarios y voluntarias que han pasado por PBI, quienes con su presencia, acompañamiento y trabajo de incidencia nacional e internacional, así como por su compromiso por una sociedad más justa, han permitido que las personas defensoras de derechos humanos en Colombia continuemos realizando nuestro trabajo en medio de un contexto represivo, violento y polarizado. A ustedes y a ellos muchas gracias y espero que su trabajo continúe en favor de la defensa de la vida y la dignidad». ●

volteo a mirar y veo al parrillero de la moto que se lanza hacia atrás y saca un arma». Pablo se resguarda detrás del mostrador en una pieza, el sicario grita «¿dónde está este HP?, ¿dónde se metió?», pero ya que el efecto sorpresa con el cual contaba se esfumó, decidió irse. Pablo logró entonces llamar a Jim de PBI, quién le vino a recoger y pasó esa noche en la casa de PBI para tener mayor protección.

El 23 de diciembre de 2000 se dio lo que se llamó la toma paramilitar de Barrancabermeja. Para Pablo fue algo que resultó de «un proceso de largo plazo, como la gota que cae sobre la

Reconocimiento a un ideal

Por su trabajo de acompañamiento a personas defensoras de derechos humanos, PBI recibe el Premio Ennals

Por: Manon Schick, voluntaria de Suiza (2003)

«Los voluntarios de PBI son la expresión directa de las preocupaciones internacionales a favor de los defensores de los derechos humanos en el terreno. Su coraje y su dedicación expresan los ideales más altos de la defensa de los derechos humanos. En este año dedicado al voluntariado, los que arriesgan su vida con calma y con conocimiento de causa merecen más que nunca este premio».

Discurso de Hans Thoolen, Presidente de la Fundación Martin Ennals en la entrega del Premio Ennals en 2001, otorgado a PBI por su trabajo en Colombia. Esta fue la primera y única vez que este premio fue otorgado a una ONG y no a una persona defensora de los derechos humanos.

«La pena de muerte que pesa sobre cada uno de nosotros no se ha ejecutado porque no estamos solos, Brigadas Internacionales de Paz nos acompaña», afirmó un defensor de los derechos humanos colombiano durante la ceremonia en Ginebra.



La voluntaria suiza Nadia Akmoun

El premio Martin Ennals fue también otorgado a uno de los defensores más conocidos en Colombia, el abogado Alirio Uribe del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en el año 2003. El abogado agradeció a PBI el acompañamiento con las siguientes palabras: «Pienso que el acompañamiento de PBI es la protección más eficaz para nosotros, los defensores de los derechos humanos. Un acompañamiento no-violento, político, es mucho más eficaz que escoltas armados».

1 Miembros de organismos de seguridad del Estado colombiano, coordinados por la Armada Nacional asesinaron a más de 130 dirigentes sociales, populares y defensores de derechos humanos en la ciudad de Barrancabermeja. «Preocupación por los defensores de los derechos humanos de Barrancabermeja», Campaña: Colombia. ¡Los queremos vivos!, Amnistía Internacional

Resistencia ante un proyecto de muerte

En los comedores, las mujeres de la Organización Femenina Popular reciben las denuncias sobre los abusos cometidos por los paramilitares en Barrancabermeja.

Por: PBI Barrancabermeja

Yolanda Becerra, coordinadora de la Organización Femenina Popular (OFP) y del Movimiento de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, recuerda la toma paramilitar de Barrancabermeja a finales del año 2000 y el impacto que este hecho tuvo en las organizaciones sociales y en la OFP en particular.

La incursión paramilitar

Yolanda Becerra: En la noche del 23 de diciembre del año 2000 llegaron los paramilitares a la ciudad. Montaron sus comandos y entraron en el barrio 1° de Mayo. Asesinaron a varias personas en la calle y en la cancha. Tomaron casas de personas dirigentes de los barrios, dirigentes comunales, sociales, entrando como 10-20 en cada casa. Ahí secuestraron a las familias: las mujeres tenían que prepararles comida, usaron la ropa de las familias y los niños no pudieron ir a escuela.

Foto: Manon Schick



Marcha de la OFP en Barrancabermeja

Así respondió la gente

YB: El 24 de diciembre fuimos al barrio 1° de Mayo. Era como un campo de concentración. Sólo se veían hombres vestidos de negro y armados hasta los dientes y portones cerrados. La policía les llevaba comida a los paramilitares en aquellas casas.

Para apoyar a las familias secuestradas, mujeres que venían a los comedores para comprar un plato

lograron organizar una comisión verificadora especializada para que las personas dieran sus testimonios y denunciaran. Esta comisión denunció los vínculos de instituciones del Estado con los paramilitares y la responsabilidad de los paramilitares en la toma de Barrancabermeja. Mucha gente que a pesar de la angustia y el temor hizo denuncias, o fue asesinada o tuvo que desplazarse.

golpeadas. Trabajamos mucho para las jóvenes, a muchas les salvamos las vidas.

La resistencia de las mujeres de la OFP

YB: En este entonces la OFP era fuerte y esto nos dio la posibilidad de resistir, pero los seis años de resistencia llevaron a un desgaste. El trabajo afectó a las integrantes de la organización, en un contexto donde se aterrorizó y se destruyó el tejido social. Las mujeres habían buscado a los desaparecidos, sacado a los muertos de los ríos, acompañado a las familias, tramitado denuncias, visibilizado la situación a todas las comisiones internacionales que llegaron. Esto nos hizo olvidarnos de nosotras mismas y nos afectó, con impactos que todavía se notan.

Otro aspecto destacable fue la pérdida de la confianza política de un tejido fuerte, de una región fuerte, de una resistencia de Barranca. Eso también nos afectó. A pesar de los altos costos humanos, económicos y políticos en este contexto logramos resistir mucho tiempo. Así que no lograron silenciarnos o uniformarnos totalmente. ●

«SÓLO SE VEÍAN HOMBRES VESTIDOS DE NEGRO Y ARMADOS HASTA LOS DIENTES».

de sopa nos daban un papelito con la dirección de sus casas. Sabían que nosotras podíamos hacer las denuncias.

Desde este momento empezamos a recibir cada día denuncias en los comedores. Entonces, el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos junto con la Unión Sindical Obrera (USO), que en este momento tuvo un papel muy importante,

Los manuales de convivencia

YB: Durante la toma se impuso un manual de convivencia que establecía normas de comportamiento para todas las personas: horarios de acostarse, los colores con los cuales la gente se podía vestir, etc. Los jóvenes no podían ponerse aretes porque les arrancaban las orejas; las jóvenes que no les aceptaban los amoríos a los paramilitares eran amenazadas y

Una paz aparente

El conflicto urbano en Medellín: a pesar de la desmovilización de los paramilitares, los barrios más pobres siguen registrando altas tasas de violencia.

Por: Dorrit Timmer, voluntaria de Holanda (2002-2004)



Foto: Jorge Mata/Surimages-IPA

Dorrit Timmer en un acompañamiento a la Corporación Jurídica Libertad en un asentamiento de desplazados en Altos del Oriente, Medellín

Desde la casa escuchábamos los ruidos de los helicópteros que sobrevolaron durante largas horas la ciudad. Era mayo de 2002, se estaba llevando a cabo la Operación Mariscal en los barrios de la Comuna 13. En las noticias veíamos cómo un despliegue militar de grandes dimensiones invadió esa zona popular de Medellín. Se capturaron milicianos y supuestos milicianos, cayeron heridos y casi una decena de civiles resultaron muertos.

Apenas llevaba unas semanas en el equipo de PBI en Medellín. A pesar de que la vida transcurría normalmente en gran parte de la ciudad, sentíamos una guerra

operación, que siguió unos meses después bajo el nombre de Orión, dejó otras tantas víctimas debido a la fuerza militar excesiva que se impuso, en medio del contexto urbano. A partir de ese momento muchas organizaciones denunciaron un control militar y paramilitar en ciertos sectores de la comuna¹.

A pesar de que desaparecieron los retenes armados que algunas veces nos habían incomodado y asustado en el camino entre las fronteras de diferentes barrios, de aquí en adelante muy pocas veces acompañamos actividades en esta zona. El trabajo comunitario en gran parte

y Paz, militares, policías y paramilitares compartían espacios y toda información acababa en manos equivocadas². La crítica se consideraba sospechosa de subversión y quienes se atrevían a denunciar agresiones y violaciones se tenían que desplazar o lo pagaban con la vida. Fosas comunes lo confirmarían años más tarde³.

Con un espectáculo de entrega masiva de armas a finales de 2003 empezó oficialmente el desarme del Bloque Cacique Nutibara en Medellín. Unos novecientos paramilitares de este grupo dejaban las armas para reintegrarse a la vida civil. A cambio de la verdad recibirían condenas reducidas y nuevas oportunidades patrocinadas por el Estado.

A partir de 2006, ya desde mi nuevo trabajo en medio de las históricas comunas, pude acercarme más a la realidad que vive la mayoría de la gente en Medellín, aunque la ciudad ya era otra.

«A pesar del discurso oficial del Gobierno sobre la inexistencia de paramilitarismo en el país, aparecen llamadas de las auto denominadas “Águilas Negras”, panfletos con mensajes fascistas, intimidaciones y robos de información a organizaciones sociales en sectores con control estatal, presencia de grupos de mafias locales vinculados al tráfico de drogas y explotación sexual de jóvenes. Saldos de más de veinte muertos violentos por ajustes de cuentas en algunos fines de semana hacen recordar épocas anteriores y vislumbran una realidad camuflada en la capital antioqueña⁴».

La imagen de una aparente normalidad no puede ocultar la realidad de la violencia que sigue asolando Medellín. ●

«¿ENTONCES, ESA ERA LA PAZ DE LA QUE SE HABLABA?»

muy cerca. Procurábamos mantener la comunicación con el voluntario que estaba acompañando a un abogado en la zona de disputa. La comisión que estaba verificando el respeto por los derechos humanos se encontraba en medio de los hechos y los grupos enfrentados.

Nos dijeron que se había empezado a «retomar y pacificar» la comuna. Una nueva

se había quebrado, porque nadie confiaba en nadie. Las pocas veces que íbamos, observábamos el silencio tan extraño que reinaba por la zona. La gente estaba en sus casas y ya no saludaba. ¿Entonces, esa era la paz de la que se hablaba?

El trabajo con víctimas y hablar de derechos humanos se volvió delicado porque según la investigación de CINEP y Justicia

1 «Colombia: Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?», Amnistía Internacional, 1 de septiembre de 2005

2 «Los órganos de justicia y control compartiendo arbitrariedades de la Fuerza Pública», Banco de Datos de Violencia Política, CINEP y Justicia y Paz, mayo de 2003

3 «Sentencia judicial confirma fosas comunes y control paramilitar en la Comuna 13 con posterioridad a la Operación Orión», Movimiento de Víctimas, abril de 2008

4 «Las “Águilas Negras” anuncian limpieza social en un sector de Medellín», Caracol Radio, 31 de enero de 2008

Operativos contra la población civil

La Operación Orión llevada a cabo en 2002 por la Fuerza Pública en la comuna 13 deja un saldo de un muerto, 28 heridos y 355 detenidos. Las organizaciones denuncian la desaparición forzada como un patrón de represión.

Por: Peter Biermann, voluntario de Alemania (2007-9)

«Más de mil uniformados pertenecientes al Ejército, la Policía, el DAS e integrantes del CTI (...) arribaron a la Comuna 13 de Medellín a bordo de camiones y tanques blindados»¹. El mismo año hubo una serie de operativos contra las milicias de los Comandos Armados del Pueblo (CAP), ELN y FARC en esta zona: Operación Otoño, Contrafuego, Mariscal, Potestad y Antorcha².

En mayo, durante la operación Mariscal, los habitantes sacaron pañuelos y prendas blancas, salieron a la calle en medio de los enfrentamientos, recuerda Nelly Osorno del Instituto Popular de Capacitación (IPC)³. Esta movilización logró parar el fuego. Adriana Arboleda de la Corporación

productivas en el sector textilero, mientras que la CJL tenía procesos de formación en derechos humanos con líderes de las Juntas de Acción Comunal, jóvenes y comités barriales en la Comuna 13. Adriana recuerda que era una zona con un movimiento social fuerte. Nelly explica que muchos barrios surgieron por invasiones y «claro, les ha tocado construir las casas, los andenes entre todos a través de la solidaridad de los vecinos».

Un muerto, 28 heridos y 355 detenciones denuncia un informe de 2003 como saldo de la población civil durante la operación Orión⁴. «Había un cerco completo y esta vez nadie podía entrar. Durante los meses posteriores militares andaban junto con informantes encapuchados»⁵. Muy bien recuerda Nelly

desaparición forzada, sobre todo de jóvenes en los meses posteriores a los operativos». Luego se denunció la aparición de grupos paramilitares: «Se empezó a ver gente nueva, muchos de Urabá. Allí, empiezan a posicionarse los paramilitares»⁶.

A modo de conclusión, Nelly afirma que «uno de los principales daños fue la desconfianza que se creó entre las personas porque uno no sabe quien es quien. Entonces la operación Orión nos cambió la pregunta acerca de qué hacer con las organizaciones: Primero tocó reconstruir confianza».

A raíz de esos acontecimientos la CJL decidió alertar y visibilizar sobre ésta operación, una estrategia integral de militarización de la ciudad. Así fue en la zona nororiental, donde acompañaba en el marco del Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL), los Asentamientos de Refugiados Internos por la Paz y los Derechos Humanos. «Desde luego subíamos con brigadas y organizamos conjuntamente la visita de embajadores», recuerda Adriana. Sin embargo, en enero de 2003 la Fuerza Pública inició la operación Estrella 6 en estos mismos asentamientos: Allanaron casas y detuvieron a cerca de cien personas, como señala un comunicado de CODEHSEL de esa época⁷.

La violación de derechos en la Comuna 13, después de las operaciones militares, hizo que la CJL iniciara un trabajo con los familiares de las víctimas. Este trabajo se mantiene hasta ahora, por ejemplo, reivindicando la exhumación de las fosas comunes en La Escombrera de la Comuna 13. ●



Foto: Jorge Mata/Surimages-IPA

La voluntaria italiana Delia Bocchi acompañando en la Comuna 13

Jurídica Libertad (CJL) cuenta que se conformó una comisión de verificación integrada por un miembro de la CJL y acompañado por PBI, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas, que también sirvió de presión para detener la operación y evitar más riesgos para las comunidades.

La CJL y el IPC sostienen varios años de trabajo en la Comuna. El IPC empezó a mediados de los años noventa un proceso de capacitación y formación con mujeres en algunos barrios y fomentaba cadenas

de detención de tres líderes de la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI) a raíz de un señalamiento. «Cuando recibí información de su detención, salimos como locas a la base en el barrio El Corazón pero no nos dejaron entrar. Durante la madrugada cambiaron a las mujeres varias veces del lugar de detención; siempre alguno de nosotros siguió el carro de la Fuerza Pública, para no perder el rastro de las prisioneras». Al respecto comenta Adriana: «Nosotros hemos denunciado que uno de los patrones de represión que hubo en la comuna 13 fue la

1 «Comuna 13, la otra versión», Banco de Datos de Violencia Política, CINEP y Justicia y Paz, mayo de 2003, página 20

2 «Memoria histórica de la Comuna 13 de Medellín», Elkin Ramírez (CJL), 26 de febrero 2008

3 Entrevista con Nelly Osorno, IPC, 6 de agosto 2009

4 «Comuna 13, la otra versión», Banco de Datos de Violencia Política, CINEP y Justicia y Paz, mayo de 2003, página 21

5 Entrevista con Adriana Arboleda, CJL, 8 de agosto 2009

6 Entrevista con Nelly Osorno, IPC, 6 de agosto 2009 y «Comuna 13, la otra versión», página 22f

7 «Advierten sobre un estado de excepción de facto en Medellín», CODEHSEL, 8 de diciembre 2004

8 «Diego Fernando Murillo reconoce coordinación con la Fuerza Pública en la Operación Orión», CJL, 3 de marzo de 2009

Vamos a seguir luchando

Asesinan al hermano de Jackeline Rojas, integrante de la Organización Femenina Popular. Cinco años después, nadie ha sido condenado.

Por: Manon Schick, voluntaria de Suiza (2003)

«¡No alcanzaron a eliminarme y mataron al único hombre de mi familia!» El hermano de Jackeline Rojas, Jesús Rojas Castañeda, fue asesinado el 3 de diciembre de 2003. Era profesor en Barrancabermeja; su hermana, una de las líderes de la Organización Femenina Popular, acompañada de manera regular por PBI. Aunque los hechos siguen sin ser esclarecidos, los indicios apuntan a que los responsables de los asesinatos son los paramilitares¹.

Un año después del asesinato, la policía seguía sin haber detenido a ningún sospechoso. Hasta hoy, cinco años después, nadie ha sido condenado.

En la familia de Jackeline ya habían sufrido el asesinato de dos hombres: «Mi

ex esposo y mi padre fueron asesinados por la guerrilla. Mi padre trabajaba como chófer para los militares encargados de vigilar las instalaciones petrolíferas. En Colombia, cuando uno no está de un lado, se vuelve enseguida el enemigo. Para el gobierno, nosotras, las de la OFP, somos terroristas porque lo criticamos»².

El entierro fue un momento dramático, con centenares de estudiantes presentes en la iglesia llorando a su profesor. Todo el equipo de Barrancabermeja acompañó la marcha de las mujeres de la OFP, vestidas de negro, en la ciudad y durante el entierro. Fueron momentos duros, incluso para los no creyentes. La tristeza de Jackeline y de sus familiares nos afectó bastante.

Nos hizo sentir aun más impotentes frente a tanta violencia. Al mismo tiempo, este asesinato confirmaba una vez más el peligro al que se enfrentan cada día las defensoras de los derechos de las mujeres.

Para Jackeline fue muy duro aceptar que Jesús murió por el simple hecho de ser el hermano de una mujer defensora de los derechos humanos. «Quieren acabar con nosotras, quieren que no sigamos luchando. Pero no sabemos hacer nada más que eso. Así que vamos a seguir», me confiaba Jackeline un año después, durante una gira de conferencias en Suiza. ●

¹ Comunicado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Bogotá, 11 de diciembre de 2003
² «Portrait - Après cinquante ans de guerre», 24 Heures (periódico suizo), 8 de diciembre de 2004



Foto: Sebastian Rötters

Mujeres en un comedor comunitario de la Organización Femenina Popular en Barrancabermeja

Nuestra fortaleza es creer en lo que hacemos

Debido a su trabajo de lucha por el respeto a los derechos humanos, Soraya Gutiérrez y su hija afrontan amenazas y seguimientos.

José Antonio Serrano, voluntario de España (2008-9)



La abogada Soraya Gutiérrez y el voluntario español José Antonio Serrano

Cuatro años después de que la abogada Soraya Gutiérrez fuera víctima de un atentado y de graves amenazas directamente a su persona y a su familia, la huella de lo que significó empañó su mirada cuando lo recuerda. Inevitablemente lo vincula con inquietud a los recientes hechos de espionaje y seguimientos de que ha sido objeto como parte integrante de la Corporación Colectivo de Abogados José

de esta masacre, la abogada se dirigía a su casa en Bogotá manejando el coche blindado que tenía asignado. Otro vehículo se cruzó en su camino. Descendieron tres hombres fuertemente armados que intentaron obligarla a bajar del vehículo. Afortunadamente consiguió escapar y llegar a casa. En días anteriores, Soraya y su entorno habían sido objetos de otros seguimientos e intentos de intimidación. Todos los hechos fueron pertinentemente denunciados, pero jamás obtuvieron una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades ni hubo una investigación acertada, según manifiesta Soraya.

Tampoco la hubo ante las nuevas amenazas que sufrió dos años más tarde, implicando esta vez a su hija. Además de seguimientos al bus escolar donde se movilizaba la niña, se recibió un paquete en su casa dirigido a la pequeña y falsamente remitido por su abuelo, en cuyo interior se hallaba una muñeca descuartizada, pintada de esmalte rojo con una nota escrita: «Usted tiene una familia muy linda: no la sacrifique».

El impacto en la vida personal y profesional de Soraya fue gravísimo. «Cuando uno asume esta labor de defensa de los derechos humanos en un país como este, pones tu carrera y profesión al servicio de la lucha contra la impunidad, sabes que corres unos riesgos y estás dispuesto a ello.

«En los primeros meses vivía muy angustiada, pero nunca pensé en dejar el país de manera permanente. Estoy convencida de que no me voy de Colombia, no me voy a exiliar nunca. Tengo la certeza y la convicción de que el trabajo de defensa de derechos humanos se tiene que hacer desde aquí. Los que quieren que nos vayamos no lo van a lograr, al menos conmigo».

Es difícil ponerse en su piel y saber de dónde esta mujer y las personas como ella sacan la fuerza para seguir adelante en su trabajo dentro de este ambiente hostil. Soraya reconoce la dificultad: «la fortaleza que tenemos es creer que lo que hacemos está contribuyendo a mejorar la situación de este país, a hacer justicia y a encontrar la verdad. Estamos convencidos de que lo que hacemos es un compromiso ético y de vida. Además es todo el trabajo que hemos desarrollado como equipo, no de uno o dos abogados, sino como Colectivo. Nos apoyamos los unos en los otros y eso nos hace fuertes. Hemos ganado reconocimiento nacional e internacional, y esto nos aporta fortaleza. Nos ayuda el trabajo de organizaciones hermanas, agencias de cooperación y organizaciones que nos acompañan, como PBI, no sólo con el acompañamiento físico sino con todo lo que implica proteger nuestro espacio de trabajo. Son estas condiciones las que nos sostienen,

«CUANDO UNO ASUME ESTA LABOR DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN UN PAÍS COMO ESTE, SABES QUE CORRES UNOS RIESGOS Y ESTÁS DISPUESTO A ELLO. ES DISTINTO CUANDO SE METEN CON TU LADO MÁS DÉBIL, TU FAMILIA Y SERES QUERIDOS. ESO TIENE UN IMPACTO DURÍSIMO.»

Alvear Restrepo (CCAJAR), dentro de la Operación Transmilenio¹ del DAS.

En febrero del 2003 Soraya trabajaba en el caso de la masacre ocurrida en El Páramo de la Sarna, donde fueron asesinadas 15 personas que viajaban en un autobús. Días después de reunirse con víctimas

Es distinto cuando se meten con tu lado más débil, tu familia y seres queridos. Eso tiene un impacto muy fuerte, durísimo». Todo esto tuvo un coste para su vida familiar y de pareja, tuvo que cambiar de domicilio, e incluso influyó en el desarrollo de su hija. Pero al mismo tiempo siguió trabajando.

son una mezcla de lo personal, político, e institucional, así como creer que estamos aportando a la paz. Si no, como muchos otros, ya nos habríamos ido». ●

¹ «La "pesadilla del DAS" continua», CCAJAR, 4 de mayo de 2009

Luchar con dignidad

Según el abogado y defensor de derechos humanos Jorge Molano, en Colombia, para defender los derechos humanos hay que renunciar al derecho a la libertad.

Por: Simone Droz, voluntaria de Suiza (2009)



El abogado Jorge Molano y la voluntaria suiza Simone Droz

Cuando preguntamos al abogado Jorge Molano si ha pensado en exiliarse al extranjero por los peligros que implica su trabajo, dice riéndose: «no, porque no podría comer gallina criolla con papas».

Jorge lleva la mitad de su vida como abogado independiente de derechos humanos y trabaja en casos emblemáticos que involucran a militares de alto rango y a funcionarios de alto nivel, como José Obdulio Gaviria, ex asesor del Presidente Uribe Vélez. A pesar de los riesgos, durante muchos años no quiso hacer uso del esquema de seguridad proporcionado por el Estado. Sin embargo, debido a la exposición pública en medios de comunicación que han mostrado los casos que está llevando y las identidades de las personas involucradas, se ha visto obligado a asumir un esquema de protección.

A Jorge le duele el hecho de que, en un país como Colombia, para defender los derechos humanos haya que renunciar al derecho a la libertad y a la intimidad.

«EL CASO DE LA OPERACIÓN DRAGÓN SE PUEDE VER COMO UN ANTECEDENTE DE LAS ACTUALES INTERCEPTACIONES ILEGALES DEL DAS».

A pesar de estas limitaciones que vive el defensor y de los muchos compañeros que ha perdido en el camino, asesinados o en el exilio, mantiene la convicción de que la única opción es luchar con dignidad.

PBI ha acompañado a Jorge Molano en el marco de la Operación Dragón¹, un plan diseñado desde altas instancias del Gobierno nacional, conjuntamente con la Fuerza Pública y empresas privadas, para asesinar a defensores de derechos humanos, líderes sindicales y miembros de la oposición en Colombia². El departamento de inteligencia militar de la Brigada 3 del Ejército Colombiano en Cali contrató a dos empresas privadas

de seguridad para recoger información sobre 170 defensores. Esta labor de inteligencia fue apoyada por la unidad del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Cali, la policía de la misma ciudad y el DAS³. En 2004 el Senador del Polo Democrático Alexander López Maya fue alertado de este plan criminal. Según la información recibida, los primeros en la lista eran él mismo, seguido de la defensora de derechos humanos Berenice Celeyta, Presidenta de la Asociación para la Investigación y Acción Social (NOMADESC) y el dirigente sindical Luis Antonio Hernández Monroy.

El caso de la Operación Dragón se puede ver como un antecedente de las actuales interceptaciones ilegales del DAS, comenta Molano. La persecución por parte del Estado, los seguimientos ilegales y la infiltración de esquemas de seguridad hace pensar que la vida de los defensores de derechos humanos se ha puesto en manos de sus victimarios

Según Molano, PBI le ha «permitido hacer diligencias con testigos, en comandos de la policía, del ejército; pero más que entrar con seguridad me ha permitido salir vivo». Sin embargo para él, PBI no es solamente una presencia física, sino también un reconocimiento de la situación de los derechos humanos que legitima el trabajo de los defensores fuera del país mediante su testimonio de la realidad que vive Colombia. ●

¹«Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento Presos y señalados en Colombia», Human Rights First, febrero de 2009, páginas 25 y 31

² Ibid., página 31

³ Ibid.

PBI y el riesgo **continúan** a mi lado

Durante sus investigaciones sobre el homicidio del humorista Jaime Garzón, la periodista Claudia Julieta Duque recibe amenazas y son interceptados sus teléfonos.

Claudia Julieta Duque O., periodista y corresponsal en Colombia de Radio Nizkor



Foto: Henrik Halvardsson, LWF/DWS Colombia

Claudia Julieta Duque

PBI llegó a mi vida por primera vez en febrero de 2004, cuando la Policía realizó una inspección «técnica» para verificar si mis teléfonos se encontraban interceptados ilegalmente. Se trataba

Ese trabajo, iniciado en el año 2001 tras convencer a Alfredo Garzón, hermano de Jaime, de que otorgase un poder a Alirio Uribe, de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR),

«EL AÑO 2004 FUE QUIZÁS EL PEOR DE MI VIDA: HUBO DÍAS EN LOS QUE LLEGUÉ A RECIBIR HASTA SETENTA LLAMADAS DE HOSTIGAMIENTO».

de una acción solicitada al Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior, del que formo parte desde diciembre de 2003, tras denunciar ante el entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera¹, amenazas y hostigamientos. El marco de fondo de estas acciones era la investigación que yo adelantaba sobre el homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido en agosto de 1999.

para que lo representara como parte civil en el proceso penal que tenía a dos personas en prisión acusadas de ser los autores materiales del asesinato, me había ocasionado hasta ese momento un secuestro, varios hostigamientos, amenazas y seguimientos constantes, así como un exilio. Durante los años anteriores, Alirio y yo habíamos revelado la existencia de un detallado montaje que desvió la investigación del caso Garzón, cuyos principales arquitectos eran funcionarios del DAS de Antioquia y Bogotá.

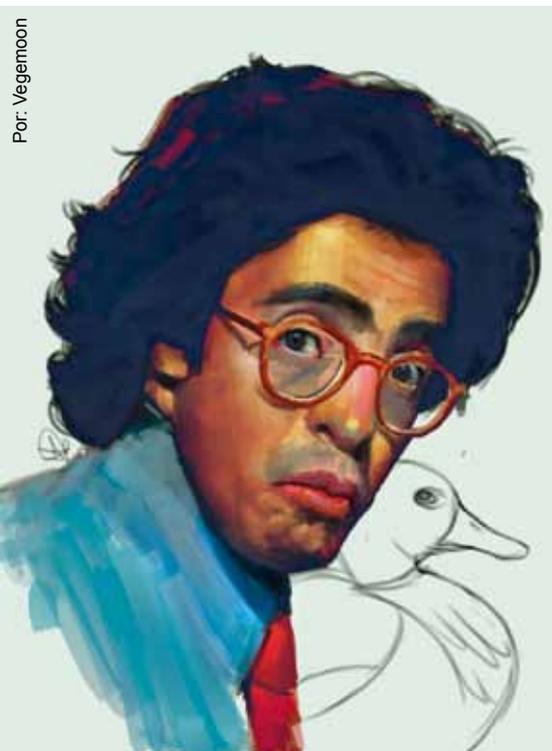
PBI estuvo en mi casa esa tarde, junto a Soraya Gutiérrez, también de CCAJAR, la ONG a la que estuve vinculada desde agosto de 2003. Presenciamos una burla más a mi situación de riesgo: tras examinar mis conexiones telefónicas con un voltímetro, un capitán de la Policía concluyó que mi línea estaba «limpia». Dos minutos más tarde, cuando la Policía apenas había salido del edificio, recibí una llamada en la que un hombre de voz chillona me gritaba «me la robé, me la robé», en alusión a mi hija, quien durante todo este tiempo ha sido el denominador común de los actos de amedrentamiento en mi contra. No en vano, los archivos del Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G-3)² la señalan como mi «mayor debilidad», mi «punto débil».

Ni era cierto que mi teléfono estuviera «limpio», ni el voltímetro era el instrumento adecuado para realizar esta comprobación. Entre el material del G-3 que la Fiscalía halló figuran, además de innumerables correos electrónicos, varias conversaciones telefónicas mías previas a febrero de 2004. Una de ellas se refiere a la visita de la Premio Nobel de la Paz 2003, Shirin Ebadi. Es una conversación con un colega y amigo de la Revista Semana, cuya privacidad, a raíz de este caso, terminó también violentada. Hoy día, él se ríe del tema diciendo: «tú no me convienes». Para mí es difícil reír.

El año 2004 fue quizás el peor de mi vida: hubo días en los que llegué a recibir hasta setenta llamadas de hostigamiento: en algunas me dejaban escuchar música de funeral, gritos angustiantes que hablaban de torturas y sufrimientos, insultos en los que me calificaban de «gonorrea», «maldita», «estúpida», «sapa hijueputa», entre otros. Al mismo tiempo, a mi casa llegaron un arreglo floral con las flores enterradas y los tallos por fuera y un gigantesco queso putrefacto lleno de gusanos. Esto sin contar los taxis y vehículos que aparcaban alrededor de mi casa constantemente, y los seguimientos a pie, en moto o en taxi que también se sucedían. Todos estos hechos provocaron que muchos de mis amigos y colegas me tildaran de paranoica, y que algunos de ellos se alejaran de mí. ►►

«PBI LLEGÓ A CASA EN LAS MADRUGADAS DE INSOMNIO Y LLAMADAS AMENAZANTES, Y SE QUEDÓ CUANDO TUVIMOS QUE TRASLADARNOS DE URGENCIA».

Por: Vegemoon



Caricatura del humorista Jaime Garzón

Pero PBI estuvo siempre ahí para salvarnos la vida a mi hija y a mí. Sus miembros se convirtieron en mis ángeles de la guarda, en mis amigos, en una compañía más que necesaria. Si en aquella época pude sonreír fue gracias a ellos y ellas, a esos ciudadanos extranjeros tan preocupados por nuestra situación, que trabajaban con dedicación y profundo respeto, con total conciencia de que sin su presencia las amenazas podrían pasar de las palabras a los hechos.

PBI estuvo conmigo el día en que fui a declarar al DAS en una «investigación» que adelantaba Carlos Alberto Arzayúz, hoy preso por la persecución sistemática que esa entidad llevó a cabo contra, entre otros, el colectivo CCAJAR, periodistas, políticos de la oposición y magistrados de la Corte Suprema.

PBI llegó a casa en las madrugadas de insomnio y llamadas amenazantes, y se quedó cuando tuvimos que trasladarnos de urgencia porque una noche de noviembre un hombre llamó por teléfono para

notificarme que mi hija «sería violada, mutilada y torturada mediante métodos inimaginables porque yo me había metido con quien no era». PBI estuvo allí para quedarse 24 horas cada día hasta que fuimos forzadas a un segundo exilio. PBI nos acompañó en el triste camino hacia Migración y llegó con nosotras hasta la puerta del avión.

Una de sus miembros tuvo que empujarme, literalmente, para que entrara en el avión, en medio de un llanto incontenible.

Hoy, PBI – y el riesgo – continúan a mi lado. Los y las brigadistas son mis amigos. No obstante, tanto ellos como yo deseáramos que su presencia fuera innecesaria. Pero no lo es, y mi agradecimiento es infinito. ●

1 Jorge Noguera esta siendo investigado por parapolítica. «Acusación de la Fiscalía contra Jorge Noguera por tres homicidios mantuvo la Corte Suprema», El Tiempo, 8 de septiembre de 2009

2 «CIDH expresa preocupación ante operaciones de inteligencia sobre actividades de la Comisión Interamericana en Colombia», CIDH, Comunicado de prensa No. 59/09, 13 de agosto de 2009

Una misión de verificación a Arauca

Uno de los primeros casos demostrados de la práctica conocida como «falsos positivos» ocurrió en el departamento de Arauca.

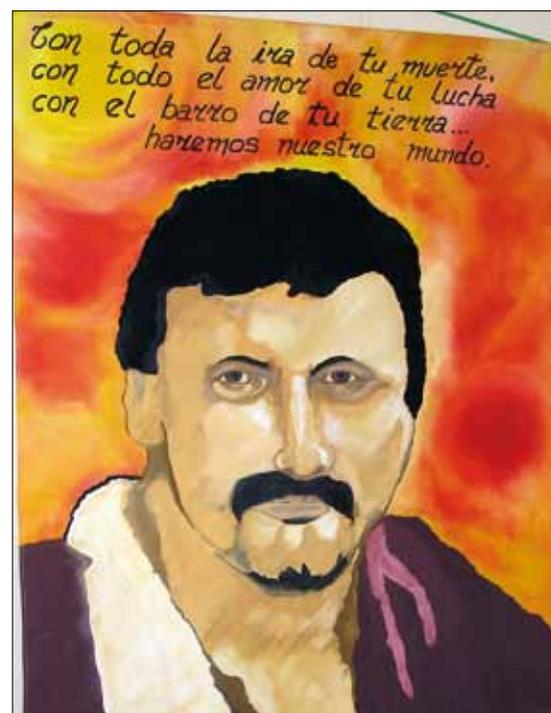
Por: un voluntario de los EEUU (2004)

En 2004 acompañábamos un proceso de formación en derechos humanos en Saravena, Arauca. Teníamos previsto otro viaje a la zona para principios de agosto, pero debido a un posible paro armado debatíamos si podríamos realizar el acompañamiento o no.

La situación se complicó aún más el 5 de agosto cuando varias organizaciones nos informaron de la conformación de una misión de verificación tras el asesinato de tres líderes sociales y sindicales en la vereda de Caño Seco, cerca de Saravena. Nos contaron que durante la madrugada una patrulla del Grupo Mecanizado No. 18 Revéz Pizarro del Ejército llegó a Caño Seco y ejecutó a Leonel Goyeneche, tesorero seccional de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), a Alirio

Martínez, ex presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos (ADUC) y a Jorge Prieto, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC)¹. En ese momento, dos de las tres víctimas contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, según la versión del Ejército Nacional, hubo un combate y «dieron de baja» a tres insurgentes. Asimismo, el Vicepresidente Santos señaló en diferentes medios de comunicación los supuestos vínculos de los recién asesinados con grupos guerrilleros².

Debido a la importancia de la misión de verificación para esclarecer los hechos, llegamos a Arauca a los



Homenaje a Alirio Martínez, asesinado el 5 de agosto 2004

► pocos días con el fin de acompañar a las organizaciones, entre ellas el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Asociación Minga, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Hoy solamente me queda una memoria borrosa del viaje, pero nunca se me olvidará el ambiente pesado y la muerte presente en la humedad del aire. Cuando llegamos a la vereda, nos encontramos con una comunidad aislada y atemorizada por posibles futuras represalias del Ejército. A pesar de las dificultades, la misión logró entrevistarse con diferentes testigos y recaudar pruebas significantes, como por ejemplo la falta de indicios de combate en el lugar de los hechos³.

Este caso, que representa uno de los primeros casos probados de la práctica conocida como «falsos positivos», sólo alcanza una verdad a medias. Aunque se ha podido comprobar que las tres víctimas fueron ejecutadas fuera de combate y en total estado de indefensión—el subteniente, los tres soldados y el guía que participaron en el operativo fueron condenados a 40 años de prisión— la lucha contra la impunidad sigue, pues todavía no se han determinado los máximos responsables del operativo, a pesar de que en esta misma condena se ordenó investigar a tres ex miembros del Ejército Nacional por su posible participación como ordenantes de los crímenes cometidos, ya que fueron los que presuntamente planificaron la operación militar para asesinarlos⁴. De igual manera, el Vicepresidente de la República aún no se ha retractado de los señalamientos realizados contra estos sindicalistas en el momento en el que tuvo lugar su ejecución extrajudicial⁵. ●

Foto: Jorge Mata/Surimages-IPA



«Existe un aumento de 160 mil a 254 mil soldados en el 2008 y en el 2009 respectivamente, hecho que pone a Colombia como la primer potencia en América Latina en materia de fuerzas militares, porque entonces estaríamos hablando de que tenemos un Ejército mayor que Brasil, país que cuenta con un pie de fuerza no mayor a los 270 mil efectivos»⁷.

«LA EXPRESIÓN “FALSOS POSITIVOS” BRINDA UNA SUERTE DE AURA TÉCNICA PARA DESCRIBIR UNA PRÁCTICA QUE SE CARACTERIZARÍA MEJOR COMO EL ASESINATO A SANGRE FRÍA Y PREMEDITADO DE CIVILES INOCENTES, CON FINES BENEFICIOSOS»⁶.

Los «falsos positivos» son una práctica en la cual miembros de la Fuerza Pública matan a civiles, generalmente personas campesinas o desempleados, y los presentan como miembros de la guerrilla muertos en combate.

Según el derecho internacional humanitario una ejecución extrajudicial es un caso de violación a los derechos humanos, que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen.

Graffiti: Los falsos positivos



1 Informe de la Comisión de Verificación de la ejecución de los líderes araucanos Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto, 9 de septiembre de 2004

2 «¿Sindicalistas o guerrilleros?», Revista Semana, 8 de agosto 2004

3 Informe de la Comisión de Verificación de la ejecución de los líderes araucanos Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto, 9 de septiembre de 2004

4 Sentencia No. 810013107001-200500060-01. Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Descongestión (OIT), Bogotá: 23 de agosto de 2007

El 26 de junio de 2009 el Despacho 20 de la Unidad de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación les dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación por los mismos hechos. (Radicado 2009-OIT).

5 Entrevista realizada el 16 de julio de 2009 con Alirio Uribe Muñoz, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que representa la parte civil en el proceso penal.

6 Declaración del Profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias – Misión a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009

7 «Colombia parece transitar hacia una estructura militar», Corporación Nuevo Iris, 8 de mayo de 2009

Ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Los abogados de la Corporación Jurídica Libertad llevan años en la recopilación de casos de ejecuciones extrajudiciales.

Por: Louise Winstanley, voluntaria de Gran Bretaña (2004-6)

Jamás olvidaré la ropa de los niños tirada por el patio de una pequeña granja muy pobre, en la cual vivían 14 miembros de una familia. No todos estaban en casa esa fatídica noche, cuando se afirma que el ejército entró y disparó a todos, excepto a la madre, su bebé y un hijo de dos años. Acribillaron al padre, a los hermanos y hermanas, a la joven esposa que estaba embarazada: ocho personas en total. Había sangre en las paredes, el piso y la cama; cuando le preguntamos al abogado, nos dijo que parecía que habían sido asesinados en sus camas.

Este fue un acompañamiento perturbador que se solicitó a PBI sin mucha antelación. Uno de los abogados que trabajaba con la Corporación Jurídica Libertad, un grupo de abogados de Medellín a los que PBI acompaña desde hace años, había recibido una llamada telefónica y una visita de la madre solicitándole aceptar el caso del asesinato de su familia atribuido al ejército. Había tenido que ir a observar la escena del crimen y recoger pruebas y nos tocó caminar seis horas por las montañas de Antioquia para acompañarlo en esta tarea.

Este abogado había estado trabajando durante varios años en la recopilación de casos de ejecuciones extrajudiciales, muchos de las cuales fueron lo que en Colombia se denominan



La voluntaria británica Louise Winstanley en el Oriente Antioqueño

«FUE UN ACOMPAÑAMIENTO PERTURBADOR QUE SE SOLICITÓ A PBI SIN MUCHA ANTELACIÓN».

«falsos positivos»: casos de civiles inocentes asesinados por el Ejército que posteriormente son vestidos con uniformes de la guerrilla, y se les coloca armas a su lado para pasarlos como guerrillero dados de baja en combate. Éstos se agregarían a las cifras de guerrilleros abatidos por una unidad del Ejército particular y por los cuales su batallón recibiría recompensas. La cuestionada práctica de recompensar está reglamentada en la directiva ministerial 029 de 2005¹.

El acompañamiento de PBI en esta situación era esencial puesto que la

misma unidad contra la cual el abogado estaba recopilando casos de ejecuciones extrajudiciales, era la unidad que controlaba el área donde nos estábamos desplazando. Con los peligros que los defensores enfrentan cada día de sus vidas asumiendo la defensa de los derechos humanos, habría sido arriesgado para él aventurarse solo en esta remota región de Antioquia, donde ni existen vías de comunicación. ●

¹ «Directiva Ministerial 029 de 2005», El Espectador, 1 de noviembre 2008

² Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU): Observando, boletín no. 6, 16-31 de octubre de 2008

Cada día, una persona muere víctima de una ejecución extrajudicial en Colombia

Según la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos², el periodo entre enero de 2007 y junio de 2008 fue el más grave en cuanto a denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales: 535 personas fueron asesinadas por la Fuerza Pública en Colombia. Es decir, un promedio de una por día. Muchas de las víctimas eran campesinos o jóvenes de barrios marginales que respondían a falsas ofertas de trabajo en otras zonas del país y que eran ejecutadas posteriormente por miembros del Ejército haciéndolas pasar por guerrilleros.

Una llamada urgente a medianoche

Voluntarios de PBI acompañan a la Comisión de Búsqueda que se creó cuando se supo de la masacre

Por: Erika Zarate, voluntaria de Canadá (2004-5)

A medianoche del 22 de febrero de 2005, Jesús, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, nos llamó urgentemente a la casa de PBI en Turbo. Nos contó que ocho miembros de la comunidad habían desaparecido, incluyendo el líder Luís Eduardo Guerra, y que la comunidad temía por su seguridad. Jesús nos pidió un acompañamiento internacional para una comisión con el fin de buscar a las personas desaparecidas.

Robert, un voluntario español de PBI, otros tres internacionales, Elkin (un abogado colombiano especializado en derechos humanos de la Corporación Jurídica Libertad) y yo fuimos a la Comunidad de Paz para acompañar a cien mujeres y hombres en la búsqueda de sus amigos y familiares. La comunidad se organizó para ir en grupos grandes, como medida de protección, y en un acto de solidaridad.

La comisión salió a las cuatro de la mañana del día 24 de febrero, camino a la casa de Alfonso Bolívar, uno de los miembros más activos de la Comunidad de Paz. El sendero era abrupto y estaba embarrado. Después de siete horas de caminata finalmente llegamos a la finca. Tropas del ejército y de la policía nos rodearon y Robert les explicó que éramos trabajadores internacionales acompañando a una comisión civil y que nuestro equipo había informado personalmente al Vicepresidente de Colombia, al general de la Brigada XVII y a varias embajadas y cuerpos de la ONU de nuestra presencia allí. El oficial militar que estaba al mando comunicó a sus tropas la orden de bajar las armas y dejar pasar a la comisión. ▶▶



Por: Jorge Mata/Surimages-IPA

Miembros de la Comunidad de Paz San José de Apartadó

«NOS IMPACTÓ DOLOROSAMENTE VER A LOS SOLDADOS TOMÁNDOSE FOTOS FRENTE A LAS BOLSAS QUE CONTENÍAN LOS CUERPOS, HACIENDO SEÑALES DE VICTORIA».

Reclamando justicia integral

El caso de la masacre del 21 de febrero del 2005 tuvo mucha repercusión en la comunidad internacional por la crueldad de los hechos, que incluyeron a víctimas menores de edad. En un primer momento el Gobierno expresó que los responsables de la masacre eran las FARC¹. Sin embargo, desde 2007 varios militares de la Brigada XVII están siendo investigados² y este año empezó el juicio a diez de ellos, bajo cargos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir³. Asimismo, en 2008 un capitán se acogió a sentencia anticipada reconociendo su responsabilidad en los hechos⁴. Esos militares habrían actuado en conjunto con paramilitares⁵. Es destacable el contexto amplio de agresiones que ha sufrido la Comunidad desde su creación en 1997: más de 165 casos de asesinatos y desapariciones forzadas y casi 600 casos de violaciones de derechos humanos reportados⁶.

A su vez, otros tres coordinadores han sido asesinados desde los hechos de la masacre⁷. La mayoría de estos crímenes siguen en la impunidad. La Comunidad de Paz es beneficiaria de medidas provisionales recomendadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que instan al Estado colombiano a disponer «de forma inmediata las [medidas] que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó»⁸.

- 1 «La comunidad tenía razón», El Tiempo, 24 de julio 2007; «Audiencia de juzgamiento a militares será en diciembre, niegan nulidad de juicio por masacre en Comunidad de Paz», El Tiempo, 26 de agosto 2009
 - 2 «Verdades de la masacre de San José de Apartadó», El Espectador, 2 de agosto 2008; «Por homicidio en persona protegida y terrorismo, a indagatoria 56 Militares», El Tiempo, 22 de febrero 2007
 - 3 «Audiencia de juzgamiento a militares será en diciembre, niegan nulidad de juicio por masacre en Comunidad de Paz», El Tiempo, 26 de agosto 2009
 - 4 «Capitán (r) del Ejército aceptó su responsabilidad por masacre de San José de Apartadó», El Tiempo, 1 de agosto 2008
 - 5 «Verdades de la masacre de San José de Apartadó», El Espectador, 2 de agosto 2008; «Audiencia de juzgamiento a militares será en diciembre, niegan nulidad de juicio por masacre en Comunidad de Paz», El Tiempo, miércoles 26 de agosto 2009
 - 6 «La Historia vivida», Comunidad de Paz De San José de Apartadó, 21 de diciembre 2006
 - 7 «Paramilitares asesinan a Dairo», Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 15 de julio 2008;
 - 8 «Cronología de agresiones contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y población de la zona, con posterioridad al 7 de agosto de 2002 », Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 31 de enero 2008
- 8 «Medidas provisionales respecto a Colombia, asunto de la comunidad de paz de San José de Apartadó», Resolución de la Corte Interamericana de derechos humanos, 6 de febrero 2008

▶▶ Cuando llegamos contemplamos una escena horrorosa: un humilde hogar familiar con restos de sangre salpicada por toda la entrada de la casa, cartuchos de bala vacíos en suelo, y la mano descuartizada de una niña pequeña, sobresaliendo de un montón de cáscaras podridas de frutos de cacao. Un dolor silencioso nos superó.

Llamé al equipo de PBI en Turbo y les dí la ubicación exacta de la finca para que el equipo forense de la Defensoría del Pueblo nos pudiera encontrar fácilmente. Su helicóptero aterrizó pocas horas después y las autoridades y científicos se pusieron a trabajar inmediatamente. El proceso forense fue observado por el abogado colombiano, varios líderes de la comunidad y tres acompañantes internacionales.

Los investigadores encontraron tres adultos y dos niños pequeños en la fosa común. Las personas adultas mostraban marcas de tortura realizadas con machete. Las cinco habían sido decapitadas. Las víctimas de la masacre eran: Alfonso Bolívar; su pareja,

Sandra Muñoz; sus hijos, Natalia (6 años) y Santiago (2) y un trabajador campesino, Alejandro Pérez.

Cuando llegó el helicóptero para recoger al equipo forense y las bolsas plásticas que guardaban los restos humanos, la comisión se preparó para continuar la búsqueda, camino a la casa de Luís Eduardo Guerra y su familia. A punto de salir, nos impactó dolorosamente ver a los soldados tomándose fotos frente a las bolsas que contenían los cuerpos, haciendo señales de victoria con sus dedos.

Después de unas cinco horas más de caminar, sin ningún indicio de las personas desaparecidas, acampamos en una finca abandonada hasta el amanecer siguiente. Estuve a la cabeza de la comisión ese día, y después de seguir el río durante mucho tiempo, tropecé con el cráneo de Deiner, un niño de 10 años con quien había compartido dulces y ratos libres durante las semanas anteriores, juguetón pero tímido. Todos continuamos entumecidos río arriba hasta encontrar los tres cuerpos de Luis Eduardo Guerra, su pareja

Beyanira Guzmán y los restos de su hijo Deiner.

Mientras esperábamos al equipo forense, hicimos turnos espantando los cuervos y los chanchos que intentaban comerse los cadáveres. Esperamos hasta el atardecer, pero cuando vimos que no iba a llegar ningún miembro de la Defensoría, una parte de la comisión, acompañada por nosotros, volvió a San José de Apartadó, dejando atrás, como guardia de las últimas víctimas de la masacre, a un grupo de 25 miembros de la comunidad y al abogado de derechos humanos.

La vuelta a Turbo fue mareante. PBI había movilizado una acción urgente y miembros de todos los equipos estaban ocupados enviando correos, llamando por teléfono y reuniéndose con cualquier actor que tuviera un rol o responsabilidad en la resolución de la masacre. PBI me envió a Bogotá para reunirme con docenas de representantes de la ONU y de distintas embajadas, y con autoridades civiles colombianas de alto nivel, para promover la protección de los miembros de la comunidad de paz y exigir una investigación transparente sobre la masacre.

Cinco años después seguimos acompañando a los líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, una comunidad pionera y ejemplar, que siguen defendiendo sus principios de no violencia, justicia, solidaridad, libertad, diálogo y respeto. ●



En homenaje a las víctimas de la Comunidad de Paz las piedras llevan sus nombres.

En medio de la palma **resiste Don Petro**

Entre amenazas y atentados contra sus vidas, campesinos de la cuenca del río Curbaradó (departamento del Chocó) luchan por la recuperación de sus tierras.

Por: Mariana Nissen, voluntaria de Brasil (2005-2009)



Don Enrique Petro

Era enero de 2006 cuando PBI recibió una petición para acompañar a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) a la casa y posteriormente a la finca del campesino Enrique Petro, ubicada en medio de una plantación de palma africana en Curbaradó. Ésta era la segunda vez que CIJP solicitaba el acompañamiento de PBI en menos de un mes para visitar esta región, afectada por problemas de disputa de tierras y cuya localización remota suponía casi un día de viaje atravesando plantaciones de palma africana.

En octubre del 2005, Petro y un miembro de CIJP habían sido testigos de la desaparición forzada de Orlando Valencia, líder de esta región y vocero de los daños ambientales causados por el cultivo de la palma en esta zona. El cuerpo de Valencia apareció días después sin vida, en un río. El siniestro suceso parecía pretender, sembrando el miedo,

debilitar el proceso organizativo de los campesinos de Curbaradó, cuyas tierras habían sido despojadas a partir de 1996 por acciones militares con presunta participación paramilitar. El resultado de estos operativos fue el desplazamiento masivo de campesinos y la destrucción de sus propiedades y del bosque nativo, y dio vía libre al cultivo masivo de palma africana en estas tierras, propiedad de las comunidades afrocolombianas por derecho constitucional.

Pese a las dificultades, Petro estaba decidido a recuperar su tierra y a posibilitar a otros campesinos la construcción de una zona humanitaria en su antigua finca, que les permitiría organizarse para retornar a sus tierras. El viaje de acompañamiento a los miembros de CIJP, y paralelamente a Petro, brindaba protección a esta visita, que tenía como objetivo establecer un plan de acción para iniciar este proceso de retorno.

No era un viaje de acompañamiento sencillo. Una caminata de cuatro horas bajo un sol abrasador, sin ninguna posibilidad de cobijarse a la sombra, en medio de la plantación de palma y soportando las miradas de los trabajadores y vigilantes de los cultivos. Era la primera vez que PBI hacía este trayecto a pie, visibilizando el acompañamiento internacional y poniendo a prueba su poder de disuasión frente a cualquier intento de violencia contra los miembros de CIJP y Petro. Además del desafío político, nos enfrentábamos al reto físico y mental de cargar toda la comida, colchonetas, agua para los días que pasaríamos alojados en el corazón de la plantación de palma, despertándonos cuando algún perro comenzase a ladrar o escuchando supuestos pasos. ¿Sería alguien intentando acercarse a la casa?

El acompañamiento, como la mayoría en los que PBI participa, terminó sin ningún incidente y representó uno de los primeros pasos para el retorno seguro de los campesinos a sus tierras. Desde la fecha, numerosas zonas humanitarias y zonas de biodiversidad han sido establecidas en Curbaradó gracias a esta iniciativa de las personas desplazadas. Sin embargo, pese al acompañamiento constante de PBI, iniciado en enero de 2006, la tensión en la zona del Curbaradó no ha disminuido, se han producido continuamente nuevos atentados, raptos y amenazas, culminando con el asesinato de Ualberto Hoyos, uno de los líderes del proceso de retorno de la comunidad de Caño Manso. En este contexto, falta todavía un largo proceso para que los campesinos puedan recuperar condiciones de vida dignas y vivir en paz en sus tierras. ●



Jóvenes de la cuenca del río Curbaradó

Iniciativas de auto-protección de los pueblos

Numerosas comunidades en el país han ido buscando formas para protegerse del conflicto armado que asedia Colombia. Varias comunidades indígenas tienen lo que llaman las 'asambleas permanentes', lugares identificados claramente como zonas de refugio de la población civil. Igualmente, las comunidades del Bajo Naya han creado lo que llaman 'lugares de refugio'.

PBI acompaña a varias comunidades en la zona del Urabá que utilizan el concepto de Zonas Humanitarias, áreas claramente delimitadas y visibilizadas con mallas y pancartas. En estas zonas el ingreso de cualquier actor armado – sea legal o ilegal – está prohibido. Estos espacios buscan adaptar a la realidad local el concepto de zonas protegidas incluido en el Derecho

Internacional Humanitario, y con ello el cumplimiento del principio de distinción entre actores armados y población civil – principio fundamental para permitir la protección de la población civil en medio de un conflicto armado tanto internacional como interno.

Por otra parte, las comunidades han buscado proteger el medio ambiente, ya que su cuidado es imprescindible para poder seguir viviendo en sus territorios. Por eso han creado zonas especiales de protección de los recursos naturales, la fauna y flora, frente a la expansión de la frontera agrícola y la usurpación de tierras, como son las Zonas de Biodiversidad en la región del Urabá. En el Magdalena Medio – después de un largo proceso iniciado en el 1998 – fue aceptada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) la creación de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Cimitarra. El año siguiente el Gobierno colombiano decidió suspender esa zona «por razones de interés general». Hoy en día la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra sigue insistiendo en que se levante esta suspensión.



Caminando en apoyo al proyecto PBI

Después de su voluntariado en PBI, el músico Flakito recorre los 750 kilómetros del Camino de Santiago (España) para recaudar fondos y visibilizar la situación de derechos humanos en Colombia.

Por: Flakito¹, voluntario de Gran Bretaña (2002-2004)

Caminar es el modo de transporte más básico, no es muy rápido pero se ha convertido en mi modo preferido. En mi primer año de voluntario con PBI estuve en Barrancabermeja, caminando al lado de personas valientes, como lo son los miembros de la Organización Femenina Popular (OFP) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS). Acompañándoles en su trabajo y en sus viajes por la zona del Magdalena Medio, varias veces caminé al lado de marchas de las organizaciones sociales de Barrancabermeja. En mi segundo año estuve en Urabá, en zonas más remotas, acompañando a comunidades que apuestan por la no-violencia y que no quieren estar involucradas en la guerra. En Cacarica, durante la temporada seca, cuando no había suficiente agua en el río para las piraguas, teníamos que caminar

horas hasta llegar a los asentamientos aislados. En San José de Apartadó, donde termina la carretera (apta para vehículos todo-terreno), para subir a las veredas uno tenía que caminar o montar en mula o caballo. Recuerdo atravesar a pie un sinfín de lodo en las montañas cuando subíamos a Arenas Altas para la «Universidad Campesina», un encuentro de comunidades campesinas resistiendo en la guerra. Venían gente de diferentes regiones del país para compartir conocimientos y experiencias. Antes de ir a Colombia con PBI, me ganaba la vida con la música, tocaba con una banda o en solitario, usando el acordeón para acompañarme en las canciones. Viajaba mucho en mi camioneta por el Reino Unido y Europa. Ahora sigo con la música, pero no tengo vehículo. Al volver de Colombia me propuse como proyecto caminar parte de España,



Flakito en su segundo año en PBI tocando en una comunidad en Urabá

recorriendo el Camino de Santiago, una ruta que han seguido peregrinos desde hace más de mil años y que tiene toda una infraestructura de albergues para los caminantes procedentes de todo el mundo. Anteriormente, había grabado un CD titulado «En Camino» con varios amigos músicos para venderlo a lo largo del Camino y donar todas las ganancias a PBI Colombia.



Niños de la región del Magdalena Medio donde acompañó Flakito

Amnistía Internacional (AI) en España me apoyó con los gastos de los albergues, me proporcionó una lona blanca con el logotipo y Web de Amnistía para cubrir el carrito y me suministró folletos sobre su campaña por los derechos humanos en Colombia para distribuir entre los caminantes que encontraba a lo largo de mis tres meses en el Camino, de abril a junio del 2006. Los grupos locales de AI en Pamplona, Logroño, Burgos, Palencia, León, Ponferrada, y Santiago de Compostela me organizaron conciertos, charlas en salas municipales, colegios y universidades, entrevistas con alcaldes y consejeros, y también con la prensa, radio y televisión; todo para visibilizar la solidaridad internacional y lo que se puede hacer con AI y PBI. A veces, en otros pueblos, cuando de manera improvisada un hostelero de un albergue me invitaba a dar una charla para sus «peregrinos», me vi haciendo algo así como una especie de acrobacia mental intentando hablar en español, inglés y francés, mostrando un DVD sobre San José de Apartadó y, por supuesto, amenizando la sesión con unas canciones en directo.

Fueron tres meses que disfruté mucho, aunque duros debido a la distancia (750km desde la frontera con Francia) y al peso de la mochila. Llevaba mi acordeón, flauta, percusión, amplificadora y micrófonos pequeños, folletos de AI, CDs para vender a beneficio de PBI; todo

en un carrito «todoterreno» a dos ruedas. Varias veces estuve acompañado y fui ayudado por integrantes del grupo local de Amnistía a la entrada o salida de su ciudad. Junto con ellos, hubo otro acompañamiento muy simbólico, el de Pablo Arenales, un defensor colombiano de derechos humanos residente en España y acogido al programa de asilo de Amnistía Internacional, al que además había acompañado muchas veces durante mi primer año en PBI Colombia.

El Camino de Santiago tiene la fama de ser una vía sagrada, según las creencias. Para mí, la experiencia no depende de creencias, sino del hecho de caminar, estar inmerso en la naturaleza y en el mundo humano, ver revelarse los paisajes mientras se acercan y luego se dejan atrás. Montañas, bosques, valles, ríos, monumentos, iglesias, ciudades. Es muy diferente de lo que se siente desde un tren o un vehículo. Y

«RECUERDO ATRAVESAR A PIE UN SINFÍN DE LODO EN LAS MONTAÑAS CUANDO SUBÍAMOS A ARENAS ALTAS A LA “UNIVERSIDAD CAMPESINA”».

A lo largo del Camino, recorriendo varias ciudades, íbamos coordinando todo un sistema de presentación y entrevistas a los medios: primero yo respondía a preguntas sobre el Camino, hablaba del voluntariado con PBI en Colombia y del CD, luego Pablo profundizaba sobre la situación de los defensores y los derechos humanos en Colombia, y finalmente una persona representante de Amnistía decía lo que se puede hacer para apoyar su campaña.

la posibilidad de hablar tranquilamente y profundamente con otros caminantes, ya sea sobre los derechos humanos, los logros de la civilización y lo que hemos perdido con la prisa y la presión, o simplemente compartir experiencias de vida. La confianza que se crea así entre personas que no se conocen es algo sagrado. ●

1 Nombre artístico del autor de este artículo.

Un viaje al fin del mundo

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo apoya a comunidades afectadas por la extracción de carbón en el departamento de La Guajira.

Por: Anita Linares, voluntaria de Suiza (2004-6)

En abril de 2006, PBI hizo un acompañamiento al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y la ONG Suiza «Grupo de trabajo Suiza-Colombia» (ASK!) a La Guajira, visitando comunidades alrededor de la mina El Cerrejón, la mina a cielo abierto de carbón más grande de Colombia. El objetivo de este viaje era encontrarse con víctimas del desalojo del pueblo Tabaco, recoger datos en las comunidades sobre los impactos de la extracción de carbón (contaminación, salud, educación, empleo, infraestructura), ofrecer posible asesoría jurídica para las negociaciones entre la empresa que explota la mina y las comunidades en cuanto a su desplazamiento e incluirlos en el proceso de reparación con Tabaco.

Muchos encuentros, momentos e impresiones de este viaje se quedaron grabados en mi memoria, entre éstos los más destacados son los siguientes:

Me entristeció la situación desoladora de las veredas alrededor de la mina, golpeadas por intereses económicos de empresas multinacionales.

Las comunidades viven en condiciones precarias, la tierra está contaminada y es poco fértil, los vegetales no crecen, la contaminación genera graves problemas de salud, el movimiento en el área está limitado debido al cierre de carreteras, las regalías no están invertidas en la infraestructura de los pueblos más cercanos a la mina, la población local tiene poca posibilidad de recibir empleo en la mina y varias comunidades están en riesgo de ser desplazadas.

El encuentro con las víctimas del desalojo del pueblo Tabaco me hizo entender aún mejor que significa ser desplazado. No sólo empeora su situación económica y los vuelve dependientes de la ayuda de familiares, también sufren las consecuencias de la ruptura del tejido social comunitario. A pesar de sus duras experiencias mantienen el espíritu y la fuerza necesarios para seguir luchando en la reivindicación de sus derechos básicos y por recibir una reparación adecuada. Reparación que no sólo les permitirá reconstruir una vida digna y el tejido

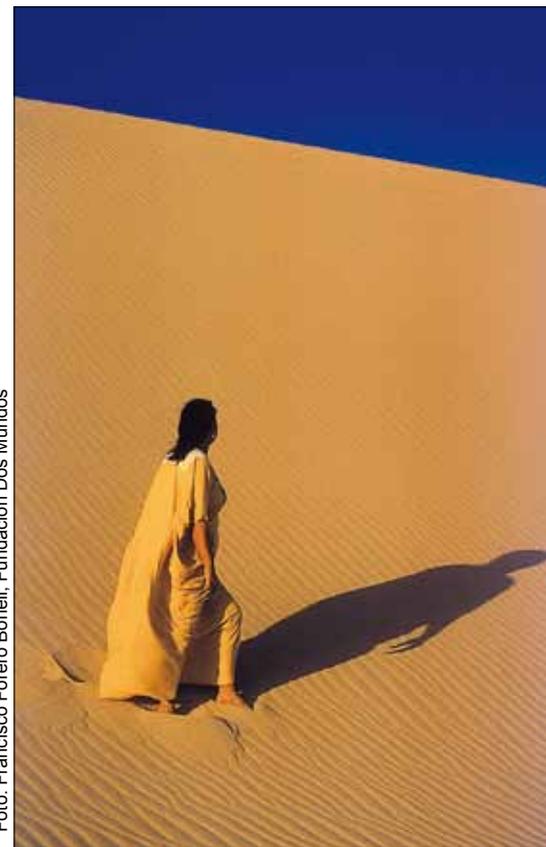


Foto: Francisco Forero Bonell, Fundación Dos Mundos

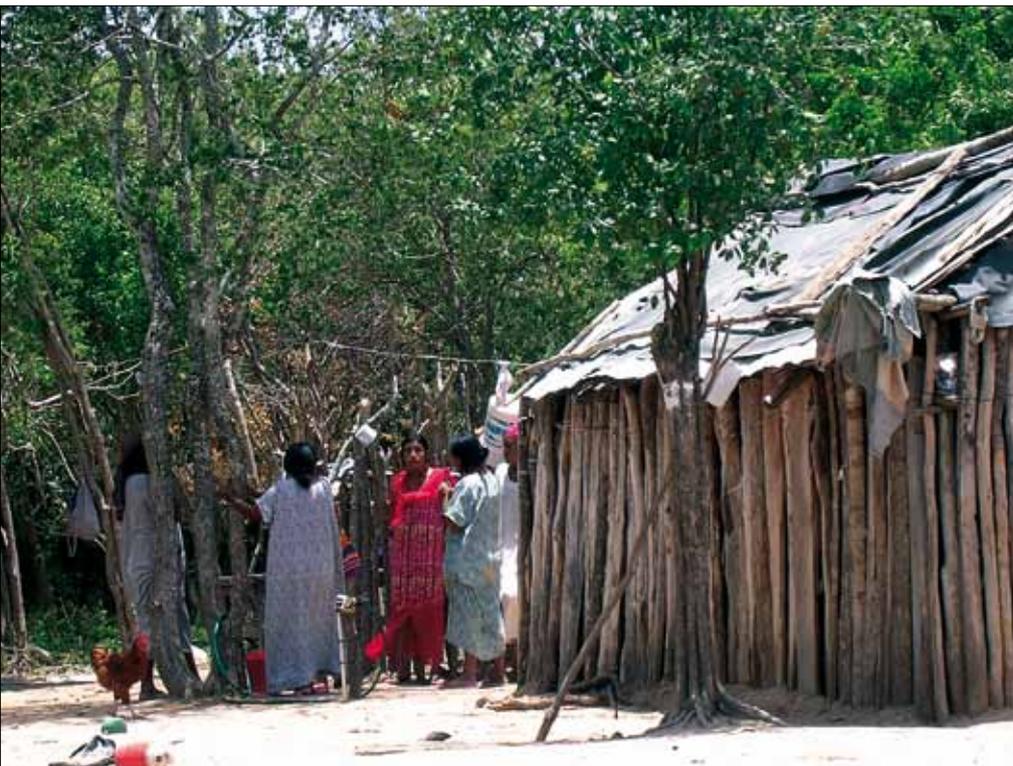
Mujer de la Guajira en el desierto

social de la comunidad, sino también – ojalá – poder negociar mejores condiciones para otras comunidades en riesgo de ser desplazadas.

Me sorprendió el fuerte compromiso de organizaciones como CCAJAR y sus integrantes, quienes siguen apoyando la lucha justa de pueblos desfavorecidos y ofrecen su conocimiento y sus recursos para ofrecer asesoría. A pesar de estar viviendo en condiciones precarias, la gente colombiana no pierde su espíritu positivo y su capacidad de disfrutar la vida.

Debido al mal tiempo y al cierre de la carretera, a las seis de la tarde nos fue imposible regresar a Albania. Nos hospedó una familia en Remedios. Nos brindaron su generosa hospitalidad e incluso organizaron una fiesta «muy a la colombiana». Todos disfrutamos y bailamos hasta muy tarde.

Posteriormente, ya en Suiza, pude encontrarme de nuevo con José Julio (desplazado de Tabaco). Me alegra que la comunidad internacional siga apoyando su lucha por una reparación digna de las víctimas de Tabaco, y de paso obtener mejores condiciones para las veredas en riesgo de desplazamiento. ●



Pueblo guajiro

Casanare: una batalla contra la impunidad

Gustavo Gallardo, abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, ofrece su apoyo a víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Casanare.

Por: Kristina Johansen, voluntaria de Noruega (2006-7)

Los hermanos Luís Guillermo Robayo Mora y Rubén Darío Avendaño Mora, de 25 y 14 años respectivamente, fueron asesinados el 16 de abril de 2007 en Hato Corozal (Casanare), presuntamente por el Gaula¹ del Ejército del Casanare². Los padres, los campesinos Jorge Avendaño y Guillermina Mora, cuentan que habían ido a Paz de Ariporo a comprar ganado y que nunca regresaron. Los muertos fueron presentados por las autoridades como dos guerrilleros dados de baja.

Me acuerdo de la mirada grave que se repetía en los dos hijos pequeños que quedaron vivos cuando estuve en su finca, en junio de 2007, acompañando al abogado Gustavo Gallardo, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSP). Íbamos de camino al pueblo de Sácama cuando pasamos cerca de unos soldados que patrullaban por la carretera.

«Mi familia vive muy traumatizada. Los niños han tenido problemas con los estudios a causa de lo que les pasó a sus hermanos. Ellos no dicen nada, pero se quedan pensando. Y uno analiza que de pronto no sea por los hermanos, sino porque piensan que de pronto les llegue a pasar algo a ellos, o a nosotros», dice Jorge Avendaño.

La experiencia de la familia Avendaño Mora desafortunadamente no es la única: Según un informe de la Fiscalía³, hasta el 20 de diciembre de 2008 el organismo tenía a su cargo 848 procesos de los



Las Uwa son una comunidad indígena del Casanare

denominados casos de «falsos positivos», en los que murieron 1.375 personas. De los 848 procesos, 768 son casos posteriores a 2004. De éstos, la mayoría fueron denunciados en 2007⁴. Durante ese año y hasta ahora, PBI ha estado acompañando a personas que han jugado un papel fundamental en la denuncia y difusión de esta realidad. El trabajo de los defensores consiste en impartir talleres, recibir denuncias y asesorar a víctimas, desde las ciudades hasta las zonas más remotas del país. Implica también confrontar directamente a los presuntos responsables a través del sistema de justicia penal militar – donde por lo general empiezan las investigaciones - y de la justicia ordinaria. Generar debates públicos sobre el tema es otra tarea importante. Al exponerse públicamente, los familiares y sus defensores corren el riesgo de ser estigmatizados, amenazados y hasta asesinados⁵.

Cuando uno de nosotros, como voluntario de PBI, acompaña estos procesos, no sólo se acerca al dolor, al miedo y a la rabia de los familiares, sino también al del resto de personas que les acompañan en su lucha.

Recuerdo la noche que acompañamos a Gustavo Gallardo a un parque en Yopal, donde se reunió con una mujer cuyo esposo había sido asesinado hacía poco.

Mientras yo jugaba con su hija, de unos cinco años, la mujer daba su testimonio y lloraba sobre el hombro del abogado. Gustavo, que sufre en persona los efectos de la persecución y el desplazamiento, nos comentó posteriormente que tenía ganas de llorar con la viuda, pero que aguantó porque consideraba que tenía que darle fuerzas y esperanza. El trabajo persistente de los defensores de los derechos humanos y la valentía de las víctimas está haciendo ver al mundo que la vida de un campesino vale lo mismo que cualquier otra vida. Como dice Jorge Avendaño:

«Lo principal es que esto no quede impune. Una persona no puede quitarle la vida a otra, eso no lo dice ninguna Biblia, ninguna ley». ●

1 Son unidades elite creadas por la Ley 282 de 1996, exclusivamente dedicadas a evitar y actuar en contra del secuestro y la extorsión. Está conformado por personal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares. En este momento el país cuenta con 16 GAULAS del Ejército y dos de la Armada Nacional. (Fuente: <http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=71>)

2 «A juicio ex comandante del Gaula por “falsos positivos”», El Espectador, 19 de agosto de 2009

3 «Nuevas capturas por falsos positivos», El Colombiano, 27 de enero de 2009

4 «Más de mil militares: involucrados en falsos positivos», AFP/Terra Colombia, 28 de enero de 2009

5 «Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento – Presos y señalados en Colombia», Human Rights First, febrero de 2009



Fabián Laverde, miembro de COS-PACC. La organización también apoya víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Casanare.

Visibilizar lo oculto

El 6 de marzo alrededor de 300.000 personas marchan en homenaje a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado.

Por: Rokko Fermo, voluntario de Italia (2009)

Iván Cepeda, hijo del senador Manuel Cepeda, director de la Fundación Cepeda e integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) habla sobre la marcha que tuvo lugar el 6 de marzo de 2008 en favor de los derechos de las víctimas de paramilitarismo. PBI acompaña a la Fundación Cepeda desde abril de 2004, año en el que Iván Cepeda y la co-fundadora Claudia Girón regresaron a Colombia después de cuatro años de exilio en Francia, debido a las amenazas de muerte que habían recibido.

PBI: La marcha del 6 de marzo fue un éxito. ¿Nos puede contar cuántas personas asistieron?

Iván Cepeda: Los cálculos que se hicieron arrojan unas cifras de alrededor de 300.000 personas que se movilizaron en casi 100 ciudades de Colombia y del mundo .

PBI: ¿Cómo lograron la asistencia de tantas personas?

IC: Creo que ha sido gracias a una correcta lectura del momento en el que tuvo lugar la manifestación. En Colombia, los crímenes realizados por agentes estatales han sido históricamente ocultados y silenciados, pero en el momento de la movilización había una coyuntura propicia para comenzar a despertar la solidaridad de la ciudadanía sobre estos actos delictivos: el escándalo de la parapolítica, el comienzo de la documentación de casos de ejecuciones cometidas por miembros de la Fuerza Pública, la implicación del Gobierno de Uribe con crímenes de lesa humanidad. Todos estos hechos, comentados con timidez por la prensa y la televisión, dieron lugar a una situación en la que era muy difícil seguir ocultando que hay víctimas de agentes estatales. Esta lectura nos permitió, con muchos esfuerzos y en medio de una situación muy difícil, hacer visible la situación de las víctimas de agentes estatales.

Creo que fue el comienzo de un proceso que ha ido permitiendo, paulatinamente, que las víctimas de actores estatales y crímenes de Estado sean reconocidas. La marcha es un reflejo significativo de la acción pública de las víctimas. Ha dado lugar a otros hechos más recientes que han



Iván Cepeda en una audiencia pública en San Onofre, denunciando vínculos entre política y paramilitarismo

Foto: Sebastian Rötters

ido permitiendo su visibilidad pública y, en consecuencia, mejores condiciones para reclamar y hacer cumplir el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

PBI: ¿Qué es el MOVICE y cómo nació?

IC: El Movimiento de Víctimas es básicamente un movimiento social. Esto significa que es una expresión de múltiples redes y expresiones: de organizaciones, de comunidades y de personas que se sienten en la condición de víctimas de agentes del estado y de paramilitares. El Movimiento de Víctimas es parte de un gran espectro de movimientos sociales y organizaciones colombianas que trabajan por transformaciones sustanciales en su sociedad, hacia un cambio del sistema político y socio-económico. Su especificidad es que hace de la justicia (tanto judicial como social) y de la verdad de los crímenes factores de democratización de la sociedad colombiana.

Creo que el Movimiento de Víctimas ha sido el sujeto político y social que ha permitido que las víctimas en Colombia, particularmente las de agentes del estado, comiencen a ejercer y reivindicar sus derechos, y a aspirar de una manera más realista a tener poder político. Pienso que esta dura realidad ha ido creciendo y ya no se puede ocultar ni despreciar. El movimiento va a ser un vector importante en esta lucha a través de la movilización,

pero también a través de la formación y de la conformación de un ideario político que permite a las víctimas las transformaciones a las que aspiran, junto con otros movimientos sociales.

PBI: ¿Qué retos y riesgos enfrenta el MOVICE?

IC: Básicamente, el movimiento social se está enfrentando a una maquinaria de criminalidad estatal que en Colombia tiene el añadido estar unida a una maquinaria proveniente del crimen organizado. Estamos ante una criminalidad de estado que, a diferencia de otra forma de criminalidad estatal en la que se persigue a los opositores y se silencia a sectores de la sociedad civil, además es una maquinaria muy involucrada con el narcotráfico. Esto implica que el poder esté más fragmentado y tenga múltiples formas de agresividad y de persecución. Es una maquinaria muy poderosa, con una infraestructura mediática que silencia, tergiversa y deforma gravemente su esencia. Es por ello que los retos que afronta el MOVICE son considerables. El movimiento los ha enfrentado desde un posicionamiento de construcción colectiva de oposición, con redes internacionales de apoyo, de la misma manera que lo hace el movimiento de Derechos Humanos. ●

1 70 de Colombia y 30 de diversas ciudades de Europa, Australia, EEUU y Canadá

Mataron a Ualberto

Presuntos paramilitares matan a líder de desplazados en la vulnerable comunidad de Caño Manso (departamento del Chocó), recién retornada a sus tierras.

Por: Jaime Martínez y Andreas Riemann, voluntarios de España y Alemania (2007-2009)

El 14 de octubre del 2008 viajamos con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) en su trabajo con las comunidades de Curbaradó. La zona estaba muy caliente debido a las recientes amenazas contra CIJP y las comunidades, y por el rapto que había sufrido un miembro de CIJP poco antes. La tenacidad de las comunidades y de CIJP hacía que siguiéramos acompañando en la zona. Pasamos el día en la zona humanitaria ubicada en la finca del campesino Don Petro en medio de la palma africana mientras nuestros acompañados estaban preparando algunas actividades. A las cuatro de la tarde nos avisaron de que acababan de matar a Ualberto Hoyos en la comunidad de Caño Manso. Dos hombres le habían disparado a quemarropa en pleno día delante de la gente.

Sabíamos que Ualberto era un reconocido líder de las comunidades de Curbaradó, y varios de nosotros lo conocíamos. Recordamos que hacía justo un año, una tarde de septiembre del 2007, había sufrido otro atentado. Un sicario intentó matarlos a él y a su hermano mientras estaban sentados en su casa, cerca de donde dos años antes habían desaparecido a Orlando Valencia, otro líder de las comunidades del Bajo Atrato. Ualberto y su hermano salieron con graves heridas de bala, se quedaron alejados de la zona por su recuperación física y por razones



El voluntario alemán Moritz Hartnagel con campesinos de Curbaradó

Hasta julio del año 1997 entre 80 y 90 familias habitaban la vereda Caño Manso y su fuente de subsistencia eran los cultivos de arroz, maíz, yuca, plátano, ñame y la pesca. En julio de este mismo año todas las familias campesinas salieron huyendo de los grupos armados. El 5 de agosto del 2007, después de diez años de destierro, un grupo de familias decidió regresar a su territorio.

homicidio del líder comunitario Orlando Valencia. Justamente un día antes de su asesinato, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia había llamado a Ualberto para que rindiera testimonio en el juicio que se adelanta contra dos reconocidos paramilitares por el homicidio de Orlando. Ualberto estaba protegido por medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el marco de ellas tenía un esquema de protección del Ministerio del Interior y de Justicia. Sin embargo, la semana de su asesinato los encargados de su seguridad no se presentaron a prestar el servicio con el argumento de que se les había dañado el vehículo blindado utilizado para su trabajo de acompañamiento y protección¹.

Nos tocó viajar a Caño Manso en motos y en la oscuridad. En el camino, nos cruzamos con el Ejército y con la Policía, quienes quisieron impedir nuestro trayecto. Finalmente, a las 8 de la noche, llegamos a Caño Manso. Nos dirigimos hacia el caserío,

«EL MENSAJE DE SU ASESINATO CAUSÓ UN MIEDO PROFUNDO ENTRE LA GENTE DE LAS COMUNIDADES».

de seguridad, pero Ualberto acababa de regresar a la zona del Curbaradó hacía unas semanas, con medidas de seguridad del Estado; escolta armado y carro blindado. El mensaje de su asesinato causó un miedo profundo entre la gente de las comunidades, y CIJP nos pidió acompañamiento para ir a Caño Manso inmediatamente.

Aunque hoy Caño Manso está ocupada con ganadería extensiva y explotación de madera, varias familias habían retornado a la vereda en octubre de 2008 y Ualberto jugó un papel importante en este regreso. Además, era testigo en procesos judiciales por apropiación ilegal de tierras en la región y en el caso de la desaparición y

►► que parecía abandonado. El silencio reinaba y se podía palpar el miedo en el ambiente, aunque no podíamos ver a nadie. La integrante de CIJP dijo en voz alta: «Hola buenas noches, ¿hay alguien?». Y escuchamos una respuesta que venía de una casa: «¿Justicia y Paz?». Al escuchar el «sí», la gente fue saliendo poco a poco de sus casas y así encontramos a la hermosa y admirable gente de Caño Manso. Nos contaron lo sucedido muy rápidamente y nos preguntaron si queríamos ver al difunto Ualberto. La mujer de CIJP nos miró, y con dificultad dijo, «supongo que sí». Un niño cogió la mano de Andreas y dijo: «Venga usted, aquí está el señor». Ualberto yacía boca arriba junto a seis velas que le velaban. Se podían ver algunos impactos de bala.

Unas cinco horas después de recibir el aviso llegó la policía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el Ejército. La Fiscalía recogió testimonios durante horas, los trámites demoraron toda la noche. Recogieron unos nueve casquillos de bala junto a Ualberto y se llevaron su cuerpo. Una señora de la comunidad



Un campesino frente a una de las zonas humanitarias

«LAS CANCIONES QUE ENTONABAN NOS HACÍAN COMPRENDER QUE LA DECISIÓN ERA CONTINUAR CON LA LUCHA Y HACERLO EN SUS TIERRAS».

cocinó café en la madrugada y después de servirnos presenciamos una nueva muestra de la integridad de la gente de las comunidades: aún con miedo y desconfianza, la señora se acercó a la policía y les invitó a un café. Fue una noche muy larga y extraña, nosotros dos jamás habíamos vivido una situación tan trágica y triste. La gente de la comunidad se reunía y se apoyaba mutuamente, recordando a Ualberto. Se leyó la Biblia y reflexionaron en común sobre las agresiones que estaban sufriendo y sobre si debían seguir hacia adelante. Las canciones que entonaban y las lecturas nos hacían comprender que la decisión era continuar con la lucha y hacerlo en sus tierras. Hablaban de conformar una Zona Humanitaria, que creemos que ya han logrado meses más tarde.

Al día siguiente, otros miembros de PBI nos relevaban, nos despedimos muy emocionados de la gente de la comunidad y de la miembro de CIJP. Nos había impresionado mucho con el apoyo que le brindó a la comunidad. Para Jaime fue la última vez que estuvo en Caño Manso con PBI y espera volver a ver esa gente. Esperamos que algún día se haga justicia con el asesinato de Ualberto, el atentado contra él y su hermano del año anterior, y la desaparición y asesinato de Orlando Valencia. Así como con los tantos atropellos que ha sufrido y sigue sufriendo la comunidad de Caño Manso y las otras comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó. El desplazamiento forzado les condenó al destierro durante muchos años. ●

1 «Informe 93: Curbaradó, Asesinato Ualberto Hoyos, Paramilitares asesinaron a líder de Curbaradó», Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 14 de octubre 2008



Niños del Chocó

Una vida robada

Acusado de rebelión, el miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Miguel Huepa, estuvo 16 meses en la cárcel. Además, durante su reclusión, su hijo fue víctima de una ejecución extrajudicial.

Por: Rob Hawke, voluntario de Gran Bretaña (2009)



Miembros de la ACVC

Estoy al lado de Miguel en la chalupa. Me está contando los caprichos del río, los hondos, los bajíos, los rápidos, los remolinos. Su alegría es evidente; interrumpe su narración para saludar con efusividad a un paisano que baja en otra lancha o para identificar una tortuga escondida en la orilla. Contempla con satisfacción los pastos verdes y las barrancas rojas del valle del río Cimitarra. Hace 16 meses fue privado de su libertad, y poco después de su liberación vuelve por primera vez a su tierra.

Miguel Ángel González Huepa, y de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), de la que es miembro y fundador. Presente en la chalupa también está Evaristo Mena, otro defensor de la ACVC quien compartió con Miguel varios meses de cautividad en el patio cuatro de la cárcel Modelo de Bucaramanga. Ahora, reunidos, están resumiendo los talleres de capacitación para el pueblo, interrumpidos por su encarcelación.

los inconvenientes con buen humor, a pesar de las caras nerviosas y preocupadas de su familia y compañeros. Ya en Puerto Nuevo Ité, Miguel explica a la comunidad aquella época con más detalles.

«La UT (centro de reclusión de Barrancabermeja) es peor que una cárcel; se meten personas que no pueden convivir en el mismo patio. Nosotros nos quedamos sin agua, sin ventilador, sin baño, como cerdos escocherados. Muchos vienen allí empedados, enbasucados, enmarijuados; andan con cuchillos».

Para Miguel, la vida dentro de las cárceles de máxima seguridad significaba miedo e inseguridad. Allí, «uno vivía a la espera de cualquier cosa, sea una puñalada, un garrotazo, un maltrato u otro.» Circulaban historias escalofrantes: que se introducía cianuro en el tinto, que le echaron gasolina a un preso y lo quemaron.

En octubre del 2008, Miguel fue trasladado de la cárcel Modelo a la cárcel Palo Gordo de Girón, después de disturbios entre la guardia y algunos presos. «Cayó el gas, barato y de sobra pa' todo el mundo, nadie estaba preparado para eso. Fue muy difícil, muy dura la situación, destruyeron las celdas, prácticamente todo, hasta tener las celdas cubiertas con papeles».

Sin embargo, la situación no mejoró en Palo Gordo, donde convivían «un revuelto de paramilitares, ladrones, viciosos de todas índoles, guerrilleros y también los de organizaciones que no tienen nada

«El solo hecho de estar detenido sin hacer nada ya es una tortura para uno. El asesinato de mi hijo fue una tortura sobre torturas».

Vamos rumbo a Puerto Nuevo Ité, donde vive su familia y donde Miguel fue detenido el 20 de enero de 2008, acusado de rebelión. El 20 de mayo de este año las autoridades judiciales lo absolviéron. Es el cierre de un círculo grande y doloroso en la historia de

La primera vez que vi a Miguel fue en una de las audiencias de su caso en la fiscalía de Barrancabermeja. Se sentaba con las manos esposadas, rodeado por policías, mientras el testigo relataba su historia. Me impresionó el temperamento de Miguel. Manejó todos



Evaristo Mena de la ACVC (derecha), reclamando la libertad de sus compañeros en 2008

▶▶ que ver con tantos problemas». Cuando había disturbios le obligaban a desvestirse completamente para realizar requisas íntimas. Compartiendo con su comunidad, Miguel describió la situación como «una indignidad para personas como nosotros».

No sólo tuvo que afrontar el miedo, sino también la soledad. «Sufriendo el encierro uno vive muchas consecuencias, acordarse de la comunidad, de la familia; y piensa muchas cosas, y esto hace que uno no esté bien».

Lo más duro fue la noticia que recibió después de haber cumplido apenas una semana en reclusión. Su hijo, Miguel Ángel González Gutiérrez, también defensor de derechos humanos, fue asesinado por el Batallón Calibío de la Brigada XIV y luego presentado como guerrillero muerto en combate. El incidente se presentó en el contexto de 16 ejecuciones extrajudiciales de campesinos en el Valle del Río Cimitarra documentadas por la ACVC entre 2002-2008, y presentadas ante del Relator Especial de las Naciones Unidas en Julio 2009. Hasta la fecha, no se ha visto ninguna condena. Según la ACVC, tanto las ejecuciones extrajudiciales como los montajes judiciales contra sus líderes son una estrategia para debilitar y desacreditar su trabajo¹. Miguel Junior también era de Puerto Nuevo Ité.

Durante el acompañamiento se realiza un evento en su memoria. Miguel, el padre, confiesa a la comunidad: «El solo hecho de estar detenido sin hacer



El voluntario británico Rob Hawke acompañando a la ACVC

liderando una versión emotiva de Un Millón de Amigos de Roberto Carlos.

Yo quiero creer la paz del futuro
quiero tener un hogar seguro.

Quiero a mi hijo pisando firme,
cantando alto, sonriendo libre.

Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar.

comunal en búsqueda del desarrollo de las comunidades. Si con la cárcel pensaron hacerme mal, pues yo creo que no, porque salí con más ganas de trabajar. Yo veía que era justo lo que hacíamos, entonces no tenemos que temerle a nadie».

Con la solidaridad de otros presos políticos las cosas venían mejorando. «Yo estaba allí estudiando quietico. Empezamos a cuadrar talleres entre los compañeros, a enseñar a la gente de la vida en el campo, y de lo que hacíamos como organización y mirar cuando saliéramos qué vamos a hacer por aportar a comunidades».

En reflexión para Miguel, la cárcel le sirvió como escuela. «Allá uno aprende a valorar a las comunidades, a valorarse a uno, y valorar la necesidad de trabajar cada día más por el progreso de la región».

Y ahora se encuentra otra vez en la labor que le da inspiración, libre para impulsar los proyectos de la ACVC y así tratar de garantizar una vida digna para el campesinado y para las futuras generaciones. Pero de momento está gozando de su libertad y del retorno a su querido campo.

«Salir de la cárcel, brincar hacia acá – muy bueno – ¡lógico! Es todo lo bueno del mundo». ●

¹ «Miguel Ángel González Gutiérrez», Colombia Nunca Más, www.movimientodevictimas.org

«AUNQUE ME ENCERRARON LA PARTE FÍSICA, NO ME QUITARON LAS IDEAS, LOS PENSAMIENTOS, LOS SUEÑOS, LAS CANCIONES».

nada ya es una tortura para uno. Eso fue una tortura sobre torturas».

«Toca mirar cómo uno va a acomodarse mentalmente para afrontar estas situaciones. Afortunadamente, lo que hice fue pensar que aunque me encerraron la parte física, no me quitaron las ideas, los pensamientos, los sueños, las canciones». Y cabe destacar la importancia de las canciones para Miguel. Los que le conocen están siempre pendientes de que salga algún verso de su boca. Canciones poéticas, de esperanza y solidaridad. Concluyó el memorial

La solidaridad, tanto dentro como afuera de la cárcel, fue una gran inspiración para los presos de la ACVC. «Hay que tener en cuenta todo el trabajo a nivel nacional e internacional. Tenemos que sentirnos bien porque no estamos solos, tenemos mucho apoyo».

La profunda convicción en su trabajo fue lo que le ayudó a seguir adelante. «Pueden investigar a lo largo y ancho del Magdalena Medio quién he sido – un luchador de acción

«Toda la vida privada ha sido escrutada»

Instituciones del Gobierno colombiano abusan de sus poderes contra los defensores. El defensor Alirio Uribe es una de las víctimas más acosadas de esta práctica.

Por: Jacobo Blickenov, voluntario de los EEUU (2008-9)



Alirio Uribe, una de las personas más perseguidas del Colectivo de Abogados, en la Sierra Nevada de Santa Marta, dando un taller a los indígenas Arhuacos

El día 21 de Febrero la revista Semana reveló que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) seguía haciendo interceptaciones y seguimientos ilegales a miembros de la oposición política, magistrados de la Corte Suprema y altos funcionarios del gobierno¹. Desde este día empezó el escándalo de las chuzadas. Esto sucedió dos meses después de que salieran las primeras noticias sobre las ONG de derechos humanos que también habían sido víctimas de

(MINGA), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el Padre Javier Giraldo, el abogado Jorge Molano y la periodista Claudia Julieta Duque, todos acompañados por PBI.

CCAJAR fue una de las organizaciones más afectadas por la llamada «Operación Transmilenio», dirigida específicamente

rabia porque toda la vida privada ha sido escrutada, pero lo que más impacta de todo este tema es que no se tiene claridad sobre qué era lo que se buscaba. Al final pueden ser varios objetivos: uno, para una guerra psicológica o amenazas, pero también se puede pensar que de pronto quisieran hacer algún atentado hacia algún miembro del Colectivo».

La primera entidad que llevó a cabo estas interceptaciones ilegales, el Grupo Especial de Inteligencia «G-3», fue creado en 2004 durante el tiempo en que Jorge Noguera fue director del DAS. CCAJAR lleva la parte civil de casos en contra de Noguera por homicidio y concierto para delinquir por su alianza con el paramilitarismo. El grupo «G-3» tenía órdenes de «destruir o neutralizar las actividades de las organizaciones de sociedad civil»⁴. Después venía el llamado Grupo de Observación y Verificación Nacional e Internacional, con tareas similares y el mismo coordinador, Fernando Ovalle. El DAS siguió estas operaciones de inteligencia por lo menos hasta 2008.

En este momento el caso está en las manos de la Fiscalía. Pero es probable que nunca vayamos a saber la totalidad de la información que tenía el DAS, porque el 22 febrero del 2009, el día que el nuevo director asumió el mando de este departamento, videos en posesión de la Fiscalía muestran a funcionarios del DAS sacando materiales de las oficinas de Inteligencia y Contrainteligencia⁵. Por ahora, lo que espera Alirio es «que haya una investigación y que se sancione a los responsables.» En agosto de 2009 la revista Semana informó que «a pesar de estar en medio del peor escándalo de su historia, el DAS continúa grabando ilegalmente a magistrados, congresistas y candidatos presidenciales»⁶. ●

LOS INFORMES DEL DAS TENÍAN LOS DETALLES MÁS ÍNTIMOS DE SU VIDA.

los seguimientos e interceptaciones del DAS. Incluidos en estas organizaciones están: el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), la Fundación Manuel Cepeda Vargas, la Asociación para la Promoción Social Alternativa

hacia Alirio Uribe, el presidente del Colectivo en ese entonces². Semana menciona que los informes del DAS tenían los detalles más íntimos de su vida, hasta qué tipo de comida le gustaba³. Alirio Uribe comenta que «se siente una

1 «El DAS sigue grabando», Semana, 21 de febrero de 2009

2 «Los del Siempre» Semana, 25 de abril de 2009

3 «Las fuerzas oscuras» Semana, 12 de junio de 2009

4 «Colombia: Vigilancia constante del CCAJAR y espionaje en contra del mismo y de otros defensores por parte del DAS», Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos, 23 de junio 2009

5 «El espionaje era peor», Semana, 25 de abril de 2009

6 «Increíble... siguen "chuzando"», Semana, 29 de agosto de 2009

Historias para aprender

Del miedo y del dolor, de la resistencia y del apoyo, hablan estas historias, estos trocitos de Colombia y de nosotros mismos.

Por: Carlos M. Beristain, Área Psicosocial (1996-2003)

Hace ahora quince años llegamos a Colombia. Entonces, al nombrar el proyecto de Colombia y el acompañamiento a las organizaciones de derechos humanos que empezaba a hacer PBI, sentía en el ánimo un enorme reto que comenzaba, lo sentía también en ese lugar del estómago donde se siente el miedo. Al apoyo psicosocial lo llamamos reconstruir el tejido social porque así nos habló la gente, porque se trata de acompañar y abrir espacios para retejer historias, gentes y vidas que quieren serlo. Un trabajo en el que aprendimos mucho de la gente, y donde los talleres, los encuentros, los espacios para el apoyo fueron abriéndose poco a poco a nuevos procesos, organizaciones y desafíos.

Las mujeres

Las mujeres de la OFP tejen servicios, reuniones, capacitaciones, y apoyos. Estas mujeres tienen también una red de comedores populares en Barrancabermeja. Hoy vamos a comer a uno de ellos. Ana y Josefa cocinan para las familias que tienen los niños y las niñas en la escuela, para la gente que no puede ir de compras porque está buscándose la vida. Ellas hacen cada día el milagro aquel de los panes y los peces. Después de que todo el mundo se ha marchado, llenan su propia hambre, lavan los trastos y hacen sus cuentas con números lentos y decimales. Los centavos que sobran de cada comedor van en la tarde a caminar: vuelven a donde salieron en forma de asistencia médica, talleres, servicios.

De vuelta a Urabá

Nos subimos a la chiva para San José Apartadó, un camión sacado de algún cuento lleno de colores. En medio de los bananos y la selva, la chiva camina como puede. Fuera hay bulla. La salsa y el vallenato se disputan las esquinas y llenan, de un lado y de otro como la gente, esta chiva que comienza a rodar. Hay un enorme bullicio, casi tan grande como el silencio de aquí dentro. Pasan por el retén paramilitar. Un joven de

ojos helados detiene la camioneta, otros dos hombres salen a los lados. Ojos que miran rostros, pero no miran a los ojos. Ni siquiera cruzan la mirada. Después de un tiempo que no cabe en los tres minutos que debieron pasar según mi reloj, y después de devolverle las llaves al chofer y de hablar y de hablar por un transmisor; después de que la respiración se hubiera quedado cortada en pedacitos, se van.

El balón y los indígenas

Explican el conflicto como un partido de fútbol. A un lado está el proyecto comunitario y todas las actividades que lo siembran y lo cuidan en medio de la guerra. Al otro el conquistador, el terrateniente y quienes nos matan y quienes nos dividen. Hay que jugar con estrategia. La resistencia no es al conflicto armado solamente. Ellos y ellas miran más lejos: es para defender el proyecto



Foto: Sebastian Niesar

¿Cuántas historias y dolores detrás de cada retrato de víctima?

Galería de la memoria de los desaparecidos

La habitación está llena de rostros transparentes colgados del techo por un hilo tenue y fuerte como los recuerdos. Los rostros a la altura del rostro. Hay un aire de respeto al entrar aquí. Cualquiera diría que es algo místico, casi religioso. Para mí, este silencio es otra cosa, es una parte del que tienen dentro de sí los familiares de los desaparecidos. Por eso esta galería no es una exposición, invita a acompañar. En la presentación, Gladys dice que la galería está llena de rostros no sólo para ponerle nombre a la ausencia o colores a su recuerdo o lugar a sus pérdidas. Ella quiere que la gente que la vea se pregunte, como las familias hacen cada día, ¿Dónde están?

de vida. Después alguien termina la explicación en el centro del problema: el balón, la disputa, es nuestra tierra.

En medio del combate

Piedad y Socorro están en este taller convertido en asamblea. Ciento trece personas bien apretaditas bajo este techo, bajo este sol. Tienen nombre de súplica o de ayuda, según como se mire. Aunque si las miras, te quedas en sus ojos. Trabajamos esta mañana representando la realidad que viven y que quieren cambiar. Esta vez se trata de una emergencia, después del último ataque de las FARC en Toribio. Es un combate que pone a la gente en medio de las balas. Una de las personas de la comunidad cae herida, todos se esconden y entonces, todos gritan sus nombres. ●

Trabajo Internacional - Grupos Nacionales

Los Grupos Nacionales de PBI son formados en los diferentes países del mundo para apoyar los principios de PBI, entre ellos, la no-violencia y el no-partidismo. Actualmente PBI cuenta con 17 grupos en Norte América, América del Sur, Europa y Australasia que respaldan la protección de las personas defensoras de derechos humanos que se lleva a cabo en los Proyectos de Colombia, Guatemala, Indonesia, México y Nepal a través de trabajo político, captación de voluntarios y recaudación de fondos.

Exposiciones para sensibilizar

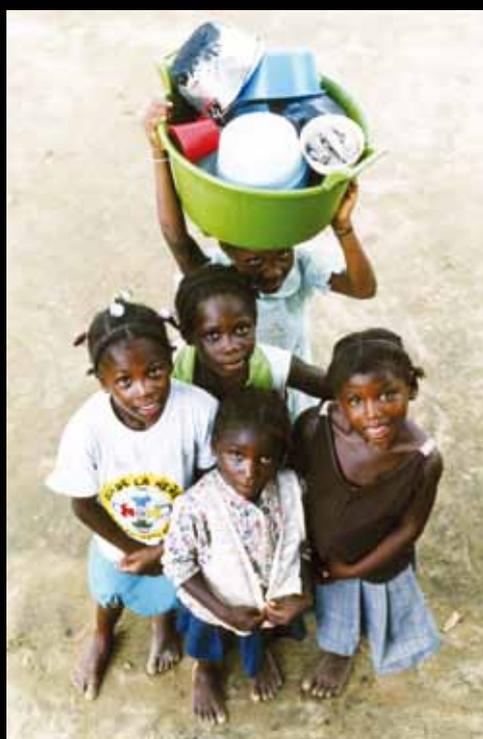
Por: Lise Corpataux, Grupo Nacional Suiza

En noviembre de 2008 el grupo nacional de PBI Suiza lanzó la exposición «Justicia y Paz». Este reportaje fotográfico realizado por Jorge Mata, antiguo voluntario de PBI Colombia, retoma algunos momentos simbólicos del proceso de desmovilización de los paramilitares enmarcado en la Ley 975, también conocida como «Ley de Justicia y Paz».

Hasta el momento, la exposición se ha presentado en cuatro ciudades suizas, atrayendo a un gran número de público y favoreciendo un mejor conocimiento del trabajo de PBI Colombia.

El lanzamiento de las exposiciones por parte de PBI Suiza fue iniciado y alentado por el éxito de «Frente a la Paz» («Face à la paix/Facing peace»), una exposición itinerante presentada por todo el país en 2007 y 2008. Mostraba la trayectoria de ocho antiguos voluntarios suizos que participaron en los cinco proyectos de PBI, e incluyó una presentación de PBI Colombia a través de la perspectiva de Manon Schick y Markus Bettler, que trabajaron en el proyecto en 2004 y 2005-2006 respectivamente. ●

Fotos: Jorge Mata, Surimages/IPA
- Niños de la cuenca del río Jiguamiandó (Chocó)
- Desmovilización del Bloque paramilitar «Elmer Cárdenas» en 2006
- Habitante de la cuenca del río Jiguamiandó, Chocó



Un premio a la paz

Por: Grupo Nacional Bélgica

El grupo belga de PBI, junto a la organización Broederlijk Denke, organizaron en septiembre de 2007 una rueda de prensa con motivo de la visita de Gildardo y Nohelia, dos representantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, a quien PBI acompaña, recibió el 20º Premio de la Paz en la ciudad de Aix-la-Chapelle. Esta distinción fue otorgada con motivo del trabajo diario que los miembros de la comunidad realizan en favor de la construcción de paz a pesar de las continuas amenazas que deben enfrentar. La ciudad italiana de Ovada siguió el ejemplo de Aix-la-Chapelle y les otorgó el premio «Testimone di Pace 2007».

Gildardo y Nohelia aprovecharon este viaje para visitar Bruselas, donde se entrevistaron con miembros del Parlamento y funcionarios de la Comisión Europea. Los representantes explicaron las graves dificultades que enfrentan en el contexto de «seguridad democrática» del actual presidente Álvaro Uribe. Viven situaciones difíciles; los campesinos son expulsados de sus casas y de sus tierras por grupos armados ilegales y personas inocentes son asesinadas. La comunidad de San José se esfuerza por brindar una respuesta no violenta al desafío que constituye la simple voluntad de seguir existiendo. Desafortunadamente, esto no les aleja del peligro. En diez años, de 1997 a 2007, 165 miembros de la comunidad fueron asesinados y se registraron más de 500 violaciones a los derechos humanos.

Durante la rueda de prensa también se informó sobre de la partida hacia Urabá de las voluntarias belgas Catiane Vander Kelen e Ina Vandenberge.



Foto: Jorge Mata/Surimages-IPA

Entre Mundos

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó recibe el Premio de Paz de Aachen (Alemania) en 2007.

Por: Alexandra Huck, voluntaria de Alemania



Representantes de la Comunidad de Paz en Alemania

Estuvimos en una sala grande, antigua, en Aachen, Alemania. La sala estaba repleta de gente. En un acto solemne fue entregado el Premio de Paz de Aachen a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Ahí arriba, en el estrado, se turnaron las personas que honraron la valentía y el compromiso de la Comunidad con la paz. Desde mi silla en el auditorio vi a Gildardo y Nohelia subir al estrado a recibir el premio.

¡Qué raro y qué bonito verles allí! Me acordé de Gildardo en botas de caucho y con machete. Me acordé de San José: casas simples de madera, el olor del cacao puesto a secar al sol, montañas verdes alrededor, cerdos andando por la calle del pueblo, los campesinos y campesinas llegando del trabajo en los cultivos.

En esta sala medieval, en Aachen, tanto los discursos desde el estrado como las miradas del público expresaron el respeto más profundo por este proyecto de paz. ¡Qué contraste con los recuerdos de San José!: Hubo días en que sentía la angustia entre la gente de la comunidad tan intensa que me parecía que podía hasta tocarla. Por fin, en Aachen, Gildardo

y Nohelia estuvieron en el ambiente que merecían: de reconocimiento, sin peligro, sin hostilidad. Recordé otras visitas de la Comunidad. Una en la que estaba sentada con Wilson y Brígida en un sofá en el Ministerio de Exteriores. La dificultad que tuvieron para hacerle entender al funcionario que sería ir en contra del Derecho Internacional Humanitario que la comunidad mejorara la carretera mano a mano con el Batallón de ingenieros del Ejército. Y otro momento de relajación de los dos visitantes, descubriendo el metro de Berlín, las máquinas para los tiquetes y las escaleras mecánicas.

Al final, siempre lo más duro: la despedida. Después de un último saludo ellos subieron al tren. ¿Cuántas veces en las despedidas no me entró este temor: no les pasará nada a ellos, como a tantos otros a quienes mataron? En Aachen, en medio de la fiesta, Gildardo y Nohelia estuvieron rodeados de gente interesada en ellos. Cuando fui a despedirme, sin embargo, otra vez la preocupación de si volvería a verles sanos y salvos estaba allí. Esta vez esperando que por lo menos el premio de paz les iba a dar un poco más de protección. ●

Dando a conocer lo innombrable

Expertos internacionales en derechos humanos entrevistan a víctimas y testigos de ejecuciones extrajudiciales para lograr que este problema sea conocido a nivel internacional.

Por: Emma Marshall, Grupo Nacional Gran Bretaña

Las recientes visitas al Reino Unido de Liliana Uribe, de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), pusieron de manifiesto las formas en las cuales Peace Brigades International puede apoyar a las personas defensoras de derechos humanos en su trabajo de incidencia a nivel internacional, y el impacto potencial que esto puede tener.

Cuando Liliana visitó por primera vez Gran Bretaña por invitación de PBI en 2005 participó en debates sobre impunidad con organizaciones no gubernamentales y asociaciones de juristas. Un tema clave de la discusión fueron las ejecuciones extrajudiciales. Debido a la preocupación del grupo sobre el problema, se desarrolló la idea de una misión internacional de abogados a Colombia.

Por invitación de Liliana y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, tuvo lugar en octubre de 2007 la Misión de Observación Internacional sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia. Participaron trece personas expertas en derechos humanos de Europa y los Estados Unidos, incluidos dos abogados británicos. Viajaron por todo el país, escuchando los relatos de 132 parientes de víctimas y testigos de ejecuciones extrajudiciales, y reuniéndose con organizaciones sociales y autoridades estatales.

Al mismo tiempo, produjeron un informe detallado e hicieron recomendaciones a sus respectivos gobiernos. Entre las recomendaciones se incluían: que los gobiernos plantearan el problema de las ejecuciones extrajudiciales con sus contrapartes colombianas, y que condicionaran la ayuda militar al cese de esta horrenda práctica. Los participantes británicos sostuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio de Defensa y la Foreign and Commonwealth Office (FCO).

Debido en buena parte a la Misión, el problema de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia llegó a las agencias de noticias en Europa, el Reino Unido y los Estados Unidos. Los participantes escribieron artículos, hablaron con políticos, con medios de comunicación y el público en general. PBI Reino Unido



Foto: Sebastian Rötters

Liliana Uribe, importante fuente de información sobre la situación de los derechos humanos en Colombia

utilizó el informe de la Misión para llamar la atención sobre el problema en encuentros con políticos y abogados. En la actualidad se está reconociendo como un problema serio.

Por esta época, el Congreso de los Estados Unidos bloqueó la autorización de más de US\$55 millones de ayuda militar a Colombia, debido a preocupaciones sobre ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos¹.

En marzo de 2008, PBI invitó a Liliana a regresar a Gran Bretaña. Esta vez consiguió una reunión de cuatro horas con el entonces Ministro de Estado para Latinoamérica, el Dr. Kim Howells. Habló asimismo en eventos en los parlamentos del Reino Unido y Escocia, y se reunió con numerosos parlamentarios, ONGs y juristas en el Reino Unido, España, Bruselas y Alemania.

Poco después de la visita de Liliana se publicó una declaración conjunta de tres personas expertas de las Naciones Unidas: la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Hina Jilani; el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Philip Alston, y el Relator Especial sobre la Independencia de Jueces

y Abogados, Leandro Despouy. Ellos estaban «profundamente preocupados por los últimos acontecimientos en Colombia, que indicaban el deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos en meses recientes, en particular por las ejecuciones, el hostigamiento e intimidación de activistas de la sociedad civil, líderes sindicales y abogados que representan a las víctimas»². Exigieron al Gobierno colombiano poner término a la impunidad y brindar protección a las personas que trabajan en la lucha por el respeto a los derechos humanos.

Esta declaración evidencia un aumento de la conciencia pública y la indignación sobre el problema, y sólo puede entenderse como el resultado del trabajo de hombres y mujeres como Liliana en la creación de redes internacionales, y en el desarrollo de una labor continua de incidencia. Se trata de un trabajo que PBI, con su estructura internacional, está perfectamente posicionado para apoyar. ●

1 Informe: «Colombia Amnesty International Report 2008», www.amnesty.org

2 Comunicado de prensa: «Expertos de las Naciones Unidas exigen poner fin a la violencia contra defensores de los derechos humanos en Colombia», Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, 30 de abril de 2008

Un grupo nacional en Latinoamérica

A partir de 2005 nace la idea, entre varios voluntarios, de crear una oficina de PBI en Argentina.

Por: Bettina Priotti, ex voluntaria de Argentina (2004-6)

2005: En una noche calurosa, en un balcón de la casa del equipo en Barranca, bajo un ventilador que no daba fresco ni espantaba a los zancudos, comenzamos a preguntarnos con Claudia, una compañera del equipo, por qué no existía un grupo de apoyo en toda Latinoamérica que pudiera difundir y promocionar las ideas de nuestra organización.

preparaba para el retorno a casa, en Argentina. Pensé en las charlas que podía dar para difundir el trabajo que realiza PBI en diversas partes del mundo, especialmente en Colombia que era lo que yo conocía. Seguíamos en contacto con aquellas personas que habían estado de acuerdo con la idea del grupo de apoyo en América Latina, más precisamente en mi país.

Rosario y Mendoza. Da charlas públicas y la entrevistan en radios. Establecemos relaciones con entidades de derechos humanos tan prestigiosas como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, HIJOS, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Instituto Espacio por la Memoria, Cátedra de DDHH que dicta Adolfo Pérez Esquivel y muchas más. En el mismo año, con Claudia de

HABLÁBAMOS DE AMPLIAR LA MIRADA MÁS ALLÁ DE ESE MUNDO DEL CUAL LLEGABA CASI TODO EL VOLUNTARIADO.

Y allí surgió la primera propuesta que mi compa llevó a la Asamblea General de PBI en 2005, aunque no de forma oficial. Y hablábamos de diversidad y de integración, de ampliar la mirada más allá de ese mundo occidental del cual llegaba casi todo el voluntariado. Así fue como fuimos formando un grupito de personas que estaba dispuesto a trabajar para conseguirlo.

2006: Año de seguir pensando y charlando con otra gente ya en Bogotá. Madurando la idea y viendo más cerca la posibilidad de exploración en Argentina.

2007: Luego de dos años y medio entre Barrancabermeja y Bogotá me

A mi salida llega una brigadista argentina-alemana, Débora, a la que la idea le parece buena, aunque yo ya no estaba en Colombia. Claudia seguía entusiasmado a la gente.

Doy algunas charlas en mi país, ingreso a trabajar en la Comisión Provincial por la Memoria, que a mediados de 2007 organiza un Encuentro Internacional de Pedagogía de la Memoria al que es invitada a propuesta mía Claudia Girón, que presenta una ponencia sobre la temática.

2008: Viene Débora a Argentina. Hace una gira, con apoyo del grupo de Alemania, por Buenos Aires, Córdoba,

vacaciones en Argentina aprovechamos sus conocimientos sobre PBI y terminamos de definir la viabilidad de un grupo de apoyo a PBI aquí en el Sur.

2009: Y así nos encontramos hoy trabajando Juan el belga, ex-brigadista que vive en Buenos Aires y trabaja en el SERPAJ como voluntario; Jorge, que acaba de llegar a Guatemala para cumplir un año en el equipo de PBI allá; Gabriela, profesora en la Cátedra de derechos humanos de Pérez Esquivel; Daniela, licenciada en Ciencias Políticas; Anabella, antropóloga y que postula para ir el año próximo a Guatemala; Gisela, Licenciada en Políticas Sociales y preparando su formación para ir a Colombia. Y la que escribe este informe, que ojalá les interese, Bettina ex voluntaria en Barrancabermeja y Bogotá 2004-2007.

Hemos hecho talleres de formación con el material de PBI en el interior del grupo. Hicimos una carta avalando el trabajo que Jorge realizará en Guatemala como voluntario y que firmaron organizaciones tan prestigiosas como: Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, SERPAJ (Adolfo Pérez Esquivel), CELS y el 28 de julio tuvimos nuestra primera reunión buscando apoyo político y financiero en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A la hora de publicar este artículo, el Consejo Internacional de PBI aprobó PBI Argentina como grupo asociado. Es el primer grupo PBI en América Latina. ●



Foto: Bettina Priotti

Integrantes del nuevo Grupo Nacional de Argentina: Jorge Palomeque, Daniela Marelli, Anabela Estol, Gisela Jaure, Juan D. W. y Gabriela Cauduro



Protegiendo defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia desde 1994

www.pbi-colombia.org

Retorno de las comunidades desplazadas a Cacarica (departamento del Chocó) en el año 2000



Foto: Julien Menghini

Peace Brigades International (PBI) es una organización no gubernamental, reconocida por la ONU, que mantiene un equipo de observadores/acompañantes internacionales permanentes en Colombia desde 1994. La misión de PBI es proteger el espacio de actuación de los defensores de derechos humanos, que sufren represión por su trabajo no violento en pro de los derechos humanos.

El equipo de PBI Colombia, siempre a petición local, permanece en el terreno, acompañando a personas y organizaciones amenazadas. Este trabajo de terreno se complementa con una labor importante de interlocución e incidencia con las autoridades civiles y militares, así como con organismos estatales, ONG, la iglesia, el cuerpo diplomático y organizaciones, para promover los derechos humanos y difundir información sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Si considera que la presencia de PBI es útil para proteger a las personas que trabajan por los derechos humanos, usted puede:

- Apoyarnos económicamente a título personal o a través de una entidad.
- Unirse a su grupo nacional PBI más cercano y así apoyar a la red internacional desde su ciudad.
- Aplicar para ser voluntario en uno de los proyectos de PBI.

Delegación de PBI Internacional
Development House
56-64 Leonard St.,
London EC2A 4JX, UK
Tel. (+44) 20 4065 0775
admin@peacebrigades.org

Proyecto PBI Colombia
Rue de la Linière, 11
1060 Brussels (Belgium)
Tel. (+32) 2609 4400
info@pbicolombia.org

Delegación de PBI en Colombia
Apartado aéreo 36157
Bogotá (Colombia)
Tel. (+57) 1287 0403
info@pbicolombia.org